

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

UNIDAD DE POSGRADO

**La interpretación del negocio jurídico: problemas normativos y
soluciones a la luz del código civil peruano**

TESIS

**Para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en
Derecho Civil y Comercial**

AUTOR

Francisco Solano Huamaní Mendoza

Lima – Perú

2013

Dedicatoria:

El presente trabajo de investigación lo dedico a mis padres Amador Huamani y Micaela Mendoza que en paz descansen, a mis hermanos, a todos mis hijos y a mi esposa Martha Herrera Javo, a esta última por haberme incentivado en todo momento.

“De todas las normas que el juez tiene que aplicar en la práctica de su profesión para dirimir los litigios de derecho, las más importantes son las *reglas de interpretación* de los *negocios jurídicos*. Todo aquel que ejerza el Derecho o se haya asomado a las colecciones de jurisprudencia, sabe que hay un sin número de litigios que sólo versan sobre el modo de *interpretar* el negocio jurídico o el contrato litigioso: *interpretado* el negocio jurídico, *interpretado* el contrato, queda *resuelto* el litigio”. DANZ, Erich.

RESUMEN

La presente investigación constituye un análisis crítico de las normas de interpretación del negocio jurídico, contenido en el Libro Segundo del Código Civil vigente; esto es, partiendo de la problemática de la incoherencia y falta de unidad entre las normas civiles para una adecuada normatividad interpretativa del negocio jurídico, se llega a la conclusión de proponer la modificación de los artículos del referido cuerpo legal, en la parte pertinente.

Desde el punto de vista de la doctrina, se estudia los sistemas o teorías de la interpretación del negocio jurídico; y desde el punto de vista del derecho comparado, se observa la teoría o sistema interpretativo adoptado por los países; y finalizando con el análisis crítico de los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil.

SUMMARY

This research is a critical analysis of the rules of interpretation of the legal business, contained in the Second Book of the Civil Code, that is, starting from the problem of inconsistency and lack of unity among the civil rules for proper interpretation of regulations legal transaction is concluded to propose the amendment to the Articles of that body of law, in relevant part.

From the point of view of doctrine, we study systems or theories of interpretation of the legal business, and from the standpoint of comparative law, there is the theory or system of interpretation adopted by the countries, and ending with the critical analysis of Articles 168, 169 and 170 of the Civil Code.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación refiere a un tema de relevancia normativa y aplicativa como lo es “la interpretación de los negocios jurídicos”. Es frecuente en la judicatura nacional incurrir en errores en la apreciación de los negocios jurídicos que determinan decisiones jurisdiccionales ineficaces y contrarias al espíritu del ordenamiento jurídico nacional. Por ende, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de cubrir aquellos vacíos existentes en el estudio de la interpretación del acto o negocio jurídico con el único propósito de permitir una mejor aplicación de los criterios y reglas de hermenéutica jurídica.

La interpretación, entendida como la actividad dirigida a explicar o declarar el sentido de algo, ya sea de un texto o de una conducta, es un quehacer consustancial al hombre de derecho. Los operadores jurídicos permanentemente interpretan leyes, actos o negocios jurídicos (contratos), relaciones jurídicas, conductas o comportamientos, con la finalidad de determinar su significado o alcance y atribuirles los respectivos efectos jurídicos. Sin embargo, esta actividad de interpretación no siempre es pacífica, pues muchos de ellas son cuestionables y atribuibles a los operadores jurídicos encargados de la interpretación o a la inadecuada y deficiencia técnica en la legislación, y precisamente este último aspecto es materia de nuestra investigación en el área de actos o negocios jurídicos.

En tal sentido, la presente investigación trata sobre el análisis teórico doctrinaria y jurisprudencial de la interpretación de los actos o negocios jurídicos contemplados en nuestra legislación civil; para cuyo efecto la Tesis se ha desarrollado dentro del marco del *“Proyecto de Investigación Teórico-Dogmático”*; esto es, conforme al esquema aprobado por la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; asimismo, la estructura de la tesis se encuentra adecuado a lo establecido en el Anexo 2 de la *“Directiva para el*

Procedimiento de la Elaboración de la Tesis para la Obtención del Grado de Magíster o Doctor” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado por Resolución Directoral N° 080-EPG-2010.

El desarrollo de nuestra investigación contiene cinco capítulos; siendo el primer capítulo correspondiente a la introducción que señala la situación problemática, formulación del problema, justificación teórica y práctica y objetivos de la investigación.

El segundo capítulo que corresponde al marco teórico; donde en la parte del marco filosófico o epistemológico de la investigación, después de desarrollar los conceptos teóricos y la distinción de la interpretación de la norma jurídica y del negocio jurídico, se desarrolla el objeto y la naturaleza de la interpretación del negocio jurídico; seguidamente se señala las clases y métodos de interpretación del negocio jurídico; luego se desarrolla en las bases teóricas, las teorías o sistemas de interpretación del negocio jurídico, análisis en la legislación comparada, en la legislación civil peruana, influencias de la situación socio cultural en la interpretación y señalando algunas categorías en el marco teórico.

Luego de señalar la metodología utilizada en la investigación; en el cuarto capítulo se desarrolla el análisis, interpretación y discusión de resultados, las pruebas de hipótesis y presentación de resultados; en el capítulo quinto como propuesta para la solución del problema, presenta un proyecto de ley modificatoria; y finalmente se presenta conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos jurisprudenciales.

Esperamos que la presente investigación contribuya en la regulación adecuada de las normas de interpretación del acto o negocio jurídico de nuestra legislación civil, y de esa forma dar solución las incoherencias o falta de unicidad entre sus reglas que se anotan en el presente estudio.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN.

1.1. Situación Problemática.....	8.
1.2. Formulación de Problema.....	16.
1.3. Justificación Teórica.....	17.
1.4. Justificación Práctica.....	17.
1.5. Objetivos.....	18.
1.5.1. Objetivo general.	
1.5.2. Objetivos específicos.	

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación.....	19.
2.2. Antecedentes de la Investigación.....	77.
2.3. Bases Teóricas.....	79.

CAPITULO 3: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Nivel de Investigación.....	135.
3.2. Método y Diseño de la Investigación.....	137.
3.3. Procedimiento Metodológico.....	138.
3.4. Técnicas de Investigación.....	139.

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados.....	140.
4.2. Pruebas de Hipótesis.....	152.

4.3.	Presentación de resultados.....	159.
------	---------------------------------	------

CAPITULO 5: IMPACTOS.

5.1.	Propuesta para la solución del problema.....	167.
5.2.	Costos de implementación de la propuesta.....	170.
5.3.	Beneficios que aporta la propuesta.....	171.

CONCLUSIONES.....	173.
--------------------------	-------------

RECOMENDACIONES.....	175.
-----------------------------	-------------

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA.....	177.
--------------------------------------	-------------

ANEXOS.....	186.
--------------------	-------------

❖ <u>CASO N° 1</u> : Casación N° 452-2007- Lima.....	187.
❖ <u>CASO N° 2</u> : Casación N° 1757-2009- Arequipa	191.
❖ <u>CASO N° 3</u> : Casación N° 2587-2005-Lima.....	194.
❖ <u>CASO N° 4</u> : Casación N° 2080-2001- Lima	196.
❖ <u>CASO N° 5</u> : Casación N° 881-99- Ica	198.
❖ <u>CASO N° 6</u> : Exp. N° 53822-97- Lima.....	199.
▪ Exp. N° 53822-97-Lima.....	200.
▪ Casación N° 765-99-Lima.....	201.
❖ <u>CASO N° 7</u> : Resolución N° 252-98-ORLC/TR.....	203.
❖ <u>CASO N° 8</u> : Resolución N° 212-98-ORLC/TR.....	206.

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN¹

1. 1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La presente investigación tiene por fin describir y fijar posición respecto de un tema sumamente controvertido como es la interpretación del negocio jurídico a la luz de nuestro Código Civil de 1984. Tal como podemos apreciar en el contenido normativo de dicho cuerpo de leyes se han normado, principalmente, tres artículos básicos de interpretación del negocio jurídico, las cuales se encuentran contenidos en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil. Pero además de ello, según el profesor Fernando Vidal Ramírez², se consideran también como normas de interpretación los artículos 1401, 1361 y 1362 del Código Civil; sin embargo nosotros consideramos que a lo largo del Código Civil encontramos otras reglas de interpretación, como los artículos 1043 y 2055 del Código Civil, que no siempre guardan coherencia o concordancia con las normas de interpretación del negocio jurídico.

En estos artículos se han establecido principios y reglas para la interpretación de los actos jurídicos en nuestro país, pero de modo muy desordenado, lo cual por no guardar cierta coherencia y correcta

¹ La Presente Tesis es una Investigación **Teórico- Dogmático**, cuyo desarrollo se ha adecuado a la Estructura establecido en el Anexo 2 de la *“Directiva para el Procedimiento de la Elaboración de la Tesis para la Obtención del Grado de Magíster o Doctor”*, aprobado por Resolución Directoral N° 080-EPG-2010.

² VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), *“El Acto Jurídico”* (8ª edición), Lima-Perú, Editorial Gaceta Jurídica, p. 353: *“En conclusión, el Código Civil no tiene más normas de interpretación que las reseñadas y salvo respecto de la interpretación de los contratos, la hermenéutica de la generalidad de los actos jurídicos debe hacerse sobre la base de las normas de los artículos 168, 169 y 170, incluyendo los testamentos”*

sistematización técnica es controversial en nuestra legislación civil, así como también desde el punto de vista de la doctrina y del derecho comparado.

Pero para el estudio y análisis de esta problemática es necesario previamente determinar la naturaleza jurídica de las normas básicas de interpretación del negocio jurídico; esto es, determinar si los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil son normas de carácter imperativo (obligatorias) o son simplemente normas orientadoras (facultativas) para los operadores del derecho.

Esclarecer este tema es de suma importancia para nuestra investigación, puesto que la argumentación al respecto no es pacífica sino controversial, tanto en la doctrina nacional como en la doctrina extranjera. En todo caso, es necesario precisar la posición adoptada en nuestra legislación civil para poder afirmar o negar el carácter vinculante de las normas de interpretación contenidas en nuestro Código Civil, tanto más, cuando el acto jurídico constituye el género frente a otras especies como el contrato.

1.1.1. Artículos del Código Civil sobre interpretación del negocio jurídico.

Según nuestro ordenamiento civil vigente, existen tres normas de interpretación de los actos o negocios jurídicos, las mismas que se encuentran ubicadas en el “*Título IV: Interpretación del Acto Jurídico*” del “*Libro II: Acto Jurídico*” del Código Civil; cuyos artículos son el 168, 169 y 170 del referido Código. En tal sentido, a continuación haremos algunas precisiones del contenido de la normatividad, señalando algunos problemas en su interpretación.

Asimismo, conforme a la regulación de estos artículos se determinará el sistema o teoría de la interpretación del acto o negocio jurídico que nuestra legislación civil ha adoptado, teniendo en cuenta los sistemas o teorías de interpretación que informa la doctrina y el derecho comparado.

a) Artículo 168 del Código Civil:

El artículo 168 establece que: *“El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”*.

Este artículo se sustenta en la Teoría objetiva o declaracionista de la interpretación de los actos o negocios jurídicos, y fue desarrollada, como refiere el maestro Fernando Vidal Ramírez (1934)³, por el movimiento pandectista de la segunda mitad del siglo XIX, en los prolegómenos del Código Civil alemán y sostenida e impulsado por el jurista alemán Erich Danz y la doctrina alemana, pese a la posición subjetivista que adoptó el BGB. Se funda en criterios opuestos a los de la Teoría de la Voluntad y, por lo tanto, conduce a opuesta consecuencias. Surgió así la teoría de la declaración que planteó la prevalencia de la voluntad exteriorizada sobre la voluntad interna, pues esta, en sí misma, no tiene significado jurídico ya que la voluntad sólo produce efectos luego de su exteriorización. Para esta teoría, el Derecho sólo debía tomar en consideración lo manifestado por el sujeto, que es lo que lo vincula, pues el que recibe la voluntad de un sujeto tiene el derecho de creer que corresponde a su voluntad interna y la ley debe ampararle esa presunción.

Por tanto esta teoría privilegia a la declaración de voluntad considerando que lo exteriorizado es protegido de modo especial por tener una *realidad concreta* que permite conocer las intenciones del sujeto. Esta tesis considera que las voluntades no manifiestas son inútiles y no pueden determinar efectos jurídicos. Del mismo modo reconoce al principio de la buena fe, que el sistema objetivo alemán reconoce dos aspectos: la creencia en lo declarado y la confianza en el sentido de la declaración.

³ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), *“El Acto Jurídico”* (8ª ed.), Ob., Cit., Pág. 339. VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2007), *“La Interpretación del Contrato en el Derecho Peruano”*; en: VV AA, Carlos Alberto Soto Coaguila (Director), *“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”*, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1646.

En el artículo cuando señala *“de acuerdo con lo que se haya expresado en él”*, parecía referirse como única forma de manifestar la voluntad, que es en forma expresa, lo cual no ayuda mucho, mas por el contrario confunde en el momento de interpretar los actos jurídicos.

Por otro lado, cabe señalar que el artículo alude al principio de buena fe en la interpretación de los negocios jurídicos, lo cual significa que no se está refiriendo a la buena fe subjetiva, sino a la buena fe objetiva, caracterizada por el comportamiento correcto del sujeto que es percibido por la contraparte o por los demás (buena fe, lealtad, probidad, confianza o comportamiento).

b) Artículo 169 del Código Civil:

El artículo 169 que señala: *“Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”*.

La regulación de este artículo corresponde a lo que la dogmática civil se refiere a la interpretación sistemática (totalidad o interdependiente), y que según esta normatividad se reconoce que las cláusulas normativas establecidas por las partes son resultado de un mismo núcleo por lo que si una es ambigua o dudosa entonces debe ser resuelto el problema mediante el análisis del conjunto puesto que todas reconocen una misma fuente.

De acuerdo con este principio, toda cláusula dudosa o poco clara debe ser interpretada de manera tal que guarde consistencia con todo el conjunto del acto jurídico; esto es, que lo que se interpreta de la cláusula dudosa es su significación en forma coherente con el conjunto del texto del negocio, tomando acto jurídico como una unidad indivisible.

En este sentido, una cláusula aparentemente dudosa debe ser contrastada con las restantes cláusulas del negocio jurídico, a fin de eliminar dicha duda, para determinar cuál es su significación y qué efectos debe producir.

c) Artículo 170 del Código Civil:

El artículo 170 regula: *“las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y objeto del acto”*.

El artículo en mención se refiere a lo que la doctrina denomina interpretación finalista, y que de acuerdo con esta regla, la labor de interpretación debe estar orientada a buscar o preferir, entre todas las interpretaciones posibles, aquella que sea consistente con la finalidad del contrato o de la cláusula materia de interpretación.

El precepto señalado nos indica que en caso de existir dualidad de significados o contenidos semánticos contrarios a las estipulaciones o normas jurídicas privadas establecidos por las partes, entonces debemos privilegiar aquel acorde con la causa o fin económico del negocio y la naturaleza del mismo. Además este artículo puede ser leído de modo integral con los anteriores pero sería mucho más provechoso proponer un criterio similar de base para evitar situaciones de conflicto.

1.1.2. Otros artículos del Código Civil sobre interpretación del negocio jurídico.

Además de los artículos de interpretación regulados en forma específica en el ordenamiento civil para los actos y negocios jurídicos, encontramos otros artículos de interpretación que no se encuentran ubicados en el Libro II de Acto Jurídico, sino en otros libros, pero sé que se refiere de alguna forma a la interpretación del acto o negocio jurídico.

Por lo expuesto, a continuación al señalar los artículos, brevemente explicaremos el contenido de cada una de ellas en el que se resalta nuestra posición.

a) Artículo 1361 del Código Civil.

El artículo 1361 establece que “los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”.

El acto jurídico viene a ser el género, mientras el contrato es la especie, tal como señala Francesco Galgano (1933-2012)⁴, lo cual significa que cuando se regula sobre la interpretación del acto jurídico, se entiende que dicha regulación es para todos los actos o negocio jurídicos, incluyendo los contratos.

Por tanto, en el presente artículo, la expresión “*que los contratos son obligatorios en cuando se haya expresado en ellos*”, guarda concordancia y coherencia con la regulación del artículo 168 del Código Civil (“*El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él*”), puesto que la regulación de ambas normas representa al sistema objetivo de la interpretación; sin embargo, en la segunda expresión cuando se refiere al contenido de un contrato, al regular la presunción de la “*voluntad común de las partes*”, se está encuadrando dentro de la concepción del sistema subjetivo o de voluntad, en contraste con el artículo 168 del Código Civil que obedece al sistema objetivo de la interpretación.

Precisamente, esta incoherencia y falta de sistematización adecuada de las regulaciones de la interpretación del acto o negocio jurídico, aunado a los pronunciamientos jurisprudenciales, constituyen uno de los problemas que nos motiva el análisis e investigación del presente estudio, para luego

⁴ GALGANO, Francesco (1999), “*El Crepúsculo del Negocio Jurídico*”. En: VVAA, BETTI, Emilio y Otros (2001), “*Teoría General del Negocio Jurídico*” (4 estudios fundamentales), Lima-Perú, ARA Editores, Pág. 79; afirma “Aquí el contrato y el hecho ilícito son concebidos como especies de géneros más amplios: del género del acto jurídico, el primero; del género del hecho jurídico, el segundo”.

proponer la modificación de algunos artículos de interpretación en el Código Civil.

b) Artículo 1362 del Código Civil.

El artículo 1362 señala que *“los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”*.

La buena fe no solo está estipulado en la negociación, celebración y ejecución de los contratos sino también en la interpretación de los actos jurídicos, lo cual implica la importancia de concordar el artículo 1362 con el artículo 168 del Código Civil.

Si *“los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de común intención de las partes”*; ello significa que en caso de conflicto en cuanto a la interpretación de sus cláusulas, debe indagarse cuál ha sido la *“común intención de las partes”*; en consecuencia este modo de interpretación se encuentra dentro del sistema o teoría subjetiva o voluntaria, en contraste con sistema objetivo o declaracionista que estipula el artículo 168 del Código Civil.

Nuevamente reiteramos, que no debe perderse de vista, tal como la doctrina informa, que el acto o negocio jurídico viene a ser el género, mientras el contrato la especie.

c) Artículo 1401 del Código Civil.

El artículo 1401 regula que *“las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las parte, se interpretan, en caso de duda, a favor de la otra”*.

Este artículo señala una forma distinta de interpretar los contratos, cuando se trata que el contrato ha sido redactada por una de las partes, lo cual no

se tiene regulado en los articulados del libro del acto jurídico, pese a que por la naturaleza de la regulación genérica de los actos o negocios jurídicos, de este tipo de normatividad debería estar en el Libro II: Acto Jurídico del Código Civil.

d) Artículo 1531 del Código Civil.

Este artículo dispone que *“si el precio de una transferencia se fija parte en dinero y parte en otro bien, se calificará el contrato de acuerdo con la intención manifiesta de los contratantes, independientemente de la denominación que se le dé. Si no constan la intención de las partes, el contrato es de permuta cuando el valor del bien es igual o excede al del dinero; y de compraventa, si es menor”*.

En el presente artículo se toma en cuenta “la intención de las partes”; esto es, que se adecua a la teoría subjetiva o voluntaria de la interpretación, privilegiando “*la intención de las partes*” en los contratos. Luego, el artículo en cuestión, regula en forma categórica que “*si no constan la intención de las partes*”, el contrato debe interpretarse como de permuta.

Como puede advertirse, la regulación del artículo de encuadra dentro de la concepción subjetiva o voluntaria.

e) Artículo 2055 del Código Civil

Este artículo señala que *“las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan”*.

El citado artículo establece que *“las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenece”*; esto es que puede ser el sistema objetivo, subjetivo o mixto, dependiente a que sistema pertenece el referido derecho extranjero, lo cual al no estar regulado, como

corresponden, en el Libro del Acto Jurídico adolece de unicidad en cuando a las normas de interpretación.

1. 2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.2.1. Problema Principal:

El problema se determina de la siguiente manera: *“tenemos artículos que reconocen principios de sistemas interpretativos diversos: objetivo o declaracionista, subjetivista o voluntarista y mixto o dual; faltando coherencia y unicidad entre sus reglas. Además existen vacíos que deberán ser cubiertos con reglas adicionales y normas dispersas que deberán ser integradas para evitar la existencia de una duplicidad (de reglas) que generan problemas de vaguedad y antinomias”*.

¿Existe coherencia y unidad entre los sistemas y reglas de interpretación del negocio jurídico establecido en el Código Civil peruano?

1.2.2. Problemas Secundarios:

Este problema principal nos conduce a las siguientes interrogantes:

- a) ¿Qué sistemas o reglas de interpretación emplean los magistrados para interpretar los negocios jurídicos celebrados entre las partes en conflicto?.
- b) ¿El sistema de interpretación del negocio jurídico establecido en el Código Civil peruano es la más adecuada?

Interrogantes al que se pretende dar una respuesta y luego proponer, mediante un proyecto de ley, una alternativa de solución que implique la

modificación de los artículos de la interpretación de los actos o negocios jurídicos contenidos en el Código Civil vigente.

1. 3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.

La presente tesis, tiene como justificación teórica, la de proponer una solución normativa a la situación conflictiva que se presenta en la interpretación de los actos o negocios jurídicos; esto es, establecer ciertas reglas de interpretación que sean claras, uniformes y coherentes, bajo la adopción de un determinado sistema o teoría de interpretación, acorde con realidad social peruana. Problema que se venía presentando por la carencia de normas jurídicas claras, uniformes y coherentes que determinen los principios, criterios y reglas de un determinado sistema interpretativo, sea este: subjetivo, objetivo o mixto.

En tal sentido, la justificación teórica se materializará con la propuesta normativa que se presenta en la regulación interpretativa de los actos o negocios jurídicos, bajo un determinado sistema o teoría de interpretación.

1. 4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.

Como justificación práctica tenemos la necesidad de dar solución en la administración de justicia al problema de la interpretación de los actos o negocios jurídicos, para cuyo efecto al culminar la investigación se da una propuesta modificatoria de los artículos que regulan sobre la interpretación de los actos o negocios jurídicos, las mismas que al estar ubicadas en el Libro del Acto Jurídico del Código Civil, guardan coherencia y unicidad entre las mismas y son aplicables a todos actos o negocios jurídicos; por tanto, siendo dichas normas de carácter vinculante, son obligatorios su

observancia para todos los operadores jurídicos en la solución de las controversias que se sometan a su jurisdicción.

La aplicación de dichas normas interpretativas permitirá que los operadores jurídicos, especialmente los jurisdiccionales, produzcan a nivel nacional, sentencias jurisprudenciales con pronunciamientos uniformes y coherentes.

1. 5. OBJETIVOS.

1.5.1. Objetivo General.

Determinar si los sistemas y reglas de interpretación, establecidos en el Código Civil peruano, son los más adecuados para solucionar los problemas de interpretación de los negocios jurídicos.

1.5.2. Objetivos Específicos.

1. Determinar los sistemas o reglas de interpretación del acto o negocio jurídico adoptado en nuestro ordenamiento civil.
2. Evaluar y proponer los sistemas o reglas de interpretación del acto o negocio jurídico en el Código Civil.

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO.

2.1. MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN⁵

2.1.1. Introducción.

En este capítulo trataremos sobre Interpretación del negocio jurídico como teoría del conocimiento; esto es, partiendo de la interpretación de la norma jurídica y del negocio jurídica como una forma de distinción entre ambos, se llegará a la discusión doctrinario de las teorías o sistemas de interpretación del negocio jurídico; luego, corresponde analizar el objeto de interpretación del negocio jurídico para diferenciar respecto al objeto de interpretación de la norma jurídica; seguidamente es importante también analizar, desde el punto de vista doctrinario, la naturaleza de las normas de interpretación del negocio jurídico, señalando la postura adoptada en la doctrina nacional; y finalmente señalar las clases de interpretación del negocio jurídico.

Ahora bien, una vez señalada el contenido del presente capítulo, iniciaremos nuestro análisis, dando a continuación las nociones generales que se tiene sobre el término de interpretación; luego analizaremos los diversos sistemas o teorías de la interpretación del negocio jurídico.

Etimológicamente hablando, el verbo “Interpretar” proviene de la voz latina *interpretare o interpretari*⁶, que significa explicar, desentrañar el sentido, y es

⁵ El estudio del conocimiento científico es el tema de la disciplina filosófica llamada Epistemología. (BARRIGA HERNÁNDEZ, Carlos, “**Epistemología**”, Lima Perú, UNMSM 2006, Pag.23).

en esta acepción como también lo considera el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española⁷, que la explicita refiriéndola a “*explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto*”; esto es de textos faltos de claridad. De ahí que el término *Interpretatio* era la interpretación o explicación de un texto legal o de algún pasaje de un jurisconsulto; más estrictamente, el comentario sobre fragmentos de los jurisconsultos clásicos y de las constituciones imperiales inserto en la *lex romana visigotharum* (ley romana de los visigodos)⁸.

La interpretación es un término que se presta a multiplicidad de usos, que varían según el objeto que se desea interpretar, dado que podemos interpretar un comportamiento, una obra de arte, obra literaria, una pieza musical, de un sueño⁹, una pintura, un texto religioso como la Biblia¹⁰, norma jurídica, un acto jurídico, etc. En otros términos podemos decir que interpretar es “explicar, declarar el sentido de una cosa y principalmente, de textos faltos de claridad. Representar una obra. Ejecutar una pieza musical.

⁶ COUTURE, Eduardo J., “**Estudios de Derecho Procesal Civil**”, Tomo III. Ediciones Depalma. Tercera edición, 1979, Buenos Aires – Argentina, Pág., 15. Este jurista uruguayo nos dice que “*la voz latina interpretari deriva de interpres que significa mediador, corredor, intermediario*”. VIDAL RAMIREZ, Fernando (2011), “**El Acto Jurídico**”, Lima-Perú, 8va. Edición, Editorial Gaceta Jurídica, Pág., 335. DÍEZ PICAZO, Luís (1973) “**Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho**”, Madrid-España, Editorial Ariel, Pág. 225; por su parte este autor explica “*que la locución latina “inter-pres” procede del griego “meta fraxtes” e indica al que se coloca entre dos que hablan para hacer conocer a cada uno de ellos lo que el otro ha dicho o está diciendo. En este amplio sentido, la palabra se utiliza hoy entre nosotros para designar al traductor que se sitúa entre dos personas que hablan lenguajes o idiomas distintos*”. GARCÍA TOMA, Víctor (2007), “**Introducción a las Ciencias Jurídicas**”: Lima- Perú, 2da. Edición, Jurista Editores, Pág. 385; este autor refiere la expresión *interpretación* procede la voz latina *interpretari*, que significa “*venir en ayuda de algo o de alguien*”. Esta acepción en su momento, se justificaba, ya que los pontífices y, posteriormente, los jurisconsultos intervenían en auxilio de las personas, develando – los primeros- lo venidero por la “*lectura*” de la entrañas de los animales, o brindando – los segundos- los alcances de un texto jurídico.

⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). “**Diccionario de la Lengua española**” (Tomo II). Madrid España, 22º Edición, Editorial Espasa Calpe S.A. Pág. 1293.

⁸ CABANELLAS, Guillermo (1992). “**Repertorio Jurídico de Principios Generales del Derecho, Locuciones, Máximas y Aforismos Latinos y Castellanos**”. Buenos Aires – Argentina, 4ta. Edición ampliada, Editorial Heliasta SRL., Pág. 309

⁹ Como por ejemplo “**La Interpretación de los Sueños**” de Sigmund FREUD

¹⁰ “*Para entender la Biblia, no podemos fiarnos de cualquier predicador que la tira por su lado, Debemos recibirla tal como la entiende la Iglesia católica, que fundaron los apóstoles y que siempre se fijó en sus normas*” (La Biblia, edición XXIII 1995, España, editorial Verbo Divino, Pág.5).

Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad”¹¹. Por tanto interpretar en términos generales es desentrañar el sentido de algo o encontrar sentido de algo.

Podríamos concluir en concreto que la interpretación está dirigida a *explicar o declarar el sentido de algo, que puede ser de un texto o de una conducta*.

2.1.2. La Interpretación de la Norma Jurídica (Ley).

Refiriéndonos a la norma jurídica, podemos señalar que, establecida la norma jurídica, incumbe a todos los habitantes y en particular a los funcionarios públicos y jueces la obligación de aplicarla. Pero la aplicación de la norma exige su previa interpretación para determinar si el caso concreto que se examina debe incluirse o no en aquella. Esta tarea es la función más alta del juez y la más ardua por las dificultades graves que se presentan al establecer el alcance del precepto jurídico, sobre todo cuando resulta oscuro o ambiguo; de ahí la importancia de la interpretación de la norma jurídica, lo que a continuación analizaremos.

El jurista alemán Werner Flume (1908-2009)¹² señala que cuando Savigny se refería a la interpretación de la ley, decía que la finalidad de la interpretación es como *“hacer surgir ante nuestra consideración el pensamiento vivo consignado en la letra muerta”*. Esto es que se describe la esencia de la interpretación, que se ocupa de comprender la manifestación de un pensamiento; por lo que la meta de la interpretación es declarar qué pensamiento se ha tenido.

¹¹ HINESTROSA, Fernando (2007) **“Presentación”**. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. XXXI.

¹² FLUME, Werner (1998), **“El Negocio Jurídico”**, Madrid España, Parte General del Derecho Civil, Tomo Segundo, 4ta. Edición no modificada, Traducción: José María Miquel Gonzales y Esther Gómez Calle, Fundación Cultural del Notariado, Pág. 352.

Luego, Flume (1908-2009)¹³ llega afirmar en forma categórica *“Que la tarea principal de la interpretación es, tanto hoy como ayer, la comprensión del sentido de la Ley en su aplicación al caso concreto”*. Precisamente el referido jurista hace alusión a la interpretación en concreto, en contraposición a la interpretación en abstracto.

Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para medir su extensión precisa y apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas aparentemente comprendidas en el ámbito de su vigencia¹⁴. Una vez determinado el sentido y el valor de la norma, permitirá al intérprete medir el alcance y la eficiencia de la norma en el ámbito de las relaciones jurídicas.

Interpretar significa, declarar, explicar, aclarar e incluso completar el significado de lo oscuro o insuficiente. Luego la interpretación es la declaración, explicación o aclaración del sentido de una cosa o de un texto oscuro y dudoso. La oscuridad, la duda y la laguna legal pueden encontrarse en las palabras o en el espíritu de la norma positiva, en los contratos, en los hechos, en las demandas, en las sentencias, en cualquiera de los actos o de las relaciones jurídicas¹⁵. Pero desde el punto de vista jurídico, *“La Interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición”*¹⁶.

En la interpretación de la ley debe indagarse la voluntad inmanente de la ley, la cual, una vez creada, existe en sí y por sí. Por lo cual si las circunstancias de que ella fue creada (occasio legis) puede auxiliarnos en alguna medida para escrutar el espíritu (la intención en abstracto del legislador), hay que

¹³ FLUME, Werner (1998), Ob. Cit. Pág. 359.

¹⁴ ANDORNO, Luís O (2001) *“La Interpretación en los Negocios Jurídicos”*. En: Derecho Privado (Libro Homenaje a Alberto J. Bueres), Oscar J. Ámela (dirección) y Dora Mariana Gesualdi (Coordinación), Buenos Aires-Argentina, Editorial hammurabi, Pág. 595.

¹⁵ ROMERO MONTES, Francisco Javier (2003), *“Curso del Acto Jurídico”*, Lima Perú, Editorial Librería Portocarrero, Pág. 141.

¹⁶ CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: *“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”*. Editorial Heliasta. Vigésimo tercera edición, 1994. Buenos Aires – Argentina. Tomo IV. Pág. 472.

cuidarse de no extralimitar la importancia de esta indagación histórica, pues la ley está dirigida a regir una pluralidad de casos más numerosos y complejos que aquellos en los que pudo haber pensado el legislador, hasta el punto de que se considera que la mejor garantía de su realización exige ir adaptándola y aun desaplicarla a medida que vayan cambiando las singulares circunstancias psicológicas y sociales de las que ella emanó¹⁷.

Interpretar una norma es esclarecer su sentido¹⁸ y la interpretación es la investigación en la penetración del sentido y del alcance efectivo de la norma; esto es atribuir un significado a la norma para medir su extensión precisa y la posibilidad de aplicación a una determinada relación social a regular. Es pues, una operación lógica, de conocimiento¹⁹, por lo que no es tan fácil y sencillo interpretar una norma jurídica, pues requiere un cierto nivel de conocimiento y experiencia en la materia.

La Teoría de la Interpretación Jurídica como parte de la Teoría General del Derecho está destinado a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas, y no precisamente cuando su sentido normativo no está claro, pues como dice De Ruggiero (1875-1934)²⁰ *“no solo de la norma legal cuando es oscura e incierta, sino también de la norma legal clara y de la norma proveniente de la jurisprudencia o de la doctrina y la que surge de la equidad”*. Afirmación contundente que desvirtúa la concepción tradicional.

¹⁷ MÉLICH ORSINI, José (1986), ***“La interpretación de los contratos y de los actos jurídicos en el nuevo Código Civil Peruano”***. En: *“El Código Civil Peruano y el Sistema Jurídico Latinoamericano”*, Ponencias presentadas en el Congreso Internacional celebrado en Lima del 9 al 11 de agosto de 1985, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima y la Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA), Editorial Cultural Cuzco S.A., Pág. 287.

¹⁸ ENNECCERUS, Ludwig (1953), ***“Tratado de Derecho Civil”***, Tomo I. Barcelona-España, Casa Editorial Bosch, traducido de la 39ª edición alemana, Pág. 197.

¹⁹ MESSINEO, Francesco (1954), ***“Manual de Derecho Civil y Comercial”***, Tomo I. Buenos Aires Argentina, Primera edición español, Ediciones Jurídica Europa-América, Pág. 95.

²⁰ ANDORNO, Luís O (2001) ***“La Interpretación en los Negocios Jurídicos”***. En: *Derecho Privado* (Libro Homenaje a Alberto J. Bueres), Oscar J. Ámela (dirección) y Dora Mariana Gesualdi (Coordinación), Buenos Aires-Argentina, Editorial hammurabi, Pág. 595.

Con bastante frecuencia se observar en los pronunciamientos de algunos tribunales que, frente a normas claras o en presencia de cláusulas contractuales precisas, esto es, no oscuras ni ambiguas, no serían menester acudir a reglas interpretativas. Ello, por aplicación del viejo brocárdico: *“in claris legis non interpretatio”*. Así, por ejemplo, se ha sostenido que: *“las reglas de interpretación de los contratos son usadas cuando se parte del presupuesto de la ausencia de claridad de la expresión normativa convencional, pero no si el texto de la cláusula motivo de cuestionamiento es suficiente para su correcta inteligencia”*²¹ y que: *“Si un contrato es claro en sus términos, no cabe interpretación alguna. De tal modo, si no hay términos ambiguos o dudosos, ni existen contradicciones, debe hacerse una relación integrativa de los documentos que hacen surgir la intención de las partes”*²². Pronunciamiento jurisprudencial que no compartimos, pues consideramos que aun cuando para determinado interprete estuvieren claras los términos de un contrato, para otro intérprete puede no estar claro; de ahí que en el ámbito jurisdiccional se suele resolver una causa en instancia plural, donde lo que interpreta el A Quo puede ser contradicha por el Ad Quem.

En verdad, consideramos que no existen leyes claras ni oscuras, puesto que todas requieren ser interpretadas. Lo único verdadero del referido aforismo – dice De Ruggiero- es que cuando de las palabras del precepto se deduce indudablemente el sentido de la voluntad legislativa, no es admisible, so pretexto de interpretar la norma, indagar un pensamiento y una voluntad distinta. Por lo demás, la noción misma de *claridad* de la norma es un concepto relativo, pudiendo ser claro el texto de la ley, pero confusa en su finalidad, y aun la aparición de nuevas situaciones puede tornar oscura una norma que se estimaba clara y exenta de dificultades²³. También puede ser relativo, como hemos señalado, cuando se trata de un intérprete a otro interprete, precisamente por eso se recurre al órgano jurisdiccional para que

²¹ CNCiv.. Sala E.26/9/96, LL, 1997-B-782. En: Andorno, Luís O. (2001) Ob. Cit. Pág. 596.

²² CNCiv.. Sala J.30/4/96, LL, 1997-B-1024, 39.833-S. En: ANDORNO, Luís O. (2001) Ob. Cit. Pág. 596.

²³ ANDORNO, Luís O (2001) *“La Interpretación en los Negocios Jurídicos”*. En: Derecho Privado (Libro Homenaje a Alberto J. Bueros), Oscar J. Ámela (dirección) y Dora Mariana Gesualdi (Coordinación), Buenos Aires-Argentina, Editorial hammurabi, Pág. 596.

la autoridad competente en una instancia plural se pronuncie sobre materia de interpretación planteado a su jurisdicción.

El tema de la interpretación es de singular trascendencia. En el campo del Derecho se interpretan las leyes, los contratos, las resoluciones judiciales, los actos de las partes, sus consecuencias con efectos jurídicos; en fin, se interpreta todo lo escrito y más que eso²⁴. Contrariamente a lo que creen quienes no tienen formación jurídica, la interpretación es siempre necesaria, aun cuando se trate de un texto *“clarísimo, perfectamente comprensible con su sola lectura”*. Buena sorpresa se llevarían quienes así piensan cuando adviertan que dos lectores de ese texto *“clarísimo”* llegan a veces a conclusiones distintas²⁵. Esto es que pueden darse interpretaciones discrepantes.

Existe un principio, *“toda regla de derecho necesita de la interpretación para su aplicación, y aún el que sostenga lo contrario por considerar que la letra es clara, está practicando una interpretación gramatical que, por prescindir de las reglas de la hermenéutica, lo conducirá inevitablemente a un error”*. Otro tanto ha de decirse para las declaraciones de voluntad privada²⁶. Principio que suscribimos.

La interpretación –anota García Máñez (1908-1993)²⁷– no es labor exclusiva del Juez; cualquier persona que inquiera el sentido de una disposición legal puede realizarla. Pero la calidad del intérprete no es indiferente, al menos desde el punto de vista práctico, porque no toda interpretación es obligatoria. Así, por ejemplo, si el legislador, mediante una

²⁴ “El tema de la interpretación jurídica es un concepto genérico y amplio. Puede ser objeto de interpretación una ley, una sentencia, una resolución administrativa, un laudo arbitral, un acto jurídico” (ROMERO MONTES, Francisco Javier, *“Curso del Acto Jurídico”*, Lima Perú, 2003, Editorial Librería Portocarrero, Pág. 141).

²⁵ AVENDAÑO, Jorge (2007) *“Presentación”*. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., *Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina*, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. XXXVII.

²⁶ LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (2007), *“Interpretación Contractual y Casación”*. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., *Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina*, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1981.

²⁷ GARCÍA MÁÑEZ, Eduardo (1988), *“Introducción al estudio del derecho”*, México, 39vo. Edición, Editorial Porrúa, Pág. 329 y s.

ley, establece en que forma ha de entender un precepto legal, la exégesis legislativa obliga a todo el mundo, precisamente porque su autor, a través de la norma secundaria interpretativa, así lo ha dispuesto. Si es el Juez quien interpreta un precepto, a fin de aplicarlo a un caso concreto, esa interpretación no adquiere obligatoriedad general, pero sirve, en cambio, de base a una norma individualizada: el fallo que en la especie se dicte. Si, por último, un abogado o un particular cualquiera, interpretan una disposición legislativa, su interpretación (correcta o incorrecta) tiene un simple valor doctrinal y, por ende a nadie obliga. En el primer caso háblese de interpretación auténtica, en el segundo caso de interpretación judicial o jurisprudencial, y en el tercero, de interpretación doctrinal o privada. Las dos primeras tienen, en cambio carácter oficial o público.

La interpretación conduce pues a la comprensión del sentido de la norma jurídica²⁸, a determinar el sentido exacto de la norma²⁹ o a descubrir los pensamientos que encierran las palabras que contiene una norma³⁰. Lo que significa que para realizar esta labor esclarecedor se dan reglas con carácter vinculante.

En tal sentido estamos de acuerdo y nos sumamos a las palabras del maestro Aníbal Torres Vásquez (1942)³¹, cuando dice: “interpretar una norma jurídica es establecer su sentido y alcance en relación con un hecho determinado al cual debe aplicarse. ¿Cómo establece el intérprete el sentido de la norma?. En primer lugar, la labor del intérprete se dirige a descubrir o develar el sentido inmanente en la norma; en segundo lugar, como por lo general una norma evoca varios sentidos, selecciona o fija el sentido con el cual se obtenga la solución más justa del caso concreto; y en tercer lugar, si

²⁸ ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel (1979). *“Manual de Filosofía del Derecho”*. Buenos Aires: ASTREA. Pág. 289

²⁹ LATORRE SEGURA, Ángel, *“Introducción al Derecho”*, Editorial Ariel. Séptima Edición, Septiembre de 1976. Barcelona – España. Pág. 93.

³⁰ ALZAMORA VALDEZ. Mario (1987), *“Introducción a la Ciencia del Derecho”*, Lima-Perú, 10ma. Edición, Editorial y Distribuidora de Libros –EDDILI, Pág. 257

³¹ TORRES VASQUEZ, Aníbal (2001), *“Introducción al Derecho”* (Teoría General del Derecho), Lima-Perú, 2da. Edición, Editorial, Ideosa y Editorial Temis de Colombia, Pág. 516.

el sentido o sentidos de la norma no se adecuan a la nueva realidad social, el intérprete atribuye a la norma el significado que lo actualiza”.

Dado que las normas positivas y el Derecho vigente en general se expresan y difunden mediante el lenguaje, consideramos que Interpretar no puede ser otra cosa que reconocer, descubrir, averiguar, captar o asimilar el auténtico significado, sentido y alcance de la norma jurídica.

De todo lo expuesto podemos concluir que interpretar una norma es determinar, averiguar, descubrir, develar, desentrañar el sentido y alcance de la misma. Esto que parece simple, es materia sustantiva en la carrera de Derecho y es lo que nos diferencia de otros profesionales. En otras profesiones no les enseñan a interpretar la ley, pues para esto está la carrera de abogacía. Sin embargo, es un mal generalizado el creer que cualquiera con una simple lectura puede determinar el sentido y alcance de un texto legal.

El interés por la interpretación de la norma se origina desde el momento de la publicación de la ley, pero cabe señalar que por más clara que sea la norma necesita ser entendida, esto es, ser interpretada y no son siempre los abogados los que deben enfrentar a ella. Por ejemplo, el legislador interpreta los mandatos constitucionales para crear el orden legal; el Jurado Nacional de Elecciones interpreta las normas relacionadas a las elecciones; el juez interpreta las normas en la administración de justicia; los fiscales interpretan normas en el ejercicio de la acción penal; el Poder Ejecutivo en sus diversas reparticiones administrativa interpreta las normas; El Consejo Nacional de la Magistratura interpreta las normas en el desempeño de sus funciones; el Notario interpreta las normas en el ejercicio de su función; normalmente abogado la interpreta para aplicarla; y finalmente hasta el ciudadano interpreta algunas normas de su interés.

Tal vez sea necesario citar lo que el inciso 8 del Artículo 139 de la Constitución Política del Estado establece. *“El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben*

aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario”; normatividad constitucional concordante con el Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil, que prescribe la obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley: “Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano”.

Por tanto, no es posible que un juez deje de administrar justicia invocando el vacío o deficiencia de las reglas de derecho, pues cada vez que encuentran una dificultad de este orden, los tribunales, para superar esta situación, suelen recurrir a los “precedentes”, es decir la interpretación ya dada sobre el mismo punto por otras jurisdicciones, donde algunos precedentes son vinculantes, esto es, de observancia obligatoria por los jueces, tal como en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulados, en diversas materias jurídicas (Constitucional, Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, etc.) Frecuentemente guiados en esta búsqueda por la doctrina, ellos van formando una jurisprudencia que, poco a poco, se generaliza. No deben olvidar jamás que, como contrapartida de la renuncia a hacer justicia por mano propia, todo individuo tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos en justicia.

2.1.3. La Interpretación del Acto o Negocio Jurídico.

En la interpretación de los actos o negocios jurídicos, son los operadores jurídicos (jueces) los encargados de indagar y determinar el verdadero sentido y alcance de las negociaciones o contratos, tal como refieren los juristas colombianos Guillermo Ospina Fernández (1914-1990) y Eduardo Ospina Acosta³² al señalar que interpretar un negocio jurídico es averiguar el verdadero sentido y alcance de sus estipulaciones, por ello quienes tienen

³² OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo (1994). **“Teoría General del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos”** (4ª ed.). Colombia: THEMIS., Pág. 405.

que pronunciarse sobre un negocio jurídico, especialmente los jueces llamados a aplicarlos, tienen que comenzar por entenderlo rectamente, lo que con frecuencia resulta difícil debido a la oscuridad, imprecisión, ambigüedad o deficiencia de las cláusulas empleadas por las partes para expresar su voluntad, y hasta debido a contradicciones entre dichas cláusulas. En estos casos corresponde al intérprete desentrañar el real significado de las declaraciones formuladas y armonizar en cuanto ello sea posible.

En la interpretación de los actos o negocios jurídicos se trata de reconstruir la común intención de las partes, pues como refiere Francesco Messineo (1886-1974)³³ *“interpretar, es decir, reconstruir la intención común, significa ponerse en un punto de vista que esté por encima del interés de cada una de las partes y efectuar la investigación decisiva, la única apta para reconstruir en sus términos efectivos el contenido del contrato”* o cualquier otro negocio jurídico. Es decir, según esta concepción, la interpretación debe ser imparcial.

Manuel Albaladejo (1920-2012)³⁴ nos dice que la interpretación es la actividad tendente a fijar el sentido de la declaración, es decir, a precisar cuál es la voluntad negocial que la declaración exterioriza. Al respecto Rubén H. Compagnucci de Caso³⁵, señala que la voluntad que se exterioriza por medio de signos, gestos, comportamientos, debe ser objeto de entendimiento por el intérprete a fin de poder descifrar el contenido de lo declarado. Por tanto, al igual que Erich Danz (1850-1914)³⁶, consideramos que por interpretación se entiende, en el lenguaje usual, la acción que tiende a fijar el sentido y el significado de las manifestaciones de la voluntad, que

³³ MESSINEO, Francesco (1986). **“Doctrina General del Contrato”- Tomo II**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. Pág. 102.

³⁴ ALBALADEJO, Manuel (1996), **“Derecho Civil”** Tomo I, Volumen Segundo, Barcelona España, 14va. Edición, José María Bosch Editor, Pág. 344. **“El Negocio Jurídico”**, Barcelona España, 2da. Edición 1993, Librería Bosch, Pág. 321.

³⁵ COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H. (1992), **“El Negocio Jurídico”**, Buenos Aires Argentina, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Pág. 359.

³⁶ DANZ, Erich (1926), **“La Interpretación de los Negocios Jurídicos”**, Madrid, Traducción de la 3ra. Edición alemana y concordancias con el Derecho español por W, Rocés, Librería General de Victoriano Suarez, Pág. 15.

puede ser mediante palabras o comportamientos, pues el que quiere manifestar al exterior su voluntad interna, tiene que declarar, para ello necesita valerse de ciertas palabras, signos o comportamientos para que en el mundo exterior puedan percibir; y precisamente, poner en claro estas manifestaciones o declaraciones es el fin de la interpretación.

Por su parte Nicolás Coviello (1867-1913)³⁷ refiere que para determinar el contenido del negocio jurídico es necesaria la interpretación, o sea la investigación del significado que debe atribuirse a una determinada manifestación de voluntad. Por tanto la interpretación consiste en desentrañar la verdadera intención de las partes.

El negocio jurídico se configura a través de la declaración de voluntad, para cuyo efecto se utilizan palabras, gestos, signos, etc., que hacen viable la exteriorización de la voluntad; en tal sentido una vez declarada, debe ser objeto de interpretación, puesto que la interpretación es la actividad tendiente a fijar el sentido de la declaración; es decir, a precisar cuál es la voluntad negocial que se exterioriza a través de la declaración. De ahí que el maestro José León Barandiaran (1899-1987)³⁸ sostuviera que *“la regla de interpretación general no solo se refiere a las declaraciones de voluntad cuyo medio de expresión es el lenguaje hablado o escrito, sino cualquier clase de declaración de voluntad, esto es, también a la indirecta, o sea a la conducta manifestada por hechos. No sólo palabras, sino también toda clase de actos (en el sentido más amplio de la palabra), están sujetos a la interpretación (Staudinger)”*. Esto nos permite afirmar que existe cierta particularidad en la interpretación de los actos o negocios jurídicos a diferencia de la interpretación de las normas jurídicas.

³⁷ COVIELLO, Nicolás (1949), **“Doctrina General del Derecho Civil”**, México, Traducción al castellano de la 4ª Edición Italiana Revisada por el Prof. Leonardo Coviello, por Felipe De J. Tena, Concordancia con el Derecho Mexicano por Raúl Berron Mucel, Editorial UTEHA, Pág. 454.

³⁸ LEÓN BARANDIARAN, José (1999), **“Acto Jurídico”**, Lima-Perú, 3ra. Edición, Editores Gaceta Jurídica, Pg. 83-84.

Asimismo el maestro Aníbal Torres Vásquez (1942)³⁹ señala que la interpretación del acto jurídico es la técnica dirigida al conocimiento del contenido, sentido y alcance del acto, o sea de la regulación establecida por el agente o agentes que lo crean. En otras palabras, se trata de determinar el contenido del acto atribuyéndole su exacto significado que determine los deberes u obligaciones y los derechos que de él se derivan. Puesto que la imperfección del ser humano y del lenguaje hace que la reproducción de la voluntad mediante la declaración no esté libre de confusión y dudas y establecer su significado.

A través de la interpretación se trata de llegar a la voluntad expresa partiendo de su expresión, y como dice el italiano Francesco Santoro Passarelli (1902-1995)⁴⁰ siempre es necesario una interpretación o una investigación del acto negocial, por más fácil que la investigación, atendiendo al tenor del acto, pueda presentarse, por tanto la necesidad de una interpretación existe para cualquier clase de negocio, consistente en una declaración o combinación de declaraciones o en una actuación. Corresponde al Juez interpretar el acto negocial para asignar a la convención los efectos que las partes han querido atribuirle; por lo que el Juez en esta tarea debe poner a contribución la lógica, el buen sentido, la experiencia; a la vez es una tarea de conciencia y buena fe.

La interpretación viene a ser una reflexión sobre un texto previo para determinar su sentido, y por ello, es una mirada hacia el pasado (antecedente), intentando reconstruir lo originariamente pactado, en cambio la integración mira hacia el futuro y la calificación se enfoca en el presente.

Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones; puesto que como dijera el jurista chileno Ramón Meza Barros

³⁹ TORRES VÁZQUEZ, Aníbal (2012). **“Acto Jurídico”** (4ª ed.). Lima-Perú: IDEMSA; Pág. 479.

⁴⁰ SANTORO PASSARELLI, Francesco (1964), **“Doctrinas Generales del Derecho Civil”**, Madrid España, Traducción por A. Luna Serrano, Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. 275.

(1912-1980)⁴¹ *“La interpretación del contrato tiene lugar cuando los términos de que las partes se han servido son oscuros o ambiguos; cuando, a pesar de su claridad, son inconciliables con la naturaleza del contrato o con la evidente intención de las partes; cuando, en fin, la comparación de las diversas cláusulas, consideradas en conjunto, hace surgir dudas acerca de su particular alcance”*

Por su parte el jurista venezolano José Melich Orsini (1924-2011)⁴² sostiene que en la interpretación del contrato se parte de la concreta o efectiva *“común intención”* de las partes, pues se indaga por un precepto dirigido precisamente a resolver conforme a lo que *“debieron haber pensado y querido”* los singulares contratantes del caso en aquella situación, ahora controvertida entre ellos mismos por la pretensión de cada parte de atribuirle distintas implicaciones jurídicas. Se comprende así que la indagación histórica cumpla aquí un papel mucho más importante en la búsqueda del espíritu del contrato, ya que éste es mera manifestación de esa autonomía reconocida por la ley a las voluntades privadas para crear la peculiar regulación de sus singulares intereses en un lugar y momento dado. Sabemos, sin embargo, que en esta investigación histórica de las circunstancias psicológicas y sociales que han producido el acuerdo de las partes, no interesan los puros motivos individuales de cada contratante, sino aquellos que se revelan como haber sido tomados en cuenta por ambas partes según las circunstancias en que se realizó el contrato pues sólo de ellos puede predicarse que forman parte del intento práctico perseguido a través del contrato. Es ese intento de las partes el que debe reconstruir y fijar netamente el intérprete, sin deformar el significado real que le atribuyeron sus autores en ejercicio de su autonomía privada sobreponiéndose un juicio objetivo y abstracto.

⁴¹ MEZA BARROS, Ramón (1987), ***“Manual de Derecho Civil”, Tomo I***, Santiago de Chile, 7ma. Edición, Manuales Jurídicos N° 39, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 50.

⁴² MÉLICH ORSINI, José (1986), ***“La interpretación de los contratos y de los actos jurídicos en el nuevo Código Civil Peruano”***. En: *“El Código Civil Peruano y el Sistema Jurídico Latinoamericano”*, Ponencias presentadas en el Congreso Internacional celebrado en Lima del 9 al 11 de agosto de 1985, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima y la Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA), Editorial Cultural Cuzco S.A., Pág. 287.

Doménico Barbero⁴³ partiendo del artículo 1362 del Código Civil Italiano, hace una precisión clara sobre el concepto de interpretación del negocio jurídico, cuando señala que “*Interpretar* significa escrutar (indagar y examinar) un “*hecho*” para reconocer su “*valor*”. En el “*negocio jurídico*” (manifestación voluntaria de intención), el dato a escrutar es la “*manifestación negocial*”, el valor a reconocer, la “*intención*”. Interpretar el negocio jurídico significa, por tanto, escrutar la “*manifestación*” para reconocer su “*intención*”. Reconociendo la intención a través de la interpretación de la manifestación negocial, se podrá juzgar las “*consecuencias jurídicas*” ya que sabemos sus consecuencias jurídicas del negocio (“*efectos negociales*”) son las “*dirigidas a realizar su intención*”.

Descubierta la intención, no es ya cuestión de interpretar (el negocio de las partes), sino que es cuestión de aplicar (la voluntad de la ley), estableciendo cuáles sean las consecuencias jurídicas que según la ley debe seguirse precisamente para realizar la intención descubierta. Por tanto descubrir mediante la interpretación, la voluntad real o intención de las partes, es reafirmar la autonomía privada de las partes.

Consideramos importante lo que señala los autores colombianos Ospina Fernández y Ospina Acosta⁴⁴, que la misión de un juez frente a un acto controvertido no se agota en su interpretación propiamente dicha y que es una cuestión de hecho, como quiera que consiste en averiguar cuál ha sido la real intención de los agentes, sino que va más allá, en cuanto dicho juez no solamente está autorizado, sino legalmente obligado a dar un paso más, cual es el de determinar si tal acto existe o no, vale decir, si se ha perfeccionado jurídicamente y, en caso afirmativo, cuál es su naturaleza específica, cuestión esta que *ya no es de hecho*, sino *de derecho*, y que

⁴³ BARBERO, Doménico (1967). “**Sistema del Derecho Privado**” – Volumen I (6ª ed.). Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América; Pág. 602. **Art. 1362.**- “Al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la intención común de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aún posterior a la conclusión del contrato” (Código Civil Italiano de 1942).

⁴⁴ OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo (1994). Ob. Cit., Pág. 413-414.

puede llegar hasta la rectificación de la calificación equivocada que le hayan atribuido los agentes.

2.1.4. Distinción entre la Interpretación de la Norma Jurídica y del Negocio Jurídico.

En el proceso de aplicación del derecho la interpretación de la norma o del acto jurídico que la concretiza constituye un paso esencial, pues la expresión de la voluntad popular manifestada en la ley o del autor o partes en el negocio jurídico se expresan a través de formas orales o escritas que deben ser precisadas en su intención o alcance. Se ha dicho que la interpretación es la investigación dirigida a inquirir el sentido y alcance de una norma jurídica, o bien desentrañar el sentido de una expresión y, en fin, aclarar el criterio axiológico válido que inspiró la creación de la norma.

Al respecto Santos Cifuentes⁴⁵ nos dice “Los negocios jurídicos, a diferencia de las normas que son fuentes del derecho normativo en cuanto éste se proyecta hacia la organización jurídica de la sociedad, no constituyen el orden jurídico del todo y para todos, sino que operan dentro de su órbita haciendo específicas y concretas regulaciones entre sujetos dados, con destino preciso y objeto determinado”.

Asimismo Massimo Bianca⁴⁶ nos dice haciendo alusión al contrato (especie del negocio jurídico) “La interpretación del contrato tiende en efecto a averiguar (determinar) el contenido de un acto de autonomía privada según el propósito (intento) de sus autores, mientras que la interpretación de la ley tiende a averiguar (determinar) el contenido de una regla del ordenamiento según su función social. La interpretación de la ley trata entonces problemas, como aquellos de la constitucionalidad y de la efectividad, que son extraños a la interpretación del negocio”

⁴⁵ CIFUENTES, Santos (2004). **“Negocio Jurídico”** (2ª ed.). Buenos Aires: ASTREA de Alfredo y Ricardo Depalma. Pág. 336. BETTI, Emilio (1975) **“Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos”**, Madrid: Revista de Derecho Privado; pág. 234 y ss.

⁴⁶ BIANCA, Massimo (1998), **“Diritto Civile, Tomo 3: Il Contratto”**, Milan, Dott. A. Giuffrè Editores S.P.A., Pág. 379.

A partir de la idea de que la norma objetiva de derecho contiene una generalidad y abstracción que no puede asimilarse al contenido estructural del acto o negocio jurídico, se vislumbra la antítesis conceptual entre ambas expresiones jurídicas. Los actos jurídicos, a diferencia de las normas, no constituyen el orden jurídico, sino que operan dentro de su órbita. De ahí que la interpretación de uno y otro precepto ofrece diferencias que hay que poner de relieve.

Los autores separan en dos campos de estudio la interpretación de la ley y la de los actos jurídicos. La interpretación de la ley ha sido materia de estudio en la Teoría General del Derecho y la interpretación de los negocios jurídicos al campo del derecho privado. Al presente trabajo corresponde estrictamente esta segunda parte, pero no puede dejarse de hacer una mención aunque sea sucinta de la teoría de la interpretación de la ley pues depende de la postura que al respecto se adopte, que alcance o posición se derivará respecto a la interpretación de los actos jurídicos completos.

El jurista chileno Carlos Ducci Claro⁴⁷ refiere, que en la interpretación de la ley se busca la voluntad objetiva de la ley (*intra legem*), manifestada en ella misma, sin que tenga ninguna cabida la voluntad presunta del legislador; mientras en la interpretación del acto jurídico debemos buscar la intención de las partes, es decir, de los autores que con su voluntad configuran el acto.

Esta diferencia es lógica, dado que la ley tiene un carácter normativo general y se aplica a todos los casos que pueda comprender, presentes o futuros. Debe tener, por lo tanto, necesariamente un sentido propio. El acto jurídico, en cambio, sólo tiene el ámbito que cubre la declaración de voluntad y afecta esencialmente al actor o a las partes; es razonable, por lo tanto, tratar de determinar esa voluntad que ha creado, regulado o limitado sus propias y personales obligaciones, en ejercicio de la autonomía privada.

⁴⁷ DUCCI CLARO, Carlos (1989), *"Interpretación Jurídica"*. Chile, 3° Edición, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 204.

Por otro lado cabe señalar también que no es posible utilizar la analogía para interpretar los negocios jurídicos, pues como refiere el jurista argentino Santos Cifuentes⁴⁸ *“No se admite la aplicación de la analogía en lo que se refiere a los negocios jurídicos, a diferencia de la norma positiva, que tiene en la analogía uno de los principales métodos a seguir. En el negocio se la deja de lado como inadmisibles, pues éste obliga únicamente si es querido y por lo querido. Si surge una laguna, bien comprendido que no haya que suplir ex lege (o aplicar leyes supletorias), no habrá necesidad de cubrirla, porque debe entenderse que las partes no han querido vincularse”*. En consecuencia la diferencia es bastante clara entre la interpretación de una norma jurídica y del negocio jurídico.

Efectivamente la tarea de la interpretación de una norma jurídica difiere de la interpretación del acto o negocio jurídico, tal como señala Francesco Messineo⁴⁹ cuando afirma *“la tarea del intérprete de la norma jurídica está – en cierto modo- circunscrita, por cuanto la interpretación de la norma se limita a liberar a esta última de las dudas y ambigüedades que eventualmente la afecten y, por consiguiente, es una interpretación esencialmente objetiva, la tarea del que interpreta un contrato es mucho más compleja y ardua puesto que debe, además de eliminar las eventuales dudas o ambigüedades, aclarar también cuál es la voluntad concreta de las partes; en consecuencia, realiza una función objetiva y subjetiva a la vez, que consta, así, de dos “momentos” lógicos autónomos. La interpretación de la norma es interpretación de un principio jurídico (abstracto); la interpretación del contrato es interpretación de un caso singular o de un comportamiento, es decir, algo concreto”*. Cabe advertir lo importante que el autor señala al diferenciar las interpretaciones de la norma jurídica y del contrato; esto, que en la norma jurídica se hace una interpretación objetiva; mientras en los actos o negocio jurídicos (contratos) se hace una

⁴⁸ CIFUENTES, Santos (2004). Ob. Cit. Pág. 337.

⁴⁹ MESSINEO, Francesco (1986). *“Doctrina General del Contrato”- Tomo II*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. Pág. 88.

interpretación objetiva y subjetiva; de ahí la complejidad de la interpretación de éste último.

En nuestro medio el Profesor Aníbal Torres Vásquez⁵⁰ sostiene que la interpretación de la ley y la interpretación del acto jurídico tienen reglas y finalidades diversas. La ley crea reglas impersonales, generales, y abstractas, y como consecuencia se admite la analogía, la interpretación extensiva y la evolutiva; con la interpretación de la ley se busca esclarecer el significado objetivo de la disposición, que puede ser, incluso, diverso del significado que quiso darle el legislador. En una norma legal prevalece la interpretación objetiva y sólo en un segundo momento se puede pasar a la subjetiva, consistente en reconstruir la voluntad del legislador. Contrariamente, el acto jurídico es el fruto de la voluntad concreta del sujeto o sujetos que lo han celebrado, razón por la que se da la máxima importancia a la interpretación subjetiva.

2.1.5. Teorías o Sistemas de Interpretación del Negocio Jurídico.

Las Teorías o Sistemas de interpretación del negocio jurídico es la parte medular de nuestra investigación, dado que, luego del análisis y discusión, nuestra hipótesis se sustenta en uno de estas teorías o sistemas de interpretación del negocio jurídico. Porque ante una declaración legítima⁵¹ susceptible de corresponder a un acto o negocio normal, se pregunta si dicha declaración es apta para producir efectos jurídicos, por sí sola e independientemente de la voluntad que pretende traducir, o si, por el contrario, ambos elementos deben existir necesariamente y deben acoplarse entre sí.

Antes de ingresar al análisis de cada uno de las teorías o sistemas de interpretación del negocio jurídico, corresponde señalar el cuerpo civil donde

⁵⁰ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). *“Acto Jurídico”* (4ª ed.). Lima-Perú: IDEMSA; Pág. 477.

⁵¹ Es legítima porque ha sido emitida de conformidad con las autorizaciones o con las exigencias legales, tal como señala Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta en su libro *“Teoría General del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos”*, 4ª ed. 1994, Colombia: TEMIS; Pág. 100.

se han consagrado estos sistemas o teorías de la interpretación del negocio jurídico. Al respecto, el maestro sanmarquino Aníbal Torres Vásquez⁵² sostiene que el *sistema subjetivo* está consagrado en los artículos 1156 al 1164 del Código Civil francés de 1804; el *sistema objetivo* en el artículo 157 del Código alemán de 1900; y el *sistema mixto* en los artículos 1362 al 1371 del Código Civil italiano de 1942.

En consecuencia, sobre interpretación del negocio jurídico se han establecido tres principales sistemas o teorías interpretativos, los cuales, como se ha señalado anteriormente, vienen a ser el sistema subjetivo o francés del Código Civil de Napoleón (Code Civil 1804), el sistema interpretativo objetivo o alemán (Código Civil Alemán de 1900) y el sistema interpretativo mixto o italiano (Código Civil Italiano de 1942).

El surgimiento de estos sistemas es el resultado de la discusión que se da en el negocio jurídico, cuando se pretende determinar en la interpretación la prevalencia entre la voluntad interna (voluntad real) y la voluntad expresada (voluntad declarada) por las partes; es decir cuál de ellos debe prevalecer.

En la realidad se presenta, que no siempre los otorgantes del acto jurídico declaran⁵³ lo que quiere; pues ocurre casi con frecuencia que sin querer, (por error, dolo, violencia, intimidación, por la imprecisión del lenguaje que puede traicionar la voluntad del agente, etc.) o queriendo (se aparenta declarar como verdad la voluntad del agente, etc.) el agente declara algo que no corresponde a su voluntad; todo esto indudablemente genera un problema en el acto jurídico⁵⁴.

Esta divergencia entre la voluntad y la declaración ha sido resuelta haciendo prevalecer unas veces a la voluntad (teoría de la voluntad o subjetiva) y otras a la declaración (teoría de la declaración u objetiva). Esto ha originado

⁵² TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). Ob. Cit. Pág. 481.

⁵³ La declaración se realiza mediante palabras, escritos, comportamientos mímicos, gestuales, acciones, omisiones, etc.

⁵⁴ El acto jurídico se forma con la voluntad declarada, de ahí que la voluntad y declaración constituyen una unidad y no dos elementos separados.

la creación del *sistema subjetivo* de interpretación, basado en la teoría de la voluntad, que considera que se debe indagar sobre la voluntad real del agente y no detenerse en la declaración; y el *sistema objetivo* de interpretación, fundado en la teoría de la declaración, para el cual lo que se interpreta es la declaración y no la voluntad interna del agente⁵⁵.

Se dan diferencias entre el texto declarado, y la voluntad interna, en diversos casos, por ejemplo, cuando Pedro y José celebran un contrato de compra venta de un vehículo, pero en forma simulada, para evitar que le embarguen el vehículo al vendedor Pedro. No existe aquí una concordancia real y directa entre el texto del negocio jurídico y la voluntad engañosa de los agentes, siendo ello una muestra de la controversia entre lo expresado y la voluntad real de los celebrantes del aparente negocio jurídico.

Otro caso, se da cuando una persona realiza un contrato para adquirir un vehículo, en la creencia que está celebrando un contrato de “Alquiler Venta”, pero en la realidad, según las cláusulas contractuales se trata de una compra venta con pacto de reserva de dominio. También en este caso, al igual que el anterior, no existe la correspondencia entre el contrato celebrado y la real voluntad de los contrayentes, situaciones como estas son materia de interpretación, teniendo en cuenta sistema o teoría de interpretación adoptada.

La doctrina ha planteado algunas alternativas teóricas –como refiere Fernando Vidal Ramírez⁵⁶– como la Teoría de la Responsabilidad, formulada por Ihering, según la cual todo sujeto es responsable por lo que declara y queda obligado a indemnizar por la ineficacia de su declaración, y la Teoría de la Confianza, según la cual quien recibe una declaración la debe recibir como plenamente válida y eficaz y, por ello, enfatiza la preservación de la buena fe.

⁵⁵ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). “**Acto Jurídico**” (4ª ed.). Lima- Perú: IDEMSA. Pág. 481.

⁵⁶ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), “**El Acto Jurídico**” (8ª ed.). Lima-Perú: Editorial Gaceta Jurídica Pág. 339-340.

a) Teoría de Interpretación Subjetiva o de la Voluntad (francés).

La teoría de la voluntad, como señala el maestro Fernando Vidal Ramírez⁵⁷ tiene sus orígenes en las ideas de los jurisconsultos romanos y es la teoría tradicionalmente sostenida por la doctrina francesa, pero que también recibió el aporte de Savigny, para quien debía siempre atenderse a la voluntad interna, que era inherente a la individualidad del sujeto, pues la estructura jurídica debía funcionar en favor de la voluntad interna y de la individualidad, lo que, a su vez, debía tener su expresión en el postulado de la autonomía de la voluntad. De ahí, entonces, que la labor hermenéutica debía darle relevancia a la voluntad interna y el intérprete indagar sobre las condiciones psicofísicas del sujeto y sobre el proceso evolutivo que lo había determinado a manifestarla, pues la voluntad interna debía prevalecer sobre su exteriorización y el intérprete buscar la coincidencia de ambas para que el consentimiento le diera eficacia al contrato.

Este sistema es denominado también interpretación *psicológica* o interpretación *histórica*; siendo su objetivo central de la interpretación es llegar a determinar cuál ha sido la voluntad real o interna del agente, pues se trata de reconstruir el acto según la real intención del declarante. *“De ahí que el intérprete debe buscar lo que realmente quiere el declarante, su intención o pensamiento interior, porque el elemento central substancial que da vida al acto jurídico es la voluntad y no la declaración del agente”*.

El jurista alemán Karl Larenz (1903-1993)⁵⁸ sostiene que según la teoría de la voluntad, no puede nunca admitirse como contenido del contrato lo que las partes no han querido realmente y en lo que por consiguiente, no han pensado. En efecto, tan sólo la voluntad (exteriorizada de cualquier modo,

⁵⁷ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2007) ***“La interpretación del contrato en el derecho peruano”***. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1645. VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), ***“El Acto Jurídico”***, Lima-Perú, 8va. Edición, Editorial Gaceta Jurídica Pág. 338.

⁵⁸ LARENZ Karl (1956), ***“Base del Negocio Jurídico y Cumplimiento de los Contratos”***, Madrid España, traducción de Carlos Fernández Rodríguez, Editora Revista de Derecho Privado, Pág. 173.

pero siempre comprobable como realidad psicológica) es capaz de “producir” consecuencias jurídicas. Lo que en términos concretos podríamos decir que este sistema o teoría de la interpretación del negocio jurídico sostiene que *“hay que tener en cuenta lo que se quiere más que lo que se dice”*; puesto que la interpretación consiste en desentrañar la verdadera intención de las partes.

Por su parte Aníbal Torres Vásquez⁵⁹ nos dice que en la búsqueda de la voluntad real del agente, el intérprete no debe considerar solamente la declaración, sino que debe valorar el contexto social, el comportamiento de las partes previo, simultáneo y posterior al de la celebración del acto jurídico, la finalidad perseguida por las partes y todas las circunstancias que conduzcan a establecer la voluntad real. Se tendrá en cuenta las tratativas, aquello que las partes practicaban en sus precedentes relaciones recíprocas, las circunstancias que demuestren el particular modo de expresarse de una de las partes y la significación que siempre le atribuye la otra, la ejecución de actos anteriores celebrados entre las mismas partes y el comportamientos de éstas en la ejecución del acto mismo que se está interpretando.

Nicolás Coviello⁶⁰ hace una precisión correcta en el sentido de que *“los negocios jurídicos deben interpretarse dentro de los límites queridos por las partes, sin que deba irse ni más allá ni más acá de su pensamiento”*. Partiendo de esta premisa afirma que *“la voluntad real debe prevalecer sobre la declaración externa: no hay eficacia jurídica si no hay voluntad; la declaración sin una voluntad correspondiente no es más que una máscara, un cuerpo sin alma. Por consiguiente, si la voluntad efectiva no es la que resulta de la declaración, el negocio jurídico es nulo, como cuando falta la voluntad misma de hacer una declaración”*⁶¹.

⁵⁹ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012), Ob. Cit., Pág. 482.

⁶⁰ COVIELLO, Nicolás (1949), *“Doctrina General del Derecho Civil”*, México, Traducción al castellano de la 4ª Edición Italiana Revisada por el Prof. Leonardo Coviello, por Felipe De J. Tena, Concordancia con el Derecho Mexicano por Raúl Berron Mucel, Editorial UTEHA, Pág.455.

⁶¹ COVIELLO, Nicolás (1949), Ob. Cit., Pág. 407.

“El sistema subjetivo se preocupa de indagar cuál es la voluntad real de los contratantes. Suelen las partes emplear en la manifestación de su voluntad términos inadecuados; la forma de la declaración traiciona, a menudo, su pensamiento íntimo. Tratase de establecer el verdadero pensamiento de los contratantes que debe prevalecer sobre la voluntad declarada”⁶². Tal es el sistema del Código Civil francés.

En los actos bilaterales o plurilaterales (en especial del contrato), el intérprete debe interpretar las declaraciones según el significado atribuido por las partes en el momento de la celebración del acto, puesto que la *común intención* de las partes la que origina el acto o negocio jurídico, dado que en la interpretación la voluntad interna real del sujeto prevalece sobre la declaración. Pero análogamente se debe proceder cuando se trata de negocios unilaterales *inter vivos*, si la declaración negocial ha sido entendida del mismo modo tanto por el declarante como por el destinatario de la declaración.

Al respecto Giuseppe Stolfi⁶³ señala “así como los interesados pueden estipular entre ellos un vínculo jurídico con el contenido que quieran, es natural que a su voluntad deba acudirse cuando surjan dudas en torno al significado o a las consecuencias de sus manifestaciones, porque aquel su querer señala precisamente el límite de las restricciones de la libertad recíproca de ambos, límite que deriva de haber concertado el negocio en cuestión”.

Para esta teoría la declaración es tan sólo un síntoma de la voluntad, pues el verdadero objeto de la interpretación contractual es la voluntad exteriorizada de algún modo en las declaraciones; por tanto según la teoría de la voluntad,

⁶² MEZA BARROS, Ramón (1987), “*Manual de Derecho Civil*”, Tomo I, Santiago de Chile, 7ma. Edición, Manuales Jurídicos N° 39, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 52.

⁶³ STOLFI, Giuseppe (1959), “*Teoría del Negocio Jurídico*”, Madrid España, Traducción y notas del Derecho Español por Jaime Santos Briz, Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. XXIII.

no puede nunca admitirse como contenido del contrato lo que las partes no han querido realmente y en lo que, por consiguiente, no han pensado⁶⁴.

El maestro Aníbal Torres Vásquez⁶⁵ cita, *“que en defensa de la teoría subjetiva y en contra de la objetiva, Célice dijo: No estamos dispuestos a aceptar una concepción que destruye toda relación entre el acto jurídico y su autor, ni admitir que un acto maquinal, la producción de un sonido, el trazado de algunas líneas, pueda tener un determinado valor, y que la voluntad del hombre no tenga ninguno”*.

La interpretación subjetiva, que busca encontrar la común intención de las partes aun cuando no coincida con la declaración, es de aplicación no solamente cuando la declaración negocial pueda entenderse o interpretarse en varios sentidos (objetivamente equívoca), sino también cuando la declaración pueda entenderse o interpretarse en un solo sentido (unívoco), según el común modo de entender de las gentes, pero que las partes concordantemente lo hayan entendido con un significado diverso. Al respecto el artículo 1156 del Código Francés dispone: *“En las convenciones debe buscarse cuál ha sido la intención común de las partes contratantes, antes que detenerse en el sentido literal de las palabras”*.

Es importante resaltar la prevalencia que otorga la norma citada *“a la intención común de las partes”* del negocio jurídico antes que *“el sentido literal de las palabras”* que contienen la convenciones, lo cual compartimos plenamente, dado que la finalidad u objeto de la interpretación en este caso es determinar o encontrar la verdadera voluntad de las partes.

El profesor Francisco Moreyra García Sayán (1935)⁶⁶ señala que esta Teoría consiste en sostener que la voluntad interna y subjetiva es la real y debe prevalecer sobre la voluntad declarada cuando existe discrepancia

⁶⁴ LARENZ, Karl (1956). Ob. Cit., Pág. 173

⁶⁵ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012) Ob. Cit. Pág. 481.

⁶⁶ MOREYRA GARCÍA SAYÁN, Francisco (2005). ***“El acto jurídico según el Código Civil Peruano”*** (curso teórico, histórico y comparativo). Lima-Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pág. 153.

inconsciente entre ambas. La declaración sin el soporte de una voluntad correspondiente, no es más que una máscara, un cuerpo sin alma. La declaración es un mero instrumento al servicio de la voluntad. Por consiguiente, hay que penetrar en la intención para encontrar el verdadero sentido de lo que quiso; si falta la voluntad efectiva de la persona o esta ha sido distorsionada por la declaración, el acto jurídico es nulo, igual que si hubiera faltado la voluntad misma porque la declaración en verdad no la contiene.

Consideramos importante señalar los argumentos de los juristas colombianos Ospina Fernández y Ospina Acosta⁶⁷, quienes manifiestan que la afirmación del predominio de la voluntad real sobre su expresión material deriva directamente del propio postulado de la autonomía de la voluntad privada y del carácter que a este se le atribuye de institución natural en la vida social, comoquiera que la única razón de ser de los actos jurídicos estriba en la impotencia de todo legislador para regular íntegramente las relaciones que dicha vida presenta, y en la invitación que, por tanto, este tiene que formularles a los particulares para que ellos voluntariamente colaboren en esa función reguladora. Por esto, el elemento verdaderamente relevante en la actuación jurídica privada es la voluntad real que la preside, y no la apariencia material que resulta de su exteriorización más o menos perfecta. De lo dicho se concluye que el viejo y conocido aforismo, según el cual la voluntad es la sustancia de los actos jurídicos, nunca podrá perder su vigencia, pese a las indebidas interpretaciones que se le han dado y que se ha prestado a críticas aparentemente justas.

Luego el citado autor señalando como corolario de esta teoría, sostiene que no puede haber acto jurídico en que falte la voluntad real de los agentes a quienes se atribuye. La declaración o acto aparente que no obedezca a este principio debe ser condenado de cualquier manera a la ineficacia. Tal es el tratamiento aplicable, por tanto, a los actos falsos por suplantación de los agentes, o por simulación de su representación legal o convencional; a los

⁶⁷ OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo (1994). Ob. Cit., Pág. 102-103.

actos de los impúberes y de los dementes; a los determinados por una fuerza absoluta, que aniquile la voluntad de la víctima o la sustituya por otra ajena, etc. A la propia conclusión debe llegarse en los casos en que la declaración se aparta fundamentalmente de la real voluntad de quien la formula, debido a la interposición de factores anormales que desvíen esta voluntad, como el error acerca de la naturaleza del negocio, o de la identidad del objeto o de calidades de este que se hayan tenido principalmente en mira, o de la identidad y calidades de las personas que hayan sido también la causa principal de la celebración del acto; o como la fuerza compulsiva que, sin destruir la voluntad, coloque a la víctima en la necesidad de formular una declaración contraria a su verdadero querer. Finalmente, siempre que quede establecida la discordancia entre el tenor literal o verbal de la declaración y la real intención de los agentes, esta última debe ser preferida por el intérprete al tratar de aplicar el acto y de deducir los efectos de este.

Sobre esta teoría tenemos el ejemplo ilustrativo lo propuesto por Francesco Galgano⁶⁸ y nos dice que “dos personas celebran un contrato en el que uno quiere arrendar y el otro recibir en arrendamiento la cosa que el primero entrega al segundo, sin embargo en el contrato no se hace mención a la merced conductiva. Si nos pusiéramos limitar al sentido literal de las palabras (en el caso a la palabra arrendamiento), sin lugar a dudas se debería concluir que nos encontramos ante un contrato nulo por falta del objeto (en este caso la merced conductiva). Sin embargo es necesario averiguar, mas allá de la palabras, la intención de las partes: así puede resultar que éstas querían la una conceder y la otra conseguir el goce gratuito del bien, debiéndose concluir que pensaban que estaban estipulando un contrato de comodato, aun cuando lo hayan definido impropriamente como de arrendamiento (o, como ha ocurrido en alguna ocasión, como “arrendamiento gratuito”).

⁶⁸ GALGANO, Francesco (1992), *“El Negocio Jurídico”*, traducción realizada por Francisco de P. Blasco Gascò y Lorenzo Prats Albentosa, Valencia España, Tirant lo Blanch, Pag.429.

Este sistema interpretativo postula un criterio de análisis subjetivo en el que la voluntad es la base de la interpretación teniendo como punto de partida a la reconstrucción de la voluntad interna.

❖ **Crítica al sistema subjetivo.**

Entre las críticas que se formulan a este sistema son los siguientes:

- La voluntad interna no manifestada es un fenómeno de conciencia que carecen de la posibilidad de ser conocida por lo que no tiene relevancia jurídica.
- Cuando el juez se esfuerza en descubrir una voluntad común que no ha sido expresada, tal investigación tiene un carácter conjetural y adivinatorio, con frecuencia la voluntad probable que el juez cree descubrir no es más que una voluntad ficticia.
- En la práctica presenta inconvenientes insuperables, dada la dificultad de probar el hecho psicológico interno, las intenciones y de no ofrecer seguridad en las relaciones jurídicas.
- Las intenciones que no existen sino en las conciencias de las partes no entran en el dominio del Derecho, no pueden ser la base de un negocio jurídico, que por ser fuente de derechos y obligaciones quizá gravosas, debe tener un fundamento concreto, seguro y serio, condiciones que no pueden encontrarse en la simple intención.
- “No puede acogerse la teoría de la voluntad, que sólo tiene en cuenta el elemento psicológico y desprecia el elemento material de la manifestación, ya que en el mundo jurídico no es la voluntad por sí misma la que está protegida por el derecho, sino la voluntad en cuanto

se ha manifestado”⁶⁹. Luego reitera con mayor énfasis: “No significa que la mera voluntad, aun cuando no resulte exteriormente, deba tener eficacia jurídica, ya que así perdería su importancia práctica la manifestación de la voluntad. Significa que no sólo por los medios proporcionados por la gramática o el diccionario debe inferirse la voluntad real, sino por todos los que suministra el arte de la lógica. Es siempre necesario que la voluntad se manifieste; sólo que poco importa que resulte del sentido literal de las palabras, y en general, prima facie, de los medios empleados para manifestarla, o que resulte en cambio, por vía de inferencias, del conjunto de las diversas disposiciones, del fin práctico propuesto y de todas las circunstancias de hecho”⁷⁰.

c) Teoría de Interpretación Objetiva o de la Declaración (alemán)

Como refiere el maestro Fernando Vidal Ramírez⁷¹, esta Teoría hizo su aparición en Alemania por el movimiento pandectista de la segunda mitad del siglo XIX y que recibió el impulso que le dio Erich Danz, ya iniciado el siglo XX, pese a la posición subjetivista que adoptó el BGB, postuló una tesis diametralmente opuesta a las posiciones voluntaristas. Planteó la prevalencia de la voluntad exteriorizada sobre la voluntad interna, pues esta, en sí misma, no tiene significado jurídico ya que la voluntad sólo produce efectos luego de su exteriorización. Para esta teoría, el Derecho sólo debía tomar en consideración lo manifestado por el sujeto, que es lo que lo vincula, pues el que recibe esa voluntad tiene derecho de creer que corresponde a su voluntad interna y la ley debe ampararle esta presunción.

⁶⁹ COVIELLO, Nicolás (1949), **“Doctrina General del Derecho Civil”**, México, Traducción al castellano de la 4ª Edición Italiana Revisada por el Prof. Leonardo Coviello, por Felipe De J. Tena, Concordancia con el Derecho Mexicano por Raúl Berron Mucel, Editorial UTEHA, Pág. 408.

⁷⁰ COVIELLO, Nicolás (1949); Ob. Cit. Pág. 454.

⁷¹ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2007) **“La interpretación del contrato en el derecho peruano”**. En: SOTO COAGUILA, Carlos Alberto., Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1646. VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), **“El Acto Jurídico”**, Lima-Perú, 8va. Edición, Editorial Gaceta Jurídica, Pág.339.

Efectivamente el jurista alemán Erich Danz,⁷² hace cuestionamientos contundentes al comentar el artículo 133 del BGB, respecto a las intenciones de las partes, como si aquellas fueran una especie de prueba: *“Se ha querido, y todavía hay quien quiere, negar toda importancia a la interpretación de las declaraciones de voluntad de las partes, constitutivas de negocio jurídico, por creer que la función interpretativa del juez versa sobre la investigación y aclaración de las intenciones internas que tuvieron las partes al emitir la declaración; se pensaba –y aún hay quien participa de este criterio –que la función del juez como intérprete de los negocios jurídicos consiste en una especie de prueba sobre las intenciones internas, semejante a la que se establece en materia de delitos”*. Luego, culmina su posición afirmando que *“la interpretación de los negocios jurídicos no consiste en una operación de prueba ni en fijar si ha ocurrido o no un hecho; su fin y su resultado está siempre en determinar el efecto jurídico producido”*. En todo caso, dice que *“La interpretación no tiene para qué preocuparse de tales pensamientos interiores, pues la voluntad interna, si no trasciende al exterior, si no se exterioriza, no influye para nada en el contenido del negocio jurídico”*⁷³.

Luego en otra parte de su obra, Danz⁷⁴ reitera señalando que la interpretación no debe ser una demostración o verificación del algo o suceso ocurrido en la realidad, sino desentrañar el sentido o significado de las palabras: *“La interpretación no tiende a demostrar que algo ha ocurrido realmente, que se ha verificado un suceso real, sino a desentrañar el sentido, la significación de las palabras. La convicción a que ha de llegar el juez mediante la interpretación, con sus deducciones, no consiste en pensar que algo existe o ha existido realmente, sino que tal o tal palabra tiene tal o tal significado. Finalmente con mayor énfasis afirma que: “En los negocios jurídicos se interpretan, se aclaran las declaraciones de voluntad de los*

⁷² DANZ, Erich (1926), *“La Interpretación de los Negocios Jurídicos”*, Madrid, Traducción de la 3ra. Edición alemana y concordancias con el Derecho español por W, Roces, Librería General de Victoriano Suarez, Pág.17.

⁷³ DANZ, Erich (1926), Ob. Cit. Pág. 58

⁷⁴ DANZ, Erich (1926), Ob. Cit. Pág. 53

*particulares, las palabras habladas o escritas que constituyen los elementos de hecho del negocio jurídico*⁷⁵.

Por su parte el jurista chileno Ramón Meza Barros⁷⁶ sostiene que la declaración de voluntad tiene un valor en sí, independientemente de la intención de sus autores. Por lo tanto, para interpretar el contrato no debe indagarse, cuál ha sido la intención de los contratantes sino el alcance que corresponde atribuir a la declaración, según el uso corriente, las costumbres, las prácticas admitidas en los negocios, tal es el sistema del Código Alemán.

Tal como se ha señalado al comienzo, el artículo 133 del Código Alemán expresa: *“En la interpretación de una declaración de voluntad, será necesario investigar la voluntad real sin atenerse al sentido literal de las palabras”*. Es indudable que este precepto establece un sistema subjetivo de interpretación, pero como se ha señalado, la escuela objetiva fue tan fuerte e influyente en su momento que permitió su aplicó en un sentido totalmente distinto.

Este sistema de interpretación objetiva, es llamada también interpretación técnica o lógica, realista, considera que el objetivo hacia el cual se dirige la actividad del intérprete es la declaración en sí, con independencia de lo que realmente quiso el agente. El objeto de la interpretación es la declaración. Se interpreta el negocio jurídico y no la voluntad del sujeto o sujetos que los celebraron; se analiza el resultado final de la manifestación, o sea el negocio jurídico. Sostienen que la voluntad que permanece en la conciencia del individuo es intrascendente para el Derecho, no produce efectos jurídicos, por ser prácticamente imposible saber lo que realmente quiso el agente. En favor de esta tesis se sostiene que tutela la confianza depositada por el destinatario y los terceros en el tenor de la declaración, lo que condice con la regla que impone la interpretación de buena fe del acto jurídico.

⁷⁵ DANZ, Erich (1926), Ob. Cit. Pág. 77

⁷⁶ MEZA BARROS, Ramón (1987), *“Manual de Derecho Civil”, Tomo I*, Santiago de Chile, 7ma. Edición, Manuales Jurídicos N° 39, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 52.

Se hace prevalecer a la interpretación literal sobre todos los otros métodos de interpretación. Para determinar el contenido y alcance del negocio jurídico, el intérprete debe otorgar a las palabras y expresiones su significado común, el significado con el cual son entendidas normalmente por los demás miembros de comunidad. El destinatario de la declaración confía en que es verdad lo que le dice el declarante, porque así lo entiende cualquier otro miembro de la sociedad.

Este sistema atiende esencialmente a la voluntad expresada por las partes, por esto se llama también de la voluntad declarada. Por ello, como dice Fernando Vidal Ramírez⁷⁷ esta teoría *“sostiene la prevalencia de la voluntad manifestada sobre la voluntad interna, pues considera que ésta, en sí misma, no tiene significado jurídico ya que los efectos jurídicos se producen con su exteriorización. Para el Derecho sostiene, se debe tener en cuenta exclusivamente la voluntad manifestada, que es la que vincula al sujeto, pues el que la recibe tiene derecho a creer que corresponde a la voluntad real del declarante. Sólo la declaración debe ser apreciada para interpretar el negocio jurídico”*

En él se hace abstracción de la voluntad subjetiva de los contratantes para atender fundamentalmente a las circunstancias reales en que se ha emitido la declaración de voluntad y puede llegar a considerar exclusivamente la literalidad de la declaración.

Este sistema ha tenido su mayor difusión en Alemania, donde la teoría objetiva se ha impuesto en el pensamiento jurídico, especialmente desde la publicación de la obra de Erich Danz sobre la interpretación de los negocios jurídicos.

Al respecto Vidal Ramírez⁷⁸ refiere que *“En efecto, Enneccerus, uno de los más caracterizados comentaristas del BGB, sostiene que la finalidad de la interpretación consiste en determinar el verdadero sentido de la declaración,*

⁷⁷ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), *“El Acto Jurídico”*, Pág. 339.

⁷⁸ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), Ob. Cit. Pág. 342.

tal como resulta de todas las circunstancias externas o internas que se han de tomar en cuenta y, en referencia concreta a la norma del artículo 133, fue de opinión que la voluntad interna sólo puede ser decisiva para la interpretación en cuanto haya tenido expresión en la declaración. Puede apreciarse, pues, en la posición asumida por Enneccerus, como las ideas de Danz condujeron a rebasar la norma positiva. Similar parecer ha expuesto Larenz para quien el principio de la interpretación no puede ser inferido del Código Civil, sosteniendo que si el artículo 133 remite al intérprete a la voluntad real del declarante, tal remisión puede ser válida para las declaraciones recepticias y sólo en cuanto el destinatario conociera la voluntad interna expresada en la declaración, esto es, el significado dado por el declarante; y, si el destinatario ha entendido la declaración en sentido distinto del dado por el declarante, es decisivo el significado que el destinatario pudo y debió necesariamente comprender, por lo que si el destinatario no puede atenerse simplemente al sentido literal de la declaración, ésta obligado, conforme a la buena fe, a averiguar lo que ha pretendido decir el declarante”.

En este sentido, ha señalado bien Luigi Ferri⁷⁹ que al interpretar el contrato se debe investigar cuál ha sido la común intención de las partes y ésta “...*al significar un punto de encuentro o combinación de dos voluntades distintas, no coincide necesariamente ni con una ni con otra, ni con la suma de ambas, sino con algo que está fuera de cada una de ellas...*” y en donde el encuentro de voluntades “...*no puede ocurrir más que en el exterior de ambos sujetos y, por consiguiente, en un plano objetivo...*”; razón por la cual en su opinión “...*la intención común excluye la consideración de las intenciones que permanecen secretas, y no puede hacer referencia más que a las declaraciones contractuales...*”.

En cuanto a la orden de prelación o jerarquía entre la interpretación subjetiva o histórica (o en concreto) y la interpretación objetiva, Francisco Messineo⁸⁰

⁷⁹ FERRI, Luigi, “**La autonomía privada**”, Traducción de la edición italiana por Luís Sancho Mendizabal. Editorial Revista de Derecho Privado Madrid. España. 1989. Pág. 184

⁸⁰ MESSINEO, Francesco (1986). Tomo II. Ob. Cit. Pag. 90.

afirma que la relación o jerarquía entre la interpretación subjetiva y objetiva es de subordinación lógica del segundo al primero. Por tanto, *“el intérprete puede recurrir al subsidio de las reglas de interpretación objetiva, sólo cuando no pueda reconstruir sin dudas la intención común concreta, es decir, solamente cuando se vea precisado por la imposibilidad recién señalada a sustituir por algo presuntivo o supositicio la efectiva intención común concreta”*. Con esta afirmación categórica del autor, queda claro nuestra hipótesis planteada.

Este sistema interpretativo establece que el núcleo de interpretación es la declaración de voluntad por lo que lo más importante es lo exteriorizado en defecto de lo que el sujeto quiere. Por tanto se privilegia a la SEGURIDAD JURÍDICA.

❖ **Críticas al sistema objetivo.**

El maestro Aníbal Torres⁸¹ refiere que el acto no produce los efectos que las partes han querido, sino los efectos atribuidos por el Derecho a la declaración aun cuando esta difiera de la voluntad. Como dice De Gáspari, *“no hace falta mucho esfuerzo para comprender cuán contradictorio es que el Derecho objetivo confiera plena eficacia a una declaración aun cuando quien la hace no haya tenido conciencia de sus alcances, y le constriña a ejecutar una prestación que realmente no quiso llevarla a efecto”*. Agrega este autor, citando a Raymond Célice, que esta concepción destruye toda relación entre el acto jurídico y su autor; se admite que un acto maquinal, la producción de un sonido o el trazado de unas líneas, pueden tener un determinado valor, mientras que la voluntad del hombre no tiene ninguno.

La crítica a esta teoría o sistema de interpretación es contundente, puesto que el contenido de todo negocio jurídico, debe ser la verdadera voluntad de las partes; y precisamente esa verdadera voluntad de las partes se debe descubrir o determinarse con la interpretación, caso contrario al interpretar

⁸¹ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012), Ob. Cit. Pág. 485-486.

se estaría determinando una supuesta voluntad que no corresponde a la verdadera voluntad querida por las partes, y no podemos sacrificar, en aras de la seguridad jurídica, una situación que no corresponde a la voluntad querida por las partes.

c) Teoría de Interpretación Mixto o Dual (Italiano).

El maestro Aníbal Torres Vásquez y Carmen Arana Courrejoles sostienen la existencia de esta teoría, basándose en el ordenamiento civil italiano de 1942, por lo que según esta teoría o sistema el objeto de la interpretación es tanto la voluntad del agente como la declaración del mismo, dado que la voluntad y declaración son dos aspectos inseparables y conexos (se interpreta la voluntad exteriorizada en la declaración).

Si se considera que el objeto de la interpretación es el acto jurídico (contrato, testamento, etc.) y éste es la manifestación de voluntad del sujeto o sujetos que lo celebran; desde este punto de vista tienen razón los sostenedores de la teoría subjetiva; pero es también verdad, como sostienen los defensores de la teoría objetiva que hablar de voluntad común en los actos bilaterales o plurilaterales es una ficción, porque cada parte puede dar al acto un significado diverso. El objeto de la interpretación es la voluntad exteriorizada en la declaración. De otro lado, la teoría de la voluntad al pretender reconstruir todo el querer del agente frustra las expectativas de la otra parte y de los terceros. Viceversa la teoría de la declaración, privilegiando a ésta, envilece excesivamente el rol de la voluntad. Nuestro ordenamiento jurídico civil contiene disposiciones orientadas a un análisis subjetivo, por ejemplo, si en un contrato se prueba que la común intención de las partes difiere de la declaración prevalece la primera sobre la segunda, o sea la común intención (la voluntad) sobre la declaración (art. 1361), y disposiciones dirigidas a dar un sentido a la declaración considerada en sí misma (arts. 168, 169, 170). Por tanto, la teoría intermedia se coloca como un perfecto punto de equilibrio entre las dos tesis extremas.

En las dos tesis extremas, la subjetiva y la objetiva, el objeto y las posibles orientaciones de la actividad interpretativa del acto jurídico, depende de que éste sea considerado como un acto de voluntad o como una mera declaración exterior. Si el elemento esencial del acto jurídico es la voluntad, el objeto de la interpretación es la voluntad negocial, por tanto, toda la actividad interpretativa debe orientarse, valiéndose de todos los medios permitidos, a la búsqueda del interno querer como hecho psíquico, del agente. Una concepción como ésta no satisface, porque descuida la exigencia de una tutela razonable de la confianza depositada en la declaración por el destinatario de la misma y en general por los terceros. Pero si se considera al acto jurídico como una mera declaración exterior, el objeto de la interpretación se limita a lo que se ha expresado (art. 168), el intérprete no puede apreciar el sentido del acto de otro modo que no sea “en lo expresado” y sólo “desde lo expresado”, en vista a la expectativa que pueda suscitar en el mundo externo, y, por tanto, la actividad del intérprete se reduce a un juicio objetivo y extrínseco, sobre el significado del negocio, con la consecuencia, aún más grave que la anterior, de un eventual sacrificio de la real determinación de las partes de algún modo manifestada aun por actos extra formación del negocio, a la cual deberá conducir una correcta interpretación.

Para superar los errores del sistema subjetivo y del objetivo, la interpretación debe orientarse a determinar el significado más correcto del acto, considerando su función y eficacia como un instrumento de autorregulación de intereses privados. Desde esta perspectiva, la interpretación debe orientarse directamente al contenido del acto, el misma que constituye el punto de partida y el objeto de la valoración que el Derecho hace de la autorregulación de los intereses privados; por consiguiente el contenido del acto jurídico debe ser revelado en su pleno significado, según una valoración comprensiva y equilibrada de los intereses de las partes. La voluntad de las partes, que representa la fuente de la voluntad negocial, de un lado, el comportamiento de ellas, como el conjunto de actos exteriores con los cuales se realiza el contenido, del otro, solamente pueden adquirir relevancia, según esta correcta perspectiva, como los elementos, si bien de

peso determinante, a los cuales se vendrá a parar, cuando se trata de resolver los diversos problemas relativos a la indagación sobre el significado del acto.

La discordia entre la tendencia subjetiva y objetiva es afrontada y resuelta con soluciones que varían según la diversa naturaleza de los actos, tutelando unas veces a la voluntad (teoría de la responsabilidad) y otras a la confianza (teoría de la confianza). Se toma en cuenta la diferencia existente entre el contrato, que es el fruto del acuerdo entre puntos de vista de cada una de las partes, y el testamento, que representa el acto de última voluntad del disponente.

El sistema mixto es seguido principalmente por el Código Civil italiano que adopta como principio prevaleciente al sistema subjetiva (artículo 1362)⁸² que se orienta a determinar el real significado del acto según el punto de vista de sus autores, donde la *“norma enuncia dos conceptos: el sentido literal de las palabras, al que no nos debemos limitar, y la intención común de las partes, la cual debe buscarse más allá del sentido literal de las palabras”*⁸³. Y como sistema subsidiario, el objetivo (artículos 1367 a 1371)⁸⁴ encaminado a atribuir un sentido al acto valorándolo de acuerdo a criterios objetivos extrínsecos. De este modo se compatibiliza la exigencia

⁸² Art. 1362.- “Al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la intención común de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aun posterior a la conclusión del contrato”

⁸³ GALGANO, Francesco (1992), *“El Negocio Jurídico”*, traducción realizada por Francisco de P. Blasco Gascó y Lorenzo Prats Albentosa, Valencia España, Tirant lo Blanch, Pág. 427-428.

⁸⁴ Art. 1367.- “En la duda, el contrato o cada una de sus cláusulas deben interpretarse en el sentido en el que puedan tener algún efecto y no en aquél según el cual no tendría ninguno”. Art. 1368.- “Las cláusulas ambiguas se interpretarán de acuerdo con lo que se practique, generalmente, en el lugar en que el contrato haya sido concluido. En los contratos en que una de las partes sea un empresario, las cláusulas ambiguas se interpretarán de acuerdo con lo que se practique, generalmente, en el lugar donde esté la sede de la empresa”. Art. 1369. - “Las expresiones que puedan tener varios sentidos deberán, en caso de duda, entenderse en el sentido más conveniente a la naturaleza y al objeto del contrato”. Art. 1370. - “Las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato o en formularios dispuestos por uno de los contratantes se interpretarán, en caso de duda, a favor del otro”. Art. 1371.- “Cuando a pesar de la aplicación de las normas contenidas en este capítulo, el contrato continúe siendo oscuro, deberá éste ser entendido en el sentido menos gravoso para el obligado, si fuese a título gratuito; y, en el sentido que realice la armonización equitativa de los intereses de las partes, si fuese a título oneroso”.

fundamental del respeto de la autonomía privada –que no debe ser sacrificada haciendo prevalecer sobre el punto de vista de las partes un juicio objetivo y abstracto- con la otra de atribuir al acto, un posible significado que valga para salvar la autorregulación de los intereses privados (principio de conservación del acto jurídico).

Conviene señalar la crítica que a la antítesis de ambas teorías han hecho los autores italianos más modernos. Expresan que la alternativa es inadmisible y está mal planteada. Que la voluntad de las partes no adquiere relevancia jurídica, sino en cuanto sea reconocible en forma de declaraciones o de conducta. Que si el artículo 1362 valoriza la intención común de las partes frente al sentido literal de las palabras, entiende por intención no la voluntad de una sola parte que ha quedado inexpresada en la esfera interna de su conciencia, sino el intento concorde que se ha formado entre ambas partes y que es reconocible en su común y congruente declaración y conducta⁸⁵.

Finalmente cabe señalar que en los “Principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) sobre los Contratos Comerciales Internacionales”, se ha establecido un sistema de interpretación mixta de tendencia subjetiva; tal es así, que en su artículo 4.1. Señala: 1.- *“El contrato de debe interpretarse conforme a la intención común de las partes”*. 2.- *“Si dicha intención no puede establecerse, el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables⁸⁶ de la misma condición que las partes”*. Asimismo, cuando se trata de la declaración de una sola parte (unilateral), *“1.- Las declaraciones y otros actos de una parte se interpretarán conforme a la intención de esa parte, siempre que la otra parte la haya conocido o no la haya podido ignorar”*; luego agrega *“2.- Si el párrafo precedente no es*

⁸⁵ BETTI, Emilio (1955). *“Teoría general de la Interpretación”*. Milán, Giuffrè.

⁸⁶ En los casos en que la intención común de las partes no pueda establecerse, el párrafo (2) prevé que el contrato deba ser interpretado de acuerdo al significado que le habrían dado personas razonables de la misma condición que las partes y colocadas en circunstancias similares. El criterio para determinar qué debe entenderse por “razonabilidad” no es general y abstracto, sino que se refiere al entendimiento que cabe esperar de una persona, por ejemplo, con los mismos conocimientos de idioma, experiencia técnica o en los negocios que la de las partes en el contrato.

aplicable, tales declaraciones y actos deberán interpretarse conforme al significado que le hubiera atribuido en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición que la otra parte". Además para completar la idea cabal de la interpretación de los negocios jurídicos en su artículo 4.3 hace la siguiente precisión: *"Para la aplicación de los Artículos 4.1 y 4.2, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias, incluyendo: (a) las negociaciones previas entre las partes; (b) las prácticas que ellas hayan establecido entre sí; (c) los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato; (d) la naturaleza y finalidad del contrato; (e) el significado comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo comercial; y (f) los usos"*.

d). Teorías de la confianza y de la Responsabilidad.

Para resolver cierta falta de justificación y poner ciertos límites al extremismo de las consideraciones y soluciones opuestas de los sistemas polares objetivo y subjetivo, han surgido ciertos matices singulares que se han manifestado en las teorías de la confianza y de la responsabilidad.

❖ **Teoría de la Confianza.-** En vista que la teoría de la declaración no podría resolver los conflictos de intereses equitativamente, esta doctrina desarrolla el criterio de confianza basándose en el principio de la buena fe. El destinatario que actúa de buena fe, debe tener confianza en la declaración que se le hace llegar. La garantía en un acto jurídico (contrato) es la legítima expectativa del destinatario; es importante el efecto que ésta despierta.

Emilio Betti⁸⁷ refiere que la teoría de la confianza preconiza, la justificación y límite, la garantía de la legítima expectativa del destinatario, el cual debe, por la buena fe, poder descansar en el significado común, usual, objetivo, de la declaración que llega hacia él; único significado que guiándonos por la

⁸⁷ BETTI, Emilio (2000), *"Teoría General del Negocio Jurídico"*, Granada, traducción y concordancia con el Derecho español por A. Martín Pérez y, Estudio preliminar sobre El negocio jurídico como categoría problemática a cargo de José Luís Monereo Pérez, Editorial Comares, S. L., Pág. 299.

buen fe nos es perceptible. Pero también peca, en un punto, de unilateralidad la justificación, en cuanto que considera y valora el conflicto de intereses entre declarante y destinatario sólo desde el punto de vista de este último.

Al respecto el maestro Fernando Vidal Ramírez⁸⁸ expresa que según esta teoría quién recibe una declaración la debe recibir como plenamente válida y eficaz y, por ello, enfatiza la preservación de la buena fe.

La doctrina considera que esta teoría peca de unilateralidad porque se resuelven los conflictos de intereses entre declarante y destinatario valorando y considerando el punto de vista de uno de ellos, es decir, sólo y exclusivamente del destinatario.

❖ **Teoría de la Responsabilidad.-** Esta teoría resuelve el conflicto desde el punto de vista del declarante; considera que el declarante es el responsable de los efectos de su declaración de tal suerte que si ésta es imprecisa, será peor para él por no haber sabido expresar exactamente su pensamiento (según Carnelutti). La doctrina considera que hay dos problemas: falta una explicación de por qué prevalece el significado objetivo sobre la voluntad; y al atentar contra el dogma de la voluntad sin una justificación, se cae en la unilateralidad, representada por la prevalencia de la opinión del declarante, sin dar ninguna valoración al receptor de la declaración.

Al respecto Emilio Betti⁸⁹ refiere que mejor se debería llamar esta teoría como la “autorresponsabilidad” y, señala que por esta teoría se reconoce la exigencia de que debe soportar el autor de la declaración, cuyo significado objetivo sea distinto del que por él se entendió, siempre que esta divergencia, le sea imputable (cuando la formulación es precisa, peor para el declarante, si no ha sabido expresar con exactitud su pensamiento). Es también unilateral esta teoría, en cuanto no razona la preeminencia atribuida

⁸⁸ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), Ob. Cit. Pág. 340.

⁸⁹ BETTI, Emilio (2000), Ob. Cit. “**Teoría....**”, Pág. 299.300.

al significado objetivo sobre la opinión del declarante, la que es desde luego inexplicable mientras sólo nos apoyemos en el punto de vista del declarante, sin atender al del destinatario y a la exigencia de proteger la confianza fundada sobre el significado normal.

El maestro Fernando Vidal Ramírez⁹⁰, señala que la doctrina ha planteado alternativas teóricas como la Teoría de la Responsabilidad, formulado por Ihering, según la cual todo sujeto es responsable por lo que declara y queda obligado a indemnizar por la ineficacia de su declaración.

2.1.6. Teoría o Sistema de Interpretación adoptada en el Código Civil Peruano.

Fernando Vidal Ramírez⁹¹ expuso en forma categórica que “El nuevo Código, es absolutamente contundente y claro, en cuanto define una posición, acoge la Teoría Objetiva y se afilia a ella, y así resulta del artículo 168, según el cual el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. El artículo 168 con toda claridad, deja pues establecido que el actual Código Civil acoge la Teoría de la declaración, el acto debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en ellos y aun cuando el mismo artículo 168, mantenga el principio de la buena fe como criterio interpretativo, dados los antecedentes doctrinarios y el criterio como debe ser apreciado la buena fe, que se trata de una buena fe objetiva, apreciada en la conducta de los sujetos, este mismo principio de la buena fe, así considerado contribuye a que el Código haya tomado una posición definitiva, en materia de

⁹⁰ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), Ob. Cit. Pág. 339..

⁹¹ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (1985), **“Exposición sobre el Libro del Acto Jurídico”**. En: **“El Derecho: Exegesis y Análisis del Código Civil de 1984”**, Arequipa Perú, Colegio de Abogados de Arequipa, Año LXIV, N° 297, Pág. 173. Asimismo, al comparar el Código Civil con la de 1936, señala: “La adopción de normas de interpretación constituyó una innovación en cuanto han sido consideradas en el Libro del Acto Jurídico, pues, a despecho del codificador de 1936, la doctrina nacional vio en el art. 1328 del ordenamiento anterior, instalada en las disposiciones generales de los contratos, una norma de interpretación. Es importante apuntar que el Código ha tomado partido por una **interpretación objetiva**, de **“lo expresado”**, pero con arreglo al principio de la buena fe (art. 168)”; (VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2000), “El Derecho Civil en sus conceptos fundamentales” (2ª edición), Lima-Perú, Gaceta Jurídica-edición económica, p.117.

interpretación del acto jurídico, acogiendo la teoría de la declaración, prevalece lo declarado sobre lo querido”.

Luego el mismo jurista peruano afirma que ”Estos artículos 169 y 170, demuestran la clara posición asumida por el legislador de 1984, en cuanto que acoge la teoría objetiva, no queda pues la menor duda que ya hay una toma de posición definitiva en cuanto a la teoría de la declaración; pero además estas normas tienen que verse en función de todas las demás disposiciones del Código, porque si no podríamos llegar a situaciones de suma injuria, porque puede una persona por defectos idiomáticos dar una declaración que realmente no responda a su voluntad interna⁹².

Gastón Fernández Cruz⁹³ precisa que: Bajo el Código Civil peruano de 1984, el acto jurídico ha sido definido como “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”(artículo 140), por lo que pareciera que nuestro Código ha acogido la teoría voluntarista del acto jurídico. Empero, ello no es exacto y, menos aún, representa una prevalencia normativa de la voluntad psicológica del sujeto, si se examina el artículo 168 del mismo Código, el cual señala que es objeto de interpretación la voluntad declarada de los sujetos, y no su voluntad interna. Bajo esta óptica y, bajo cualquier concepción que se tenga del negocio jurídico, siempre deberá ser objeto de análisis interpretativo la declaración de voluntad de los sujetos.

Asimismo, Mauro Grondona⁹⁴ señala: Con referencia al Código Civil peruano, los artículos específicamente dedicados a la interpretación del contrato (*recte*, del negocio jurídico) son tres (artículos 168, 169, 170 y

⁹² VIDAL RAMÍREZ, Fernando (1985), **“Exposición sobre el Libro del Acto Jurídico”**. Ob. Cit., Pág. 173 y 174.

⁹³ FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón (2004), **“Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil Peruano”**. En: VVAA (Guido Alpa y otros), selección, traducción y notas de Leysser L. León, Presentación de Vincenzo Roppo, **“Estudios sobre el Contrato en General”**, Lima Perú, 2da. Edición, ARA Editores, Pág. 806.

⁹⁴ GRONDONA, Mauro (2004), **“La común intención de las partes y el principio de la buena fe en la interpretación del contrato: Un panorama de la autonomía privada”**. En: VVAA (Guido ALPA y Otros) **“Estudios sobre el Contrato en General”**, Lima Perú, 2ª Edición, ARA Editores, Pág. Pág. 760.

además el artículo 1362 que se refiere a la buena fe y común intención de las partes). Hay que señalar, como primer punto, que la regla fundamental es aquella que toma el nombre de *interpretación objetiva*, y que se funda en la determinación de la voluntad de las partes (lo que el legislador peruano escribe, en realidad, es “*lo que se haya expresado*”, una fórmula con la que parece hacer referencia, en principio, y de manera esencial, a las palabras dichas o escritas por los contratantes) leída a través del filtro de la buena fe objetiva.

Al respecto el maestro Aníbal Torres Vásquez⁹⁵, sostiene que: “Nuestro Código Civil adopta como principio general, rector, de interpretación el sistema objetivo, lo que está bien, puesto que toda interpretación tiene que empezar por el análisis de la declaración o declaraciones de voluntad con la que se forma el acto jurídico, pero en modo alguno puede desdeñar el sistema subjetivo como un principio subsidiario (...)”. Nosotros discrepamos en cuanto señala que el sistema subjetiva debe considerarse como principio subsidiario, pues en todo caso el sistema objetivo debe ser considerado como principio subsidiario, puesto que una de las razones fundamentales que otorga la prevalencia del sistema subjetivo es la autonomía privada.

2.1.7. Objeto de Interpretación en el Negocio Jurídico

Emilio Betti⁹⁶: “El objeto de la interpretación es, propiamente, la declaración o el comportamiento, pero no tomados en sí, abstractos y aislados, sino encuadrados en el marco de circunstancias que les confiere significado y valor; no lo es la voluntad interna, ya haya sido manifestada o permanezca sin expresión, puesto que, si así fuese, la manifestación perdería toda importancia autónoma”. Esto es, que el objeto de la interpretación del negocio jurídico es la declaración o comportamiento (conductas) de las partes que celebraron el negocio jurídico.

⁹⁵ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). Ob. Cit., Pág. 503.

⁹⁶ BETTI, Emilio (2000), “*Teoría General del Negocio Jurídico*”, Granada España, Traducción y concordancia con el Derecho español por A. Martín Pérez y Estudio preliminar sobre El negocio jurídico como categoría problemática a cargo de José Luís Monereo Pérez, Editorial Comares S.L., Pág. 275.

Juan Espinoza Espinoza⁹⁷, citando a Vincenzo Roppo y a Rodolfo Sacco y Giorgio de Nova, señala que el objeto de la interpretación son los “*signos*” (exteriorizados a través de documentos y conductas) con los cuales las partes o un sujeto han manifestado su voluntad, que permiten al operador jurídico arribar a la “*voluntad legalmente reconstruida*” que tiene como fin “*encontrar el justo significado del contrato*” o del negocio jurídico.

Por tanto, el objeto de interpretación en el negocio jurídico es la manifestación o declaración de la voluntad de las partes; sin embargo, la precisión con que señala Giuseppe Osti⁹⁸, es interesante, pues este autor señala “*que la común intención de las partes*” representa el objeto de interpretación, en tanto “*síntesis de las voluntades individuales de los contratantes*”. La búsqueda de esa “*común intención*” –según el mismo autor- es un principio dirigido al juez, “*que tiene que resolver un conflicto surgido entre las partes sobre el significado que se debe atribuir a sus respectivas declaraciones*”; pero, al mismo tiempo es una advertencia para los contratantes, porque estos, “*fuera de toda controversia judicial, deben evaluar sus respectivos deberes y derechos, no a tenor del significado literal de sus declaraciones, sino de conformidad con lo que han querido concordemente, o con lo que han dado la apariencia de querer*”.

Como se advierte el autor citado señala que el objeto de interpretación del negocio jurídico (contrato) es “*la común intención de las partes*”; esto es, la voluntad real, con lo que precisa que el objeto de la interpretación no sólo es en términos generales la manifestación o declaraciones de la voluntad de las partes; sino fundamentalmente es determinar la común intención de las partes.

⁹⁷ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). “*Acto Jurídico Negocial*” (3ª ed.). Lima-Peru: RODHAS; Pág. 212.

⁹⁸ OSTI, Giuseppe, voz “*Contratto*”, en *Novissimo Digesto italiano*, vol. Utet, Turin, 1959, Pág. 522. En: LEÓN HILARIO, Leysser L. (2007), “*La Responsabilidad Civil*” (2ª edición), Prólogo de Luigi Corsaro, Lima – Perú, Jurista Editores, Pág. 574.

2.1.8. La Naturaleza de las Normas de Interpretación del Negocio Jurídico.

Existe discusión en la doctrina civilista sobre la naturaleza de las normas o reglas de la interpretación del negocio jurídico; esto es, si dichas normas son de carácter imperativo (obligatorio) o es de carácter facultativo. Esta interrogación también no es ajena en nuestro sistema civil peruano. En todo caso se debe tener en cuenta, que sólo es posible recurrir a las normas de interpretación positivados en el ordenamiento jurídico por ausencia o defecto que las partes no hayan señalado expresamente la forma o el modo de interpretación del acto celebrado, pues en el caso de existir reglas o criterios establecidos por las partes, no cabría la posibilidad de recurrir a las normas de interpretación positivados en el ordenamiento jurídico. Naturalmente de mutuo acuerdo pueden decidir darle una significación diferente a la que resulte de aplicar las normas interpretativas, puesto que en ejercicio de su autonomía privada, con el acto jurídico, no solamente pueden crear relaciones jurídicas, sino que pueden modificarlas o extinguirlas.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en algunos casos las normas de interpretación del negocio jurídico pueden ser de carácter subsidiaria, cuando las partes están de acuerdo de dar un determinado sentido a los negocios jurídicos, tal como puntualiza el jurista Erich Danz⁹⁹ *“las reglas de interpretación de negocios jurídicos, no son normas de Derecho imperativo, sino subsidiario, puesto que no se aplican si las partes están de acuerdo en dar un determinado sentido a las palabras contractuales. Si las partes, al celebrar el negocio, hablaron de un contrato de alquiler y luego declararon ante el juez que querían concluir un contrato de venta, el juez tendrá que interpretar sus palabras en este sentido”*. Es subsidiaria, porque solo cuando las partes no están de acuerdo con el sentido de las palabras se aplicaran las normas de interpretación de los negocios jurídicos.

⁹⁹ DANZ, Erich (1926), *“La Interpretación de los Negocios Jurídicos”* (3ª ed.), Traducción de la 3ª edición alemana y concordancias con el Derecho español por W. Roces, Madrid: Librería General de Victoriano Suarez, Pág. 142. DANZ, Erich (2009), Ob. Cit., con *“Estudio Preliminar: La Interpretación del Negocio Jurídico”* de Eric Palacios Martínez, Lima-Perú: Editora Escolani, Pág. 167.

Por su parte Juan Espinoza Espinoza¹⁰⁰ refiere que el hecho de haber reglas de interpretación de carácter imperativo, no implica que, adicionalmente, las partes (o quien manifieste su voluntad) establezcan otras reglas de interpretación y, en tanto, no contravengan otras normas imperativas, ni sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres (Art. V T.P. del C. C.), estas son plenamente válidas y eficaces. Tal es el caso, por ejemplo, que las partes acuerden, que en caso de contradicción entre un contrato y un anexo del mismo, prevalezca el primero. Mal haríamos en pensar que se trata de una interpretación asistemática, por cuanto las partes, en ejercicio de la autonomía privada, están decidiendo su propia jerarquía normativa, entendida esta última, en el sentido de regla de conducta establecida entre los particulares (no como mandato general con eficacia social).

a) Normas de carácter Facultativo (no Obligatorio).

Un sector de la doctrina se inclina a sostener que dicha normas son solamente directrices o criterios orientadoras, a lo que los intérpretes no se encuentran necesariamente obligados a seguir las normas de interpretación legalmente previstas, pudiendo recurrir a reglas o argumentos de interpretación distintos, por lo que los intérpretes bien pueden valerse o prescindir de ellos, por ser facultativos. Al respecto, Emilio Betti¹⁰¹ señala, que “según una doctrina moderna, formada bajo la influencia de los juristas franceses, las normas interpretativas serían simples reglas técnicas destinadas a actuar como criterios directivos del prudente arbitrio del Juez”.

Esta tesis es considerada como la concepción tradicional que sostiene que las normas sobre interpretación son solamente máximas lógicas sugeridas por el legislador a los magistrados, como meros consejos, directivas u orientaciones del criterio judicial o recomendaciones sin carácter obligatorio.

¹⁰⁰ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012), *“Acto Jurídico Negocial”* (3ª edición), Lima-Perú, Editorial RODHAS, Pág. 213.

¹⁰¹ BETTI, Emilio (2000), *“Teoría General del Negocio Jurídico”*, Ob. Cit. Pág. 284.

b) Normas de carácter Imperativo (Obligatorios).

Esta tesis moderna al contrario del anterior, considera que las normas de interpretación del negocio jurídico son de carácter imperativo u obligatoria, caso contrario sería de poca utilidad si es que dichas normas son meramente facultativas, dado que ello implicaría dejar a la libre decisión del intérprete, para que éste pueda utilizar cualquier otro criterio o métodos para indagar el sentido de la voluntad declarada.

Emilio Betti¹⁰², al referirse a la naturaleza de las normas para la interpretación sostiene que, *“se trata de verdaderas normas jurídicas de carácter imperativo, cuya inobservancia por parte del Juez puede ser impugnada en casación. Esta más reciente posición es, en nuestra opinión, la única justa”*. Luego, señala que *“Teniendo las normas interpretativas la naturaleza de verdaderas normas jurídicas (normas sustanciales), bien se comprende cómo su aplicación es susceptible de control también en sede de casación de la sentencia”*. Afirma el carácter vinculante de las normas interpretativas.

Al respecto Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena¹⁰³, refiere que si las normas de interpretación no tienen carácter obligatorio sino meramente facultativo, su utilidad se vería sensiblemente reducida, pues de todos modos quedaría a la decisión libre del intérprete la utilización de cualesquiera otros criterios o métodos de indagación del sentido de la voluntad declarada. De este modo, quienes se sometieron a la opinión final del intérprete quedarían tan desamparados como si de veras no hubiera normas coherentes y obligatorias de interpretación, pues el intérprete sería libre de escudriñar la voluntad negocial de la manera que mejor le pareciera.

¹⁰² BETTI, Emilio (2000), *“Teoría General del Negocio Jurídico”*, Ob. Cit., Pág. 284 y 287.

¹⁰³ LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo (1997), Ob. Cit. Pág. 250.

Pero también es tener en cuenta la prevalencia de que los propios negociantes pueden fijar el alcance o sentido de sus declaraciones antes de someter a las reglas de interpretación de carácter imperativo, tal como puntualiza el jurista peruano Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena¹⁰⁴, quien señala que el hecho de que las reglas de interpretación tengan carácter imperativo, es decir, de obligado cumplimiento cuando le es sometida al intérprete la indagación del sentido de la declaración de voluntad, no significa que el propio negociante no pueda fijar el alcance de su propia declaración, señalando el significado que atribuye al vocabulario con que se expresa, aunque sea contrario al usual o se aparte del sentido que debiera resultar de aplicar los cánones normativamente recogidos.

Con razón afirma Erich Danz¹⁰⁵ en el sentido de que *“no puede admitirse que se afirme que su aplicación depende del libre arbitrio del Juez; es tanto como decir que la ley crea las normas y al propio tiempo las deroga retirándoles su fuerza coactiva”*.

En igual sentido Federico De Castro y Bravo¹⁰⁶ señala *“Hoy, la opinión de los autores se inclina decididamente (incluso en Francia) en favor del carácter vinculante de las reglas sobre interpretación, por ser mandato del legislador y por ser precisamente un remedio frente a la arbitrariedad judicial”*. El cuestionamiento de la arbitrariedad judicial como parte de nuestra realidad, muchas veces se le vincula con la corrupción.

En consecuencia, esta doctrina moderna predominante reconoce que las normas sobre interpretación del acto jurídico son de carácter imperativo, cuyos criterios deben observarse ineludiblemente por el intérprete con el fin de dar solución a las diversas cuestiones que se presenten con relación a la determinación del sentido y alcance del acto¹⁰⁷. Como dice Betti¹⁰⁸ *“no se*

¹⁰⁴ LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo (1997) Ob. Cit. Pág. 252.

¹⁰⁵ DANZ, Erich (2009), Ob. Cit. Pág. 163.

¹⁰⁶ DE CASTRO Y BRAVO, Federico (1997), *“El Negocio Jurídico”*, Madrid España, Editorial Civitas S.A., Pág. 80.

¹⁰⁷ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012), Ob. Cit., Pág. 491.

debe inducir a creer que se trate de simples reglas técnicas destinadas a suministrar meros criterios orientadores que no tienen carácter preceptivo ni valor vinculante”.

Finalmente podemos compartimos la idea de que *“por ser normas interpretativas de carácter imperativo y no dispositivo, deben observarse no solamente por los magistrados en los casos sometidos a su conocimiento sino también por las partes que deben tenerlas en cuenta para determinar el significado del acto jurídico que ha celebrado”*¹⁰⁹.

d) Tesis adoptada por la doctrina nacional

Aníbal Torres Vásquez¹¹⁰, nos dice: En resumen, las normas sobre la interpretación del acto jurídico son imperativas para los magistrados y para cualquier otro tercero, pero para las partes solamente son imperativas si no hay acuerdo unánime diferente; las partes, en ejercicio de su autonomía privada, pueden darle la significación que quieran al acto jurídico que han celebrado con anterioridad con tal que no atenten contra normas imperativas (no interpretativas), el orden público o las buenas costumbres.

Juan Guillermo Lohmann Luca De Tena¹¹¹ también considera que las reglas de interpretación de naturaleza obligatorias, es la que fue recogida por nuestro Código Civil y llega a esa conclusión no sólo por la redacción imperativa del articulado, sino también porque el doctor Felipe Osterling, Presidente de la Comisión Reformadora, había aludido a *“reglas sobre la interpretación con carácter imperativo de los actos jurídicos”*. Con lo cual podemos decir, en conclusión, que el intérprete habrá de atender obligatoriamente a las reglas de interpretación que nuestro ordenamiento civil a establecido.

¹⁰⁸ BETTI, Emilio (1975), *“Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos”*, Madrid España, traducción y prólogo por José Luís de los Mozos, Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. 219.

¹⁰⁹ SCOGNAMIGLIO, Renato (1980), *Contratti in generale*, Milano, terza edizione, Pág. 179. Citado por Aníbal Torres Vásquez (2012) en Ob. Cit. Pág. 492.

¹¹⁰ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012), Ob. Cit. Pág. 492.

¹¹¹ LHOMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo (1997). Ob. Cit. Pág. 251

Por su parte el profesor Juan Espinoza Espinoza¹¹² sostiene que en su opinión también las normas de interpretación reguladas en el Código Civil peruano tienen carácter imperativo. La *ratio* de estas es que se establezca una relación jurídica justa y eficiente. Luego precisa que las normas prescritas en los artículos 168, 169, 170 y 1362 del Código Civil son un contenido mínimo de reglas a las cuales deben someterse los particulares y los operadores jurídicos. Por tanto, los operadores jurídicos deben observar obligatoriamente estas reglas de interpretación.

Uno de los Miembros de la Comisión Reformadora del Código Civil ha sido Fernando Vidal Ramírez¹¹³, quien afirma en el sentido de que “nuestro Código Civil ha incorporado las normas de interpretación siguiendo la corriente doctrinaria moderna y la que particularmente hemos relevado. Es imprescindible tener en cuenta que al incorporarlas, el Código ha asumido una definición: que sea el contenido de esas normas y no criterios distintos, los que rijan la interpretación del acto jurídico. De este modo, la interpretación queda sujeta al criterio impuesto por la ley y la hermenéutica del acto jurídico sometido a sus normas. Estas son, pues imperativas y su omisión o violación genera la correspondiente cuestión de responsabilidad”. Aun cuando no se precise si dichas normas interpretativas son vinculantes para todo tipo de actos jurídicos, incluyendo los contratos y otorgamiento de testamentos, dado que estas instituciones presentan otras normas de interpretación.

Cabe precisar que el jurista Fernando Vidal Ramírez, en su condición de haber sido Miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil, en tanto se promulgó por Decreto Legislativo N° 295 el 25 de Julio de 1984, entrando en vigencia el 14 de noviembre de 1984, realizó conferencias en varias ciudades del País, de lo cual una de ellas la realizó en la ciudad de Arequipa, con motivos de difusión, el “Curso sobre el nuevo Código Civil”, realizado desde el 20 de septiembre al 24 de noviembre de 1984, curso

¹¹² ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit. Pág. 213.

¹¹³ VIDAL RAMIREZ, Fernando (2011), Ob. Cit., Pág. 335.

oficializado por R. M. N° 382-84-JUS de fecha 05 de noviembre de 1984, cuyas ponencias de las exposiciones se han compilado en el libro titulado: “El Derecho (Exégesis y análisis del Código Civil de 1984)”¹¹⁴, en donde refiere : “Las normas de interpretación que contiene el Código del 84, son normas imperativas, ese es el carácter que se les ha puesto, el de ser normas imperativas, porque de otra forma no tendría razón de ser y haber sido legisladas. El carácter imperativo de las normas aparece del texto mismo de los artículos (168, 169 y 170), en cuanto se dice que el acto jurídico debe ser interpretado, etc., o sea la expresión “*debe*” es significativa de que se trata de una norma imperativa, pero la imperatividad de la norma resulta, por cuanto esta es una redacción frente a una posición doctrinal y legislativa que inspiró en el Código de 1936, en cuanto a que la interpretación correspondía más a la Ciencia del Derecho que al Derecho Positivo. En consecuencia, el sentido de las normas de interpretación que trae el nuevo Código Civil, es el de ser normas imperativas, que deberían ser aplicadas, para la interpretación auténtica, para la interpretación judicial, sea que se trate de una interpretación a cargo de árbitros, o cualquier otra, deberá atenerse a las normas que trae el nuevo Código Civil, con el carácter imperativo de las mismas.

Si bien es cierto, que tanto la doctrina nacional como la extranjera señala uniformemente el carácter vinculante de las normas interpretativas de los actos o negocios jurídicos; sin embargo, se observa en la jurisprudencia peruana, que los artículos 168, 169 y 170 de nuestro Código Civil, no reflejan tanto ese carácter vinculante o su observancia obligatoria por parte de los operadores jurídicos.

¹¹⁴ VIDAL RAMIREZ, Fernando (1985), ***“Exposición del doctor Fernando Vidal Ramírez sobre el Libro del Acto Jurídico”***. En: ***“El Derecho (exégesis y análisis del Código Civil de 1984)”***, Arequipa-Perú, Colegio de Abogados de Arequipa, Pág. 171 al 174. Asimismo, VIDAL RAMIREZ, Fernando (1984), ***“Acto Jurídico, Prescripción y Caducidad”***. En: ***“1er. Seminario de Difusión del Nuevo Código Civil del 17 Set. Al 04 Oct. 1984”***, Lima –Perú, Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pág. 86-87 señaló: ***“El Código del 84 le ha dado a estas normas el carácter de normas imperativas. Es decir, si el interpretador es un juez, un árbitro o las mismas partes – si se trata de una interpretación auténtica- tendrán que aplicar las normas de interpretación señaladas en el Código, para decir –luego- que han interpretado un acto jurídico”***.

2.1.9. Clases de Interpretación del Negocio Jurídico.

Tanto la doctrina nacional como la extranjera nos informan como las principales clases de interpretación del Negocio Jurídico, a la interpretación auténtica o convencional, la interpretación judicial y a la interpretación doctrinal; los que a continuación señalamos sus características principales.

a) La Interpretación auténtica o convencional.

Esta interpretación se da cuando las mismas partes fijan el sentido o la significación del acto celebrado, sin necesidad de recurrir a las reglas o criterios de interpretación establecidos por la ley, lo que no está permitido a los magistrados ni a los terceros. En este caso, las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, no son imperativas sino subsidiarias, cuya aplicación es supletoria solo cuando los interesados no estén de acuerdo en atribuir un cierto sentido a sus declaraciones.

Al respecto Emilio Betti¹¹⁵ nos dice, “En el estricto ámbito de la autonomía privada el autor de la declaración unilateral *mortis causa* y las partes en el negocio bilateral son dueños de regular sus intereses como crean más conveniente, incluso con relación a un problema de inteligibilidad”.

Asimismo Santos Cifuentes¹¹⁶ señala que “*Se llama interpretación auténtica de la declaración de la voluntad, a la que realizan posteriormente a su emisión la parte o partes que la emitieron. Es objeto de esta clase de interpretación el negocio, como acto de autonomía privada, o las cláusulas y disposiciones de un negocio que tienen incierto y controvertible significado. Aquí las partes fijan y definen su relación mediante un acuerdo, si es bilateral, o mediante una simple explicación, si es unilateral*”. Todo esto

¹¹⁵ BETTI, Emilio (1975), Ob. Cit. Pág. 206.

¹¹⁶ CIFUENTES, Santos (2004), “*Negocio Jurídico*” (2ª ed.), Buenos Aires: ASTREA de Alfredo y Ricardo Depalma, Pág., 339. BETTI, Emilio (1975), “*Interpretación de la Ley...*”. Ob. Cit. 204 y ss.

Manuel Albaladejo resume como *“aquella que se realiza por los propios sujetos del negocio”*¹¹⁷.

Por otro lado cabe resaltar la diferencia de la interpretación auténtica de la ley y de los negocio jurídicos, pues como refiere Cifuentes¹¹⁸ *“los sujetos de la interpretación en el negocio son los mismos que lo celebraron y ante una divergencia de aplicación o cumplimiento le dan su sentido en acto posterior, mientras que la ley aclaratoria puede ser –y generalmente lo es– dictada por parlamentarios que no intervinieron en la sanción de la norma original, debido a la renovación temporal de las cámaras”*. En consecuencia no cabe ninguna duda esta diferencia de las interpretaciones auténticas.

Por tanto se debe tener en cuenta la prevalencia de la interpretación auténtica aun cuando las normas de interpretación sean de naturaleza o de carácter imperativo, tal como puntualiza el jurista peruano Juan Guillermo Lohmann Luca De Tena¹¹⁹, quien señala que el hecho de que las reglas de interpretación tengan carácter imperativo, es decir, de obligado cumplimiento cuando le es sometida al intérprete la indagación del sentido de la declaración de voluntad, no significa que el propio negociante no pueda fijar el alcance de su propia declaración, señalando el significado que atribuye al vocabulario con que se expresa, aunque sea contrario al usual o se aparte del sentido que debiera resultar de aplicar los cánones normativamente recogidos.

b) La Interpretación Judicial.

Son aquellas interpretaciones que son realizadas por los magistrados en un proceso judicial y los realizados por los árbitros en el proceso de arbitraje, en donde fijan el contenido, sentido y alcance del acto jurídico celebrado en estricta sujeción a los criterios interpretativos legales, con el fin de resolver el

¹¹⁷ ALBALADEJO, Manuel (1993), *“El Negocio Jurídico”*, Barcelona – España, 2da. Edición, Librería Bosch, Pág. 338.

¹¹⁸ CIFUENTES, Santos (2004). Ob. Cit. Pág. 340.

¹¹⁹ LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo (1997) Ob. Cit. Pág. 252.

conflicto de intereses sometidos a su decisión. Por eso el magistrado de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Luís Lorenzetti¹²⁰ diga que “Las partes son las que interpretan el contrato, pero cuando hay desacuerdo es que se necesita la intervención de un tercero (árbitro, juez) para decidir sobre cuál es el sentido correcto.

Podemos decir, que en nuestro sistema jurídico al margen de la interpretación judicial (jurisprudencial) que es vinculante para las partes y para los terceros que tengan intereses derivados del acto interpretado, es factible que se de los Plenos Casatorios Civiles en aplicación del artículo 400 del Código Procesal Civil, en donde dicten precedentes vinculantes (llamado también doctrina jurisprudencial), la misma que una vez publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, tengan efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la República, tal como se ha dado con el Primer Pleno Casatorio Civil, recaído en el Expediente N° 1465 – 2007- Cajamarca, cuya materia es sobre Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual.

e) La Interpretación Doctrinal

La interpretación doctrinal es realizada por juristas o por terceros, que emiten su opinión interpretativo sobre determinado negocio jurídico como una forma de contribuir en el esclarecimiento del sentido del negocio, la misma que si bien es cierto no tiene carácter vinculante para las partes ni para el intérprete; sin embargo, según los argumentos esgrimidos y autoridad en la especialidad, pueden coadyuvar en la interpretación del acto jurídico.

En igual sentido refiere el jurista argentino Rubén Compagnucci De Caso¹²¹, al señalar que la interpretación doctrinaria es la que realiza el jurista que

¹²⁰ LORENZETTI, Ricardo Luís (2007). *“Interpretación del Contrato en el Derecho Argentino”*. En: VV. AA, Carlos Alberto Soto Coahuila (Director), *“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”* Tomo I, Lima-Perú, Editora Jurídica Grijley, Pág. 8.

¹²¹ COMPAGNUCCI DE CASO; Rubén H. (1992), Ob. Cit.

tiene una reconocida especialización en alguna de las ramas del derecho, y es requerido para que emita su opinión, dicha interpretación no es vinculante ni obligatoria.

En nuestra realidad, casi con frecuencia se observa las interpretaciones doctrinarias que aparecen en diversas revistas jurídicas (Diálogo con la Jurisprudencia) o son requeridos a alguna institución jurídica (CAL) para obtener una interpretación sobre determinado tema de interés. Además se tener presente que de acuerdo al artículo 400 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Sala Civil de la Corte Suprema viene estableciendo precedentes judiciales en el que se fijan principios jurisprudenciales que son de obligatorio cumplimiento por todas las instancias judiciales.

2.1.10. Métodos de interpretación del Negocio Jurídico.

El método es el modo¹²² o la manera de hacer¹²³, por tanto “se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para alcanzar un cierto fin, propuesto de antemano como tal”¹²⁴. En este caso, el modo o la manera de interpretar un negocio jurídico pueden ser literal, sistemático o interdependientes y teleológico o finalista, en otras palabras, estos serían los caminos a seguir para interpretar los actos o negocios jurídicos, y precisamente alguno de estos métodos encontramos regulados en nuestro ordenamiento civil.

Por tanto, a continuación brevemente trataremos los principales métodos de interpretación del negocio jurídico que la doctrina nos informa, señalando sus características principales.

¹²² Según el Diccionario de la Real Academia Española (Tomo II, 22vª. Editorial Espasa Calpe S.A. Edición, pág. 1499), el Método es el “modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder”.

¹²³ OSSORIO, Manuel (1999), *“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”* (26ª edición), Buenos Aires – Argentina, Editorial Heliasta; Pág. 620.

¹²⁴ FERRATER MORA, José (2007), *“Diccionario de Filosofía Abreviado”* (28ª edición), Argentina, Editorial Sudamericana S.A., Pg. 241.

a) Método gramatical o literal.

Mediante este método el interprete debe analizar desde el punto de vista gramatical o literal para captar su significación y alcance del negocio jurídico; esto es, si luego de ser interpretado resulta que los términos utilizados son claros en cuanto revelan sin lugar a dudas la voluntad real del agente, se estará al sentido literal de las estipulaciones, caso contrario deberá optar por otro método.

Al respecto el maestro Aníbal Torres Vásquez¹²⁵ nos dice que la averiguación del sentido literal de la declaración es el punto de partida de toda interpretación, puesto que el elemento gramatical o literal. Como recurso hermenéutico, nos enseña el contenido y alcance del acto jurídico de acuerdo con el significado de las palabras. Este procedimiento que pareciera tan sencillo, presenta en la práctica serios inconvenientes, en vista a que el significado de las palabras y de otros signos usados como medios de expresión puede variar según el contexto, o según las circunstancias o el modo de expresarse de las personas o de los grupos sociales. Puede suceder, por eso, que la declaración negocial no tenga un significado unívoco, por lo que puede ser entendida en un sentido por el declarante y en otro por destinatario y por los terceros eventualmente interesados en ella.

Asimismo, el jurista alemán Andreas Von Tuhr¹²⁶ explica que la interpretación en términos generales, establece el significado de la declaración de acuerdo con la situación típica de las partes sin tomar en cuenta sus relaciones y cualidades personales. Las palabras son interpretadas según su significado gramatical, de suerte que el sentido de la declaración fluya fácilmente del texto concebido y redactado con precisión. Sin embargo, una redacción exacta solo es posible cuando el comercio jurídico se desenvuelve en formas seguras y expresiones típicas. En el derecho moderno reina el principio de la libertad de formas y también en los

¹²⁵ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012) Ob. Cit. Pág. 505-506.

¹²⁶ VON TUHR, Andreas (2005), *“Derecho Civil- Volumen II: Los Hechos Jurídicos”* Madrid España, Editorial Marcial Pons, Pág. 478

negocios formales el declarante puede elegir libremente sus expresiones. Así, la rapidez con que se desarrollan las transacciones comerciales y la inexperiencia jurídica de las partes llevan con frecuencia a expresar en términos incompletos y erróneos incluso las declaraciones más importantes. De ahí que su sentido literal no puede ser decisivo.

Por lo tanto, si los términos del acto o negocio jurídico están claros y no exista ninguna duda sobre la voluntad real del agente (s) que celebraron, se estará al sentido literal de sus declaraciones.

b) Método sistemático (interdependientes).

La interpretación sistemática (contextual o interdependiente) parte del hecho de que el acto jurídico es un todo integral, una unidad indivisible, hallándose sus estipulaciones concatenadas las unas con las otras, cuya significación mantiene su unidad, puesto que interpretar las cláusulas en forma aislada puede generar un resultado con significación contraria a la voluntad real de las partes, lo que no sucederá si la interpretación se efectúa las unas por medios de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto, tal como señala el artículo 169 del Código Civil: *“Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”*.

El método de interpretación sistemática del negocio jurídico permite identificar en las cláusulas del negocio una lógica hermenéutica unívoca, en efecto los actos jurídicos no pueden ser comprendidos como átomos desprovistos de interrelación, pues ello comportaría conclusiones incongruentes, por el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar el negocio jurídico como un todo unitario como una suma de cláusulas poseedoras de una lógica integradora uniforme que permite la interpretación de unas por medio de las otras, atribuyendo a las dudosas, el sentido que resulte del conjunto de todas¹²⁷.

¹²⁷ Tal como señala cuando se trata de una interpretación sistemática en la Casación N° 090-2006-Lima, Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema,

Al respecto el maestro Aníbal Torres Vásquez¹²⁸ refiere que la norma del artículo 169 del Código Civil, tiene su origen en la sexta regla de interpretación de Pothier que expresa: *“Una cláusula debe ser interpretada por las otras cláusulas contenidas en el acto, sea que éstas la precedan o la sigan”*. Esto es, el método de interpretación sistemática en los actos o negocios jurídicos.

Por su parte el profesor Juan Espinoza Espinoza¹²⁹, refiere que la interpretación sistemática, que algún sector de la doctrina prefiere llamar de la “totalidad” del negocio jurídico, implica que la labor hermenéutica no debe agotarse en una cláusula determinada del contrato, o del negocio, sino en su relación con otras, entendiendo las partes del mismo, no como una sumatoria del todo, sino como una unidad funcional.

c) Método teleológico (finalista).

La finalidad que persiguen con la realización del acto jurídico es la obtención del algún resultado práctico, algún fin económico o social, dado que los sujetos realizan actos jurídicos para que produzcan efectos y no para que no los produzcan, pero esta finalidad tiene un valor decisivo en la interpretación del acto jurídico cuando las expresiones tienen varios sentidos.

Al respecto el maestro Aníbal Torres Vásquez¹³⁰ refiere que la norma del artículo 170, se inspira en la tercera regla de interpretación de Pothier que establece: *“Cuando en un contrato los términos son susceptibles de dos sentidos, se los debe entender en el sentido que más conviene a la naturaleza del contrato”*.

21 de Junio 2006 (Anibal TORRES VASQUEZ, “Diccionario de Jurisprudencia Civil”, Lima Peru, 2008, Editorial Girjley, pag.397-398)

¹²⁸ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012) Ob. Cit. Pág. 514.

¹²⁹ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit., Pág. 229.

¹³⁰ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012) Ob. Cit. Pág. 415.

Por su parte Juan Espinoza Espinoza¹³¹ señala que la interpretación teológica, a la cual se le denomina también finalista, causalista o funcional, ante la posibilidad de interpretar una cláusula o expresión en varios sentidos, tiene en cuenta la causa concreta y justificante por la cual se realiza el negocio jurídico.

En tal sentido, queda claro que la regulación del artículo 170 de nuestro Código Civil establece el método de interpretación teleológica cuando establece que: *“Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto”*.

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Como antecedentes de la presente investigación podemos afirmar que desde la vigencia del actual Código Civil, no se ha efectuado un estudio y análisis crítico de la interpretación de los actos o negocios jurídicos; sin embargo, no podemos dejar de mencionar, un estudio monográfico efectuado por la abogada Carmen Arana Courrejolles¹³², cuyo título del libro es *“La Interpretación del Acto Jurídico”*, publicado hace más de 20 años.

En este trabajo monográfico, hace una descripción teórica de los sistemas o teorías de interpretación del acto jurídico, señalando algunas legislaciones civiles que han optado por alguna de los sistemas de interpretación; sin embargo, no existe un análisis crítico de las normas de interpretación regulados en nuestra legislación civil; esto es, que no se mencionada, si el sistema o teoría de interpretación del acto jurídico adoptado en nuestro Código Civil es adecuado o incorrecto, solamente se ha limitado a señalar que *“el Código Civil peruano de 1984, ha tenido acierto al consagrar tres artículos interpretativos en el Libro II, Acto Jurídico, Título IV, Interpretación*

¹³¹ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit. Pág. 236.

¹³² ARANA COURREJOLLES, Carmen (1992). *“La interpretación del acto jurídico”*, Lima: Cultural Cuzco.

del Acto Jurídico, a fin de llenar el vacío legal dejado por el anterior Código de 1936 que no dio cabida a normas de interpretación del Acto Jurídico”, y concluye señalando que “La Jurisprudencia y la Doctrina tienen la gran tarea de completar y articular las normas interpretativas y elaborar los principios y criterios necesarios para consolidar el Sistema Peruano de Interpretación, que permitirá una interpretación del Acto Jurídico con objetividad y adecuación”¹³³, lo que a nuestro entender, la referida autora estaría de acuerdo con el sistema objetivo de interpretación adoptado por nuestra legislación civil, lo cual nosotros discrepamos, tal como señalamos en la presente investigación, sugiriendo mas por el contrario el sistema mixto.

Finalmente, señalamos que a pesar de haber transcurrido más de veinte años de la publicación del trabajo monográfico mencionado, ni la jurisprudencia ni la doctrina nacional ha podido completar ni articular las normas interpretativas ni ha elaborado principios y criterios necesarios para la interpretación adecuada de los actos o negocios jurídicos, tal como la referida autora había concluido con el trabajo monográfico.

Por lo demás, no se ha tenido conocimiento de otros trabajos de investigación sobre el tema en cuestión; sin embargo, no podemos dejar de mencionar algunos aportes de los juristas peruanos, tales como de Fernando Vidal Ramírez, Aníbal Torres Vásquez, Juan Espinoza Espinoza, Lizardo Taboada Córdova, José León Barandiarán, etc., quienes en los libros que se señalan en esta investigación, contienen análisis y comentarios sobre la interpretación del acto o negocio jurídico, visto desde el punto de vista de nuestro Código Civil y la doctrina.

Tal vez cabría mencionar, que últimamente algunos juristas peruanos que han realizado sus estudios de posgrado en Italia, como Morales Hervías, Eric Palacios y Leysser León, quienes como profesores de la Pontificia Universidad Católica vienen efectuando aportes críticos importantes sobre

¹³³ ARANA COURREJOLLES, Carmen (1992); Ob. Cit. Pág. 330-331.

acto y negocio jurídico, pero no necesariamente sobre el tema de la interpretación del negocio jurídico.

Por tanto, en cuanto a los antecedentes no tenemos mayores referencias de investigación nacional que se haya realizado sobre el tema de interpretación.

2.3. BASES TEÓRICAS

2.3.1. Marco Conceptual

a) Autonomía Privada.

Emilio Betti¹³⁴ conceptúa como *“actos de autodeterminación, de autorregulación de los intereses propios entre los mismos interesados”*. *“Es decir, como actividad y potestad creadora, modificatoria o extintiva, de relaciones jurídicas entre individuo e individuo; relaciones cuya vida y vicisitudes están ya disciplinadas por normas jurídicas existentes”*.

Werner Flume¹³⁵, afirma *“Se llama autonomía privada al principio de autoconfiguración de las relaciones jurídicas por los particulares conforme a su voluntad. La autonomía privada es una parte del principio de la autodeterminación de las personas”*.

Aníbal Torres Vásquez¹³⁶, define *“La autonomía de la voluntad privada es el poder que tienen las personas para, con su manifestación de voluntad, darse normas por sí mismos con el fin de regular sus intereses en el campo de las relaciones económico-sociales”*. Esto es, que por la autonomía de la voluntad privada, las personas son libres de celebrar o no un acto jurídico.

¹³⁴ BETTI, Emilio (2000), Ob. Cit. 47- 48 y 52.

¹³⁵ FLUME, Werner (1998). Ob. Cit. Pág. 23.

¹³⁶ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012), Ob. Cit. Pág. 139.

Juan Espinoza Espinoza¹³⁷ define *“La autonomía Privada es un poder que el ordenamiento jurídico otorga al sujeto de derecho para que autorregule sus propios intereses”*.

Fernando Vidal Ramírez¹³⁸ señala *“La autonomía de la voluntad debe entenderse, como la libertad humana y el poder jurídico que el Derecho objetivo reconoce a los sujetos para la regulación de sus propios intereses”*.

b) Acto o Negocio Jurídico.

En esta categoría es importante señalar los conceptos propuestos por los juristas de la especialidad que guardan cierta coherencia en su contenido, para ello citaremos definiciones propuestos tanto por la doctrina internacional como la nacional.

Erich Danz (1850-1914)¹³⁹ plantea la siguiente definición *“El negocio jurídico es una declaración privada de voluntad que tiende a alcanzar un resultado jurídico, resultado que el Derecho ordena que se produzca porque lo quiere el declarante”*.

Francesco Santoro-Passarelli¹⁴⁰, define que el negocio jurídico es el acto de una voluntad autorizada por el ordenamiento jurídico para perseguir un fin propio.

Renato Scognamiglio¹⁴¹, define como un acto de autorregulación de intereses privados, en cuanto tal, jurídicamente relevante; o sin más, un acto

¹³⁷ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012).Ob. Cit. Pág. 23.

¹³⁸ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), Ob. Cit. Pág. 59

¹³⁹ DANZ, Erich (1926), *“La interpretación de los negocios jurídicos”*, Madrid España, traducción de la 3ª edición alemana y concordancias con el Derecho español por W. Roces, Librería General de Victoriano Suarez, Pág. 19. El mismo libro del autor, pero editado en el Perú en el año 2009, con Estudio Preliminar de Profesor Eric Palacios Martínez, pág. 63.

¹⁴⁰ SANTORO-PASSARELLI, Francesco (1964), *“Doctrinas Generales del Derecho Civil”*, Traducción y concordancias de derecho español por A. Luna Serrano, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. 139.

de autorregulación de los intereses privados, entendiéndose que se está haciendo referencia a la realidad jurídica.

Emilio Betti (1890-1868)¹⁴², señala que *“los negocios pueden definirse, en general, como actos de autonomía privada destinados a dictar estructuras de intereses, que la conciencia social ya considera como vinculantes entre las partes, aún antes de que tales estructuras se eleven a la condición de negocios jurídicos”*. Luego en otro punto el mismo autor refiere que *“el negocio jurídico puede ser concebido como un acto de autonomía privada, al cual el Derecho asigna efectos destinados a realizar la función socialmente útil que es peculiar de cada tipo de negocios”*¹⁴³.

En el mismo sentido el citado autor define en su libro *“Teoría General del Negocio Jurídico”*¹⁴⁴, cuyo texto literal es: *“Es el acto con el cual el individuo regula por sí los intereses propios en las relaciones con otros (acto de autonomía privada), y al que el Derecho enlaza los efectos más conformes a la función económico-social que caracteriza su tipo (típica en ese sentido)”*.

En esta definición cabe resaltar la autonomía privada y el interés de las partes en el negocio jurídico.

Giuseppe Stolfi¹⁴⁵, define *“como la manifestación de voluntad de una o más partes con miras a producir un efecto jurídico, es decir, el nacimiento, la modificación de un derecho subjetivo o bien su garantía o su extinción”*.

Aníbal Torres Vásquez¹⁴⁶, señala, “Para el Derecho peruano, las expresiones acto jurídico y negocio jurídico son sinónimos, en el sentido de

¹⁴¹ SCOGNAMIGLIO, Renato (2004), *“Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico”* (2ª ed. 1969), Edición, traducción y notas de Leysser L. León y Prólogo de Pietro Rescigno, Lima-Perú: Editorial Grijley, Pág. 165.

¹⁴² BETTI, Emilio (2001), *“Reflexiones sobre la noción del Negocio Jurídico”*. En: VVAA, *“Teoría General del Negocio Jurídico”* (4 estudios fundamentales), traducción y edición al cuidado de Leysser L. León, Presentación de Giovanni Battista Ferri, ARA Editores. Pág. 31.

¹⁴³ BETTI, Emilio (2001), *“Reflexiones sobre la noción del Negocio Jurídico”*, Ob. Cit. Pág. 34.

¹⁴⁴ BETTI, Emilio (2000). *“Teoría General del Negocio Jurídico”*. Granda: Comares, pág. 57.

¹⁴⁵ STOLFI, Giuseppe (1959), *“Teoría del Negocio Jurídico”*, Madrid España, Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. 2.

que son la manifestación de voluntad destinada a producir ciertos efectos jurídicos. La distinción entre ambas expresiones es solamente doctrinaria". Partiendo de esta consideración, el referido jurista plantea la siguiente definición: "El acto jurídico o negocio jurídico es el hecho humano (acción u omisión) voluntario, lícito, con manifestación de voluntad orientada a producir directa e inmediatamente efectos jurídicos consistentes en crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas".

Guillermo Lohmann Luca De Tena¹⁴⁷, define *"El negocio jurídico puede ser conceptuado como la declaración o declaraciones de voluntad de Derecho Privado que, por sí o en unión de otros hechos, estarán encaminados a la consecución de un fin práctico, lícito y admitido por el ordenamiento jurídico, el cual reconoce a tales declaraciones como el sustento para producir efectos prácticos queridos y regular relaciones jurídicas de derecho subjetivo"*.

Juan Espinoza Espinoza¹⁴⁸, define *"El negocio jurídico se configura cuando uno o varios sujetos declaran su voluntad, a efectos de autorregular sus propios intereses, creando un precepto (entendido como regla de conducta), que normará las relaciones o situaciones jurídicas que se han creado, modificado o extinguido"*.

Los profesores Rómulo Morales Hervias y Leysser León¹⁴⁹ plantean la siguiente definición *"El negocio jurídico es el acto de autonomía privada de autorreglamentación o de autodeterminación de intereses privados"*.

Por su parte los juristas peruanos Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre¹⁵⁰, refiere que *"De hecho, la definición recogida en nuestro Código*

¹⁴⁶ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012), Ob. Cit. Pág. 77 y 59.

¹⁴⁷ LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1997). **"El Negocio Jurídico"**. Lima-Perú, segunda reimpresión de la segunda edición, Editora Jurídica Grijley, Pág. 46

¹⁴⁸ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012), Ob. Cit., Pág. 40.

¹⁴⁹ MORALES HERVIAS, Rómulo y LEÓN Leyser L. (2004), Presentación del libro Lecciones sobre el Contrato (curso de derecho civil) de Luigi Ferri, Lima Perú, Editora Jurídica Grijley, Pág. XV-XVI.

¹⁵⁰ OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario (2011) **"Nulidad virtual. La sanción no tipificada"**. En: Observatorio de Derecho Civil, Volumen X: Acto Jurídico,

Civil, se acomoda más a lo que la doctrina ha desarrollado como concepto de negocio jurídico o acto jurídico negocial, el mismo que se caracteriza y distingue del acto jurídico –en sentido estricto- porque además del evento y la voluntariedad del comportamiento, el sujeto tiene un propósito, un fin práctico que pretende y controla a través de su voluntad”.

c) Interpretación del Negocio Jurídico.

El acto jurídico se configura a través de la declaración de voluntad, para cuyo efecto se utilizan palabras, gestos, signos, etc., que hacen viable la exteriorización de la voluntad; en tal sentido una vez declarada, debe ser objeto de interpretación, puesto que la interpretación es la actividad tendiente a fijar el sentido de la declaración; es decir, a precisar cuál es la voluntad negocial que se exterioriza a través de la declaración.

Pero la interpretación de los negocios jurídicos no es tan fácil, pues como refiere el jurista alemán Erich Danz¹⁵¹ la interpretación de los negocios jurídicos presenta dificultades mucho mayores que interpretar una ley, porque las declaraciones de voluntad contenidas en éstos no siempre consisten en palabras, sino que muchas veces revisten la forma de otros actos que en la vida pasan por declaraciones de voluntad (Por ejemplo, entro en un estanco y, sin decir una palabra, cojo un cigarro y lo enciendo), y en ocasiones hasta aparecen en forma de silencio, cuando el declarante se abstiene de hacer ninguna manifestación; y suele también ocurrir que la declaración de voluntad, aun cuando se manifiesta mediante palabras, no indica expresamente (o explícitamente) los efectos jurídicos concretos que han de producirse, sino que hay que averiguarlo aclarando debidamente las circunstancias todas en que se formuló la declaración.

Carlos Alberto Calderón Puertas y Carlos Agurto Gonzales (Coordinares), Lima-Perú, Editora Jurídica MOTIVENSA Pág. 147.

¹⁵¹ DANZ, Erich (1926). Ob Cit. Pág. 18. El mismo libro del autor, pero editado en el Perú en el año 2009, con Estudio Preliminar de Profesor Eric Palacios Martínez, pág. 61.

Emilio Betti¹⁵² al referirse sobre la interpretación del negocio jurídico, nos dice que *“La interpretación que interesa al Derecho es una actividad encaminada a indagar y construir el significado que haya de atribuirse a una declaración o a un comportamiento dentro de la órbita social en que se expresa. Desarrollando, conforme a la ilación lógica, la fórmula usada o el tipo de comportamiento mantenido, y ajustando sus eventuales interferencias con el pensamiento del autor, tiende a obtener la idea que se les atribuye en el ambiente social, integrando así, en su contenido, el supuesto del acto jurídico”*.

Guillermo Lohmann Luca De Tena¹⁵³, define: *“Se entiende por interpretación, en líneas generales, el procedimiento y método de investigación del significado de una declaración de voluntad y como consecuencia del cual se explica jurídicamente el contenido de la misma y el precepto querido por el declarante dentro de un contexto social determinado”*.

El maestro Aníbal Torres Vásquez¹⁵⁴ define que *“La interpretación del acto jurídico es la técnica dirigida al conocimiento del contenido, sentido y alcance del acto, o sea de la regulación establecida por el agente o agentes que lo crean. En otras palabras, se trata de determinar el contenido del acto atribuyéndole su exacto significado que determine los deberes u obligaciones y los derechos que de él se derivan”*.

El maestro José León Barandiaran¹⁵⁵ nos dice que *“Interpretar significa, como se sabe, encontrar sentido a algo, y se interpreta un negocio jurídico*

¹⁵² BETTI, Emilio (2000). **“Teoría General del Negocio Jurídico”**. Granada- España, traducción y concordancia con el Derecho español por A. Martín Pérez, y Estudio Preliminar por José Luís Monereo Pérez, Editorial Comares, S.L. Pág. 273-274. En su libro **“Interpretación de las leyes y actos jurídicos”** (1975), en la página 347 señala : *“En la interpretación del negocio se trata de darse cuenta, con criterio ante todo psicológico, del precepto de la autonomía privada con relación a la coherencia (falta de contraste) entre el intento práctico perseguido y la función económico-social típica de aquella autonomía que merezca la tutela jurídica según los criterios generales del ordenamiento”*.

¹⁵³ LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1997). **“El Negocio Jurídico”**. Lima - Perú, segunda reimpresión de la segunda edición, Editora Jurídica Girjley, Pág. 253.

¹⁵⁴ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). Ob. Cit., Pág. 479.

¹⁵⁵ LEÓN BARANDIARAN, José (1999). **“Acto Jurídico”**. Lima-Perú, Editores Gaceta Jurídica, edición económica, 3ra. Edición, Pág. 82

en cuanto es susceptible de entenderse en determinado sentido". Por tanto, en lo que respecta a la materia de nuestra investigación, significa encontrar o entender el sentido de la voluntad real o la común intención de las partes, expresadas en determinado acto o negocio jurídico.

Por su parte Fernando Vidal Ramírez¹⁵⁶ refiere que *"la interpretación del acto jurídico supone, la indagación del verdadero sentido y alcance de la manifestación o manifestaciones de voluntad que lo han generado y le han dado contenido con la finalidad de precisar y normar sus efectos. La interpretación viene, así, a reparar el defecto en la manifestación de la voluntad, a fin de que ésta alcance el fin que se ha propuesto, pues consiste, en suma, en establecer lo que la parte o partes del acto jurídico han manifestado y asegurar, por este medio, la preservación de lo que cada sujeto ha querido y expresado"*. Luego al concluir señala *"En conclusión, la interpretación tiene una finalidad normativa pues su objeto es, precisamente, el contenido de la manifestación de voluntad, que cumple una función normativa de las relaciones jurídicas generadas por los actos jurídicos"*.

Francisco Moreyra García Sayán¹⁵⁷, define que *"La interpretación puede entenderse como una operación intelectual destinada a atribuir al contenido del acto el significado que las partes supuestamente quisieron darle -y entonces se le conoce como subjetiva o en concreto-; o a reconstruir el acto teniendo en consideración que su contenido debe responder a las fuerzas del medio social y circunstancias en el que la declaración se emitió -y entonces se le llama objetivo o en abstracto-. La primera tiene por finalidad descubrir aquello que las partes realmente quisieron al celebrar el acto, cuál fue su intención. La segunda persigue establecer lo querido a partir de insertar el acto, apreciándolo dentro del contexto social en el que fue concebido"*.

¹⁵⁶ VIDAL RAMIREZ, Fernando (2011). Ob. Cit. Pág. 336.

¹⁵⁷ MOREYRA GARCÍA SAYÁN, Francisco (2005). **"El Acto Jurídico según el Código Civil Peruano"**. Lima-Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pág. 148.

d) Interpretación Jurídica

Desde el punto de vista jurídico, entre los autores encontramos diversas definiciones acerca de lo que es la Interpretación. Así, Guillermo Cabanellas De Torres¹⁵⁸ afirma que: *“La Interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición.”*

Interpretar una norma es esclarecer su sentido¹⁵⁹ y la interpretación es la investigación en la penetración del sentido y del alcance efectivo de la norma; esto es atribuir un significado a la norma para medir su extensión precisa y la posibilidad de aplicación a una determinada relación social a regular. Es pues, una operación lógica, de conocimiento¹⁶⁰.

En tal sentido estamos de acuerdo y nos sumamos a las palabras del profesor Aníbal Torres Vásquez¹⁶¹, cuando dice: “interpretar una norma jurídica es establecer su sentido y alcance en relación con un hecho determinado al cual debe aplicarse. ¿Cómo establece el intérprete el sentido de la norma?. En primer lugar, la labor del intérprete se dirige a descubrir o develar el sentido inmanente en la norma; en segundo lugar, como por lo general una norma evoca varios sentidos, selecciona o fija el sentido con el cual se obtenga la solución más justa del caso concreto; y en tercer lugar, si el sentido o sentidos de la norma no se adecuan a la nueva realidad social, el intérprete atribuye a la norma el significado que lo actualiza”.

¹⁵⁸ CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: **“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”**. Editorial Heliasta. Vigésimo tercera edición, 1994. Buenos Aires – Argentina. Tomo IV. Pág. 472.

¹⁵⁹ ENNECCERUS, Ludwig (1953). **“Tratado de Derecho Civil”**, Tomo I. Barcelona-España, Casa Editorial Bosch, traducido de la 39° edición alemana, Pág. 197.

¹⁶⁰ MESSINEO, Francesco (1954). **“Manual de Derecho Civil y Comercial”**, Tomo I. Buenos Aires Argentina, Primera edición español, Ediciones Jurídica Europa-América, Pág. 95.

¹⁶¹ TORRES VASQUEZ, Aníbal (2001). **“Introducción al Derecho”** (Teoría General del Derecho). Lima-Perú, 2da. Edición, Editorial, Ideosa y Editorial Temis de Colombia, Pág. 516.

De todo lo expuesto podemos concluir que interpretar una norma es determinar, averiguar, descubrir, develar, desentrañar el sentido y alcance de la misma.

e) La Manifestación y Declaración de Voluntad.

Fernando Vidal Ramírez¹⁶² define *“La manifestación de voluntad consiste en dar a conocer, por cualquier medio que la exteriorice, la voluntad interna. Se trata de un comportamiento que recurre a la expresión verbal o a la expresión escrita, y aun a cualquier otro medio expresivo, que puede ir desde la expresión mímica hasta una conducta concreta, siempre que denote la voluntad del sujeto. Manifestar la voluntad es, pues, exteriorizarla por cualquier medio”*. Parece que este es un concepto bastante claro que no requiere mayor precisión.

Guillermo Lohmann Luca De Tena¹⁶³, señala que *“La declaración de voluntad es, pues, la proyección externa de aquellos intereses que se quieren afectar y sobre los que se asume un compromiso; exteriorización de un propósito interno para el que se requiere un resultado y que se expresa con el objeto de hacer conocer a otros sujetos (determinados o no) una intención de incidir sobre una relación jurídica, que se espera reconocido como la voluntad concreta del sujeto”*.

Juan Espinoza Espinoza¹⁶⁴, define *“La manifestación de voluntad es la exteriorización de un hecho psíquico interno destinado a producir efectos*

¹⁶² VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011), Ob. Cit. Pág. 94.

¹⁶³ LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1997), Ob. Cit. Pág. 107-18.

¹⁶⁴ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit. Pág. 51. Si bien un sector de la doctrina nacional y extranjera considera como sinónimos los conceptos de manifestación y declaración; sin embargo otros sostienen que *“en ambas se produce la exteriorización de un hecho psíquico interno; pero la diferencia estriba en que la consecuencia jurídica en la manifestación de voluntad no es necesariamente querida por el sujeto, mientras que sí lo es en el caso de la declaración”*. Por su parte Aníbal TORRES VÁSQUEZ, hace la siguiente distinción: *“La declaración es aquella con la cual se celebra el acto, en cambio, la manifestación comprende tanto la declaración con la cual se celebra el acto como todo comportamiento de las partes anterior, simultaneo y posterior a la celebración”* (TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, *“Acto Jurídico”*. Lima-Perú, 3ra. Edición 2007, Editorial Idemsa pág. 133).

jurídicos. Si estos son queridos por el agente, se trata de una declaración de voluntad". Como podrá observarse en esta definición el autor hace una distinción entre la manifestación de voluntad y declaración de voluntad.

f) Buena fe.

Erich Danz¹⁶⁵, nos señala el sentido y alcance de esta palabra en los siguientes términos: "La palabra buena fe significa confianza, seguridad y honorabilidad basadas en ella, por lo que se refiere sobre todo al cumplimiento de la palabra dada; especialmente la palabra "fe", fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a la conducta *leal* de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando en que ésta no la engañará".

Juan Espinoza Espinoza¹⁶⁶, precisa el concepto: "*El principio de la buena fe puede ser afrontada desde dos perspectivas: una subjetiva, en la cual se considera como la convicción interna que se está actuando correctamente, conforme a derecho (llamada también buen fe creencia); y otra objetiva, caracterizada por el comportamiento correcto del sujeto que es percibido por la contraparte o por los demás (buena fe lealtad, probidad, confianza o comportamiento)*".

Aníbal Torres Vásquez¹⁶⁷ efectúa la siguiente definición: "La buena fe subjetiva es de tono individual e intelectual, consiste en la creencia o ignorancia que tiene el sujeto de la relación jurídica de estar actuando con corrección y lealtad de comportamiento, de que no está dañando un interés ajeno; ausencia de dolo o culpa, ignorancia o error que el agente no puede superar con una diligencia normal. Este actuar del sujeto es considerado honrado y justo, de buena fe, no obstante su ignorancia o error, lo que permite atribuir al acto jurídico sus efectos que le son normales. La buena fe subjetiva se refiere también a la creencia del destinatario de la declaración

¹⁶⁵ DANZ, Erich (1926), Ob. Cit. Pág. 191.

¹⁶⁶ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit., Pág. 224.

¹⁶⁷ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). Ob. Cit. Pág. 510.

de voluntad, quien fía y confía –habida cuenta de todas las circunstancias objetivas- en que ésta corresponde al querer real del declarante. En este caso el acto jurídico es válido aunque no esté de acuerdo con la voluntad real del declarante, puesto que el Derecho no puede amparar a quien con su declaración crea situaciones productivas de errores o falsas interpretaciones. La buena fe objetiva es entendida como un modelo de conducta social imperante en una comunidad; un comportamiento de fidelidad típico o deber general de corrección, de honestidad, probidad, confianza, sinceridad y lealtad. Las partes del acto jurídico están obligados a actuar en forma diligente y prudente, según el modo normal y propio de gentes honestas, probas y decentes que no buscan crear confusiones u obscuridades para sacar provecho de ellas. La buena fe objetiva supone conferir al acto jurídico el significado que le atribuirían personas normales y leales, aunque en el acto concreto, las partes no estén de acuerdo con ello en absoluto.

2.3.2. Interpretación del Negocio Jurídico en la Legislación Comparada.

Dentro de la legislación comparada sobre la interpretación del negocio jurídico tenemos los ordenamientos civiles de Francia, Alemania, Italia, España y Suiza, que han tenido una fuerte influencia en la normatividad civil de la mayoría de los países del mundo.

En tal sentido, la importancia de los códigos civiles de estos países han sido considerados como modelo y emblemático para los códigos civiles de muchos países, por lo que hemos creído conveniente señalar algunas normas referidas a la interpretación del negocio jurídica, a fin de determinar el sistema de interpretación adoptada.

Hemos considerado necesario analizar los Códigos Civiles de México y Cuba sobre la interpretación del acto jurídico, a fin de determinar el sistema interpretativo adoptado por dichos países.

Finalmente, hemos considerado todos los códigos civiles de los países de Latinoamérica, a fin determinar la teoría o sistema de interpretación que han adoptado en su legislación civil.

a) Código Civil Francés¹⁶⁸.

En la Sección V: "De la Interpretación de los Contratos", del Capítulo III: "Del Efecto de las Obligaciones", del Título III: "De los Contratos y de las Obligaciones Contractuales en General", del Libro Tercero: De los diferentes modos de adquirir la propiedad", se encuentra regulado sobre la interpretación de las obligaciones.

El Código francés no legisló sobre el acto jurídico sino sobre la convención, al hacerlo sobre la interpretación de las obligaciones estableció las siguientes normas:

"Artículo 1156.- En los convenios se debe buscar cuál ha sido la común intención de las partes contratantes, más bien que detenerse en el sentido literal de los términos".

"Artículo 1157.- Cuando una cláusula es susceptible de dos sentidos se debe más bien entender en el sentido que ella pueda producir algún efecto, y no en el sentido en el cual ella no pueda producir ninguno".

"Artículo 1158.- Los términos susceptibles de dos sentidos deben ser tomados en el sentido que más conviene a la materia del contrato".

"Artículo 1159.- Lo que es ambiguo, se interpreta por aquello que es de uso en el país donde ocurrió el contrato".

"Artículo 1160.- Se debe suplir en el contrato las cláusulas que son de uso, aunque ellas no sean expresadas".

¹⁶⁸ CÓDIGO CIVIL FRANCÉS, Traducido por Álvaro Núñez Iglesias, Madrid Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2005).

“Artículo 1161.- Todas la cláusulas de los convenios se interpretan las unas por las otras, dando a cada una el sentido que resulte del acto entero”.

“Artículo 1162.- En la duda, el convenio se interpreta contra aquél que ha estipulado y en favor de aquél que ha contraído la obligación”.

“Artículo 1163.- Por generales que sean los términos en los que un convenio es conocido, este convenio no comprende sino las cosas sobre las cuales aparece que las partes se han propuesto convenir”.

“Artículo 1164.- Cuando en un contrato se ha expresado un caso para la explicación de la obligación, no por ello se refuta haber querido restringir el entendimiento que el compromiso de derecho tiene sobre los casos no expresados”.

Se da preferencia o prioridad a la “común intención de las partes”, más que al sentido literal del contrato, puesto esa sería la voluntad real de los contratantes. El sentido literal de los términos del contrato puede conducir contrario a la común intención de las partes; de ahí que esta norma orienta la búsqueda de la parte subjetiva de los contratantes.

Buscar la común intención de las partes es encontrar la voluntad real de las partes, lo cual viene a ser la finalidad primordial de la interpretación de los negocios jurídicos, puesto que encontrar la voluntad real de las partes es esclarecer la intención de los mismos con equidad; sin embargo, atenerse solamente en el sentido literal de las palabras, se corre el riesgo no solamente no encontrar la intención común de las partes, sino que con dicha interpretación se cause acto de una injusticia.

b) Código Civil Alemana.

“Artículo 133.- Interpretación de una declaración de voluntad: Para interpretar una declaración de voluntad, habrá de indagarse la voluntad real y no limitarse al sentido literal de las palabras”.

Al respecto Erich Danz¹⁶⁹ señala que este precepto, colocado en la sección de “Negocios Jurídicos”, bajo el título “Declaración de Voluntad”, se refiere a todas las declaraciones de voluntad constitutivas de negocio jurídico. El artículo 133 del Código Civil reproduce y se propone reproducir el precepto que el antiguo Código de Comercio, art. 278, establecía para los negocios mercantiles: “Para juzgar e interpretar los negocios de comercio, el juez investigará la voluntad de los contratantes y no se ceñirá al sentido literal de la expresión”¹⁷⁰.

Casi parecido al Código Civil francés, este artículo es contundente cuando señala que en la interpretación de la declaración debe investigarse la verdadera voluntad en la declaración, y no limitarse al sentido literal de las palabras; sin embargo el artículo 157 va a ser determinante cuando se trata de la interpretación de los contratos o negocios jurídicos.

“Artículo 157.- De los contratos: “Los contratos han de interpretarse como lo exija la buena fe y atendiendo a los usos sociales”.

Este es el artículo que lo identifica como sistema de interpretación objetiva, pues como se advierte, en los contratos se interpreta lo declarado o lo expresado en el contrato, teniendo en cuenta la buena fe y atendiendo a los usos sociales. No se menciona para nada la interpretación de la común intención o la voluntad real de los contratantes. Precisamente este artículo fue defendida arduamente por el jurista alemán Erich Danz por estar a favor de la interpretación objetiva y no subjetiva de los negocios jurídicos o contratos.

¹⁶⁹ DANZ, Erich (1926), *“La interpretación de los negocios jurídicos”*, Madrid España, traducción de la 3ª edición alemana y concordancias con el Derecho español por W. Roces, Librería General de Victoriano Suarez, Pág. 14.

¹⁷⁰ DANZ, Erich (1926), Ob. Cit., pág. 36-37.

Como puede observarse que el artículo 133 se refiere a la interpretación de la declaración de voluntad; mientras el artículo 157 se refiere a la interpretación de los contratos (negocio jurídico).

c) Código Civil Italiano de 1942.

Los artículos referente a la interpretación de los contratos se encuentran en el Libro IV: De las Obligaciones, Título II: De los Contratos en General, Sección IV: De la Forma del Contrato, Capítulo IV: De la interpretación del contrato (artículos 1362-1371).

“Artículo 1362.- Intención de los contratantes: Al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la común intención de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras.

Para determinar la común intención de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aún posterior a la conclusión del contrato”.

“Artículo 1363.- Interpretación integral de las cláusulas: Las cláusulas del contrato se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte del conjunto del acto”.

“Artículo 1364.- Expresiones generales: Por generales que fueran las expresiones usadas en el contrato, éste no comprende sino los objetos sobre los que las partes se han propuesto contratar”.

“Artículo 1365.-Indicaciones con valor ejemplificado: Cuando en un contrato se hubiera expresado un caso con el fin de explicar un pacto, no se presumirán excluidos los casos no expresados a los que, de acuerdo con la razón, pueda extenderse dicho pacto”.

“Artículo 1366.- Interpretación de buena fe: El contrato debe ser interpretado de acuerdo con la buena fe”.

“Artículo 1367.- Conservación del contrato: En la duda, el contrato o cada una de sus cláusulas deben interpretarse en el sentido en el que puedan tener algún efecto y no en aquél según el cual no tendría ninguno”.

“Artículo 1368.- Prácticas generales con valor interpretativo: Las cláusulas ambiguas se interpretarán de acuerdo con lo que se practique, generalmente, en el lugar en que el contrato haya sido concluido.

En los contratos en que una de las partes sea un empresario, las cláusulas ambiguas se interpretarán de acuerdo con lo que se practique, generalmente, en el lugar donde esté la sede de la empresa”.

“Artículo 1369.- Expresiones con varios sentidos: Las expresiones que puedan tener varios sentidos deberán, en caso de duda, entenderse en el sentido más conveniente a la naturaleza y al objeto del contrato”.

“Artículo 1370.- Interpretación contra el autor de la cláusula: Las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato o en formularios dispuestos por uno de los contratantes se interpretarán, en caso de duda, a favor del otro”.

“Artículo 1371.- Reglas finales: Cuando a pesar de la aplicación de las normas contenidas en este capítulo, el contrato continué siendo oscuro, deberá éste ser entendido en el sentido menos gravoso para el obligado, si fuese a título gratuito; y, en el sentido que realice la armonización equitativa de los intereses de las partes, si fuese a título oneroso”.

Al respecto Mauro Grondona¹⁷¹ nos dice que la regla sobre la común intención de las partes tiene como precedente directo el Código Civil italiano de 1865, en cuyo artículo 1131 se disponía que *“En los contratos se debe establecer cuál ha sido la común intención de las partes contratantes, en lugar de limitarse al sentido literal de las palabras”*. Es evidente que el

¹⁷¹ GRONDONA, Mauro (2004), ***“La común intención de las partes y el principio de la buena fe en la interpretación del contrato: Un panorama de la autonomía privada”***. En: VVAA (Guido ALPA y Otros) *“Estudios sobre el Contrato en General”*, Lima Perú, 2ª Edición, ARA Editores, Pág. Pág. 760.

legislador de 1865 sugiere al intérprete ignorar el sentido literal, es decir, aquel sentido que no se manifiesta en virtud de la aplicación de un principio de lógica interna a la operación negocial –según el cual la específica expresión se resolvería en él, y tomaría significado del, complejo reglamento contractual-, sino en virtud del significado de cada palabra del texto contractual, al interior del cual cada específica expresión se mantiene como unidad propia, en un aislamiento semántico que anuncia, con seguridad, equívocos y problemas con respecto a los efectos del negocio –y por lo tanto, equívocos y problemas del contrato en el plano operativo-; de aquí la crisis del contrato como instrumento creador de riqueza, es decir, la crisis del contrato como operación económica.

Claro está que la voluntad interna no exteriorizada no tiene efectos jurídicos, tal como Stolfi¹⁷² precisa, que “esta disposición no significa que la voluntad interna aun no manifestada exteriormente deba producir efectos jurídicos, ya que no se puede privar de importancia a la declaración que con todo es necesaria para manifestar el interno querer, sino que significa que la voluntad real no debe obtenerse únicamente por los medios facilitados por la gramática y el diccionario, sino con todos los que suministre la lógica”. Asimismo, la segunda parte del artículo en cuestión exige valorar el “comportamiento o conducta de conjunto” de los interesados, incluso la “posterior” a la conclusión del acto, por tanto con mayor razón se tendrá en cuenta lo que se deduzca del curso de las negociaciones.

Como dice Luigi Ferri¹⁷³, “el acuerdo no puede producirse entre intenciones que se mantienen internas o secretas, ya que, para encontrarse, dos voluntades deben exteriorizarse, y, por lo tanto, objetivarse. La intención común es un concepto que alude, no a las voluntades internas o

¹⁷² STOLFI, Giuseppe (1959), *“Teoría del Negocio Jurídico”*, Madrid España, Traducción y notas del Derecho Español por Jaime Santos Briz, Editorial Revista de Derecho Privado Pág. 288.

¹⁷³ FERRI, Luigi (2004), *“Lecciones sobre el contrato”* (Curso de Derecho Civil), Lima Perú, 6ta. Reimpresión de la 2da. Edición de 1982, Presentación- notas y edición al cuidado de Rómulo Morales Hervías y Leysser León, Traducción de Nélvar Carreteros Torres, Pág. 155.

psicológicas de las partes, sino a las voluntades manifestadas y objetivadas en el contrato, en el acuerdo”.

Emilio Betti¹⁷⁴, dice “Solo pueden constituir objeto de interpretación relevante para el Derecho los comportamientos exteriormente reconocidos en el mundo social, y no, en cambio, una voluntad que se haya quedado en el mero hecho psíquico, sin alcanzar una objetivación adecuada”.

f) Código Civil Español

Artículo 1281.- “*Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas*”.

El contrato es el negocio jurídico por excelencia, por tanto sus reglas interpretativas son aplicables, con carácter general, a todo negocio jurídico. Ahora bien, si las palabras utilizadas dejan duda sobre la intención de los contratantes, prevalecerá la intención común de las partes sobre la letra.

Pero para indagar esta voluntad común de las partes deberá atenderse a los actos de los contratantes anteriores, coetáneos y posteriores al contrato o negocio jurídico: a) Actos anteriores son los denominados tratos preliminares; b) Actos coetáneos son los que dan lugar al nacimiento del contrato y vienen determinados por el encuentro de voluntades de las partes; c) Actos posteriores son los que comprenden la realización de las prestaciones derivadas del negocio jurídico o del contrato¹⁷⁵.

¹⁷⁴ BETTI, Emilio (2001), “**Reflexiones sobre la noción de negocio jurídico**”. En: VVAA, Teoría General del Negocio Jurídico (4 estudios fundamentales), traducción y edición al cuidado de Leysser L, León, Presentación de Giovanni Battista Ferri, ARA Editores, Pág. 65.

¹⁷⁵ Aun cuando el jurista español Ignacio DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO en su artículo “La Interpretación del Negocio Jurídico” (página web: <http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7096/7096856>) se refiere solamente a los contratos, nosotros porque por considerar que los contratos vienen a ser una especie del negocio jurídico, consideramos que es perfectamente aplicable su versión a todos los negocios.

Como puede observarse también que en el Código Civil español se otorga la prevalencia de la interpretación subjetiva en los negocios jurídicos (contratos), con la salvedad de que los términos del contrato este claro y no hay discusión sobre la intención de los contratantes.

g) Código Civil Suizo.

Artículo 18.- *“Para apreciar la forma y las cláusulas de un contrato hay que buscar la real y común intención de las partes, sin detenerse en las expresiones o denominaciones inexactas, de la convención”.*

El artículo resalta la búsqueda de la verdadera intención de las partes de un contrato o negocio jurídico, precisando que el intérprete no debe detenerse en las expresiones o denominaciones inexactas de la convención, puesto que la interpretación como un acto de objetividad no puede conducir a expresiones o denominaciones inexactas del acuerdo.

La finalidad de la interpretación es contribuir en el esclarecimiento de la real manifestación de voluntad de las partes en el negocio, que en un momento dado puede carecer de la claridad en la manifestación declarada.

f) Código Civil Mexicano

Artículo 1851.- *“Si los términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella”.*

El artículo señala el método literal de la interpretación de los contratos, pero conforme a la posesión mayoritaria, se prevalece la intención de los contratantes; esto es la voluntad real de las partes, puesto que como refiere si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los

contratantes, la intención prevalece sobre las palabras, con lo que queda sentado la interpretación subjetiva.

Podríamos decir que este artículo es casi similar que el artículo 1281 del Código Civil español.

h) Código Civil Argentino.

El Código Civil de Argentina fue redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield y fue sancionado en el Congreso el 25 de setiembre de 1869, y entró en vigencia el 01 enero de 1871. Luego el Código con el transcurso del tiempo tuvo varias modificaciones, entre ellas el artículo 1198 fue sustituido¹⁷⁶. De ahí que se diga que “El Código Civil argentino, que guardó originalidad respecto al Código francés, no dio contenido a normas de interpretación, pues Vélez Sarsfield asumió posición contraria a legislar sobre las mismas. Sin embargo, a partir de la reforma de 1968 mediante la Ley 17711, la doctrina argentina ha comenzado a ver en el artículo 1198 una norma de interpretación que no veía en el texto original”¹⁷⁷.

“Artículo 1198.- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”.

En virtud de lo preceptuado por el artículo 16 del Código Civil¹⁷⁸ las reglas de interpretación de los contratos establecidas por los artículos 217 y 218 del Código de Comercio son aplicables para la interpretación de los contratos civiles.

¹⁷⁶ Fue sustituido por Art. 1 de la Ley 17.711 del 26 de abril de 1968, entrando en vigencia a partir del 01 de Julio de 1968.

¹⁷⁷ VIDAL RAMIREZ, Fernando (2011) Ob. Cit. Pág. 341.

¹⁷⁸ “Artículo 16.- Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”.

En tal sentido, es necesario tener en cuenta los citados artículos del Código de Comercio¹⁷⁹, cuyas disposiciones son las siguientes:

“Artículo 218.- Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las bases siguiente: 1. Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos”(…).

La jurisprudencia argentina ha confirmado al decir que la “literalidad del texto contractual no descarta la investigación de la voluntad real de las partes, siendo relevantes para ello la intención y la finalidad de los contratantes; es decir, debe tenerse en cuenta la clara intención de ellos, más allá de la literalidad” (C.S.J.N., Fallos 311; 1556).

Regla 1º de Pothier¹⁸⁰, recogido por el artículo 1156 del Código Civil francés. Pothier ejemplifica así: si alguien alquila una habitación de mi casa, y en el nuevo contrato le doy en alquiler mi casa por tantos años, por el precio del anterior arriendo, aunque gramaticalmente mi casa significa la totalidad y no una sola habitación, es obvio que la intención *“no ha sido otra que la de renovar el arriendo de un cuarto que ya había alquilado”*. La regla 8º de Pothier establece que, aunque se haya convenido en términos generales, el contrato *“no comprende más que las cosas por las cuales las partes contratantes han entendido contratar, y no aquellas en las que no han pensado”*.

i) Código Civil Boliviano de 1976

¹⁷⁹ Por Ley 2637 del 05 de octubre 1889, fue dado el Código de Comercio, entrando en vigencia a partir de 01 de mayo de 1890 (Ley 2637)

¹⁸⁰ LORENZETTI, Ricardo Luís (2007), *“Interpretación del contrato en el Derecho Argentino”*. En: VV. AA (2007), *“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”*, Tomo I, Lima-Perú, Editorial Grijley, Pág. 22.

El nuevo Código Civil que data del 02 de abril 1976 la interpretación de los contratos se encuentra regulada en los artículos 510 al 518, las que citamos a continuación:

“Artículo 510: Intención común de los contratantes: I.- En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II.- En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato”.

Al respecto el jurista boliviano Mario Cordero Miranda¹⁸¹ refiere que la Regla que tiene como fuente el artículo 1362 del Código Civil italiano, que coincide con la regla primera para la interpretación de los contratos de Pothier en su Tratado de las Obligaciones, que dice: “Débase buscar en las convenciones cuál ha sido la común intención de las partes contratantes, mejor que no el sentido gramatical de los términos”. De esta importante fórmula, se desprende que en materia de interpretación de los contratos prevalece la voluntad coincidente de las partes, o sea, el consentimiento, sobre el texto escrito del contrato.

Según el párrafo II, a la declaración de voluntad, debe corresponder el comportamiento de las partes, elemento que debe considerarse para descubrir lo que las partes han pretendido. En la labor de interpretación, el juez debe “apreciar el comportamiento total de éstos (de los contratantes) y las circunstancias del contrato”, correspondiendo, por tanto, al intérprete analizar la conducta de las partes para ver si ella responde a lo pactado, así por ejemplo, en una compraventa o en una donación, si en cualquiera de estos casos el vendedor o el donante siguen en posesión del bien cuya disposición se pretende, se puede interpretar que no obstante lo convenido en el contrato, realmente no existió compra venta ni donación.

¹⁸¹ CORDERO MIRANDA, Mario (2007), **“La interpretación de los contratos en Bolivia”**. En: VV. AA (2007), **“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”**, Tomo I, Lima-Perú, Pág. 439-440.

j) Código Civil Brasileño de 2002.

El Código Civil de Brasil en su artículo 85 establece el sistema de interpretación de las declaraciones de voluntad, cuyo texto es la siguiente:

Artículo 85.- “En las declaraciones de voluntad se atenderá más a su intención que al sentido literal del lenguaje”.

Como puede observarse, este artículo muestra una interpretación subjetiva; esto es, que en las declaraciones del acto jurídico o negocio jurídico, le otorga mayor prioridad a la intención de la voluntad, más que al sentido literal del lenguaje, con la finalidad de determinar la voluntad real de las partes.

Atender a la intención de la voluntad, más que al sentido literal, implica pues que el intérprete tiene que tratar de encontrar o determinar la voluntad real de los declarantes o del declarante.

k) Código Civil Colombiano

En el artículo 1618 del Código Civil de Colombia establece el sistema de interpretación de los contratos, cuyo texto es la siguiente:

Art. 1618.- “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.

En toda interpretación de una declaración de voluntad se tienen en cuenta dos bases principales: a) se debe buscar la voluntad real, conforme a la regla del artículo indicado; la voluntad real es la misma voluntad interna únicamente en la medida en que se haya declarado o exteriorizado mediante algún signo; las intenciones no exteriorizadas carecen de toda eficacia jurídica; b) que la buena fe de los negociantes o de terceros hace necesario que en ocasiones prevalezca la voluntad que aparece declarada, pero en

forma supletoria o subsidiaria cuando no es posible determinar la verdadera voluntad de las partes.

Asimismo cabe advertir que en el Proyecto de Reforma del Código Civil de 1980, el Artículo 476 prescribe *“Conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a la literal de las palabras”*. De lo que se colige que en la interpretación del contrato se deben tener en cuenta la intención real de las partes antes que el sentido literal de las palabras; es para determinar la intención real de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aun el posterior a la conclusión del contrato, tal señala la doctrina del sistema de interpretación subjetiva.

I) Código Civil Chileno.

El Código Civil chileno, inspirado en el de Napoleón, estableció el método subjetivo o clásico de interpretación de los actos jurídicos.

El artículo 1560.- “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras”.

Como regla fundamental de interpretación, la voluntad real de los contratantes prevalece sobre los términos en que se ha formulado dicha declaración. Pero la disposición no significa que el intérprete debe desentenderse de los términos del contrato. Debe admitirse que las palabras, por regla general, traducen con fidelidad el pensamiento. Si los términos son claros, lo será igualmente la intención de los partes. Sólo está autorizado el intérprete para apartarse del tenor literal del contrato, cuando contraria la intención de los contratantes *“Conocida claramente”*¹⁸².

Además cabe resaltar que el texto o el contenido del artículo es exactamente igual que el artículo 1618 del Código Civil colombiano.

¹⁸² MEZA BARROS, Ramón (1987), *“Manual de Derecho Civil”, Tomo I*, Santiago de Chile, 7ma. Edición, Manuales Jurídicos N° 39, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 52.

II) Código Civil Ecuatoriano de 2005

En su artículo 1576 del Código Civil de Ecuador, se encuentra determinado el sistema de interpretación adoptada por este país, cuyo texto del artículo es la siguiente:

“Artículo 1576.- Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.

Con este artículo del Código Civil ha sustentado la hipótesis de que en el Ecuador prevalece la voluntad real sobre la voluntad declarada. La razón para ello estriba en el propio texto del artículo que indica que, cuando la intención de ambos contratantes es claramente conocida, no hay para que divagar en lo literal de las palabras.

Este aparente principio no ha sido cuestionado en el Ecuador, pero ¿implica esto que en Ecuador, o en aquellos en que se tiene ésta como primera regla interpretativa, prevalece, simplemente, el principio de la voluntad real? La respuesta debe ser no necesariamente; lo que sucede es que si se puede saber, con claridad absoluta, cuál era la intención o voluntad de los contratantes, no es dable que el juez pretenda cuestionarla intentando hacer prevalecer una voluntad declarada.

Evidentemente, si no se conoce con claridad la intención que las partes tuvieron y esto permite a uno de los contratantes invocar un alcance distinto, el texto literal del contrato comienza a convertirse en el orientador de la opinión de aquel que interpreta, con lo cual, pese a que se reconoce el imperio de la voluntad real, empieza a cobrar forma la posibilidad de acoger la voluntad declarada.

Cualquiera de los contratantes puede intentar, dentro de la etapa de pruebas, dar a conocer al juez claramente cuál era la intención que tenía, y para ello, deberán considerarse las circunstancias que han acompañado a la

formación del contrato (fase de las negociaciones), la naturaleza y la finalidad del mismo y otras circunstancias demostrables.

Evidentemente, el elemento “buena fe” estará presente al momento de la interpretación del contrato, pues el juez debe entender que los contratantes, por principio, han debido intentar proceder de buena fe.

m) Código Civil Paraguayo

El Código Civil de 1988 en su artículo 708 se encuentra configurado el sistema de interpretación adoptada por Paraguay, cuyo texto es la siguiente:

Artículo 708.- “Al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras”.

Para determinar la intención común de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aun posterior a la conclusión del contrato”.

Como puede verificarse que lo primero que ha de buscar el intérprete ha de ser la intención de las partes, por lo que no solo debe fijarse en los términos usados sino ir más allá, observando el comportamiento total de las partes, el cual le ilustrará sobre su intención. Lo que prima es lo declarado y actuado, lo que verdaderamente quisieron las partes al celebrar el contrato.

Los criterios que da la ley civil paraguaya para comprender la intención común de los contratantes son: a) La literalidad del contrato: con las limitaciones razonables; b) La historia de la relación: el juez debe atender el factor histórico; esto es, el comportamiento total de las partes, incluso con posterioridad a la celebración del contrato¹⁸³.

¹⁸³ RODRÍGUEZ ALCALÁ, Roberto Moreno, “¿Contratos hechos por Jueces? 4 ½ sugerencias para evadir al Juez cadi en la Interpretación del Contrato”. En: VVAA (2007), “Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”, Tomo II, Lima-Perú, Editorial Grijley, Pág. 1474-1475.

n) Código Civil Uruguayo.

En el artículo 1298 del Código Civil de Uruguay se encuentra determinado el sistema de interpretación adoptado para los negocios o contratos, siendo el texto el siguiente:

“Artículo 1298.- Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes que el sentido literal de los términos”.

En este precepto legislativo se encuentra consagrado la regla fundamental, que ocupa sin duda un rol central en el proceso de determinar el significado concreto de la norma privada objeto de interpretación. Para desentrañar el significado y alcance de esa norma jurídica hay que estar a la intención común de las partes que la crearon, intención común que ha de indagar el intérprete recurriendo integralmente a todos los elementos, textuales y extratextuales.

En los actos o negocios jurídicos (contratos) siempre se está por la intención común de las partes más que por el sentido literal de las palabras, ello se justifica fundamentalmente por la prevalencia de la autonomía privada de las partes.

Conclusión: De todos los ordenamientos civiles señalados, llegamos a la conclusión que la mayoría de los países, por no decir todos, han adoptado un sistema mixto (subjetiva y objetiva) con relevancia de la interpretación subjetiva en la interpretación de los actos o negocios jurídicos (contratos) ; esto indudablemente guarda un correlato lógico con la autonomía privada que viene a ser la categoría rector y derecho fundamental de la persona en la relaciones jurídicas..

2.3.3. Las Reglas de Interpretación del Negocio Jurídico en el Código Civil Peruano.

Manuel De La Puente y Lavalley¹⁸⁴ refiere que en los Códigos Civiles peruanos posteriores, los contratos dejaron de tener sus propias normas expresas sobre interpretación, por lo cual fue necesario recurrir a las normas generales sobre interpretación del acto jurídico, desde que el contrato es un acto jurídico. Tal es el caso del Código Civil de 1984, que no tiene normas sobre interpretación de los contratos, por lo cual son de aplicación sus artículos 168, 169 y 170 del Código Civil que versa sobre la interpretación del acto jurídico. Recuérdese que el doctor Arias Schreiber, autor del anteproyecto sobre contratos de la Comisión Reformadora, ha manifestado que en el artículo sobre acto jurídico ya aprobado por la Comisión Reformadora se han introducido normas relativas a su interpretación, todo lo cual es aplicable a los contratos en la medida que éstos no son sino una especie de aquél.

Asimismo, el profesor Carlos Alberto Soto Coaguila¹⁸⁵, refiere que el Código Civil no recoge de manera directa ni explícita reglas para interpretar los contratos. Nuestro ordenamiento sólo ha establecido reglas para la interpretación de los actos jurídicos en general. Como todo contrato es un acto jurídico (bilateral o plurilateral), para su interpretación se aplican *mutatis mutandii* (cambiado lo que deba cambiarse) las reglas del acto jurídico.

a) Breves antecedentes históricos.

El jurista Fernando Vidal Ramírez¹⁸⁶, en su calidad de ser uno de los ponentes del Libro II del Acto Jurídico del Código Civil de 1984, reseña que

¹⁸⁴ DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (2007), ***“Interpretación del Contrato”***. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1637-1638.

¹⁸⁵ SOTO COAGUILA, Carlos Alberto (2007), ***“La Interpretación de los Contratos Predispuesto en el Derecho Peruano”***. En: VV AA (2007), “Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, pág. 2057.

¹⁸⁶ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (1985), ***“Exposición sobre el Libro del Acto Jurídico”***. En: “El Derecho: Exegesis y Análisis del Código Civil de 1984”, Arequipa Perú, Colegio de Abogados de Arequipa, Año LXIV, N° 297, Pág. 172.

en el Título IV del Libro II del Código Civil se incorpora normas para la interpretación del acto jurídico. Estas normas sobre interpretación no tienen antecedentes en el Código Civil de 1936. Según la Exposición de Motivos de Olaechea, consideró que el Código no debía dar normas sobre interpretación, pues la cuestión relativa a la interpretación de los actos jurídicos como a la interpretación de la ley en general, era una cuestión que correspondía más a la Ciencia del Derecho, que al derecho constituido, y ese fue el criterio imperante, para que en el Código Civil de 1936, no se plasmara normas de interpretación. Sin embargo, en el artículo 1328 del Código Civil de 1936 la doctrina nacional ha encontrado siempre normas de interpretación. Los primeros comentarios del Código y en este caso especial, el doctor Ángel Gustavo Cornejo, consideró que el artículo 1328 era una norma de interpretación; según ella los contratos son obligatorios, en cuanto se haya expresado en ellos y deben ejecutarse según las reglas de buena fe y común intención de las partes. Para el doctor Cornejo, constituía esta norma una de interpretación y la interpretación debía hacerse en virtud del principio de la buena fe, y también atendiendo a la equidad. Las ideas del doctor Cornejo, son después desarrolladas por José León Barandiaran, que también considera que este artículo 1328, constituye una norma de interpretación, pero hace un aporte, en cuanto a la posición inicialmente seguida por el doctor Gustavo Cornejo, al considerar que la buena fe debía ser apreciada objetivamente y que no debía estar orientada a la intención del sujeto, aquello que fuera la motivación del sujeto y que quedara en el ámbito interno del sujeto, sino que la buena fe debía ser apreciada en cuanto al comportamiento y conducta del sujeto, orientada al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, y a la forma como ejercitar los derechos derivados igualmente del contrato. O sea que queda planteada una apreciación objetiva de lo que es el principio de la buena fe.

Asimismo, el citado ponente al exponer en el Colegio de Abogados de Arequipa¹⁸⁷, señala que se ha escrito mucho alrededor del artículo 1328, -

¹⁸⁷ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (1985), *“Exposición sobre el Libro del Acto Jurídico”*. En: *“El Derecho: Exegesis y Análisis del Código Civil de 1984”*, Arequipa Perú, Colegio de Abogados de Arequipa, Año LXIV, N° 297, Pág. 173.

luego expresa- *“pero yo quisiera concluir señalando que en la doctrina ha habido dos posiciones contrapuestas en relación con el criterio para la interpretación de los contratos o del acto jurídico, y quiero en este caso, por razones obvias, referirme al acto jurídico”*. De un lado la teoría tradicional, llamado Teoría de la Voluntad, según la cual la interpretación debe suponer una indagación en la voluntad interna del sujeto, de establecer cuál es su voluntad real, llegar a determinar el sentido y alcance del acto jurídico celebrado. En contraposición a esta teoría, surge la Teoría de la Declaración o Teoría Objetiva, que es diametralmente opuesta a la Teoría de la Voluntad. Para la Teoría de la Declaración, lo que vale en el método interpretativo, es simplemente atenerse a lo declarado, y no interesa lo que el sujeto haya querido, sino lo que el sujeto dejó expresado. Indudablemente que entre estas dos teorías extremas surge una variedad de teorías; la teoría de la confianza, la teoría de la responsabilidad, etc., pero fundamentalmente, la cuestión radica en estos dos extremos, dos posiciones extremas vinculadas de un lado a la teoría subjetiva o teoría de la voluntad y de otro lado a la teoría objetiva o teoría de la declaración. José León Barandiaran en ese sentido, asume una posición singular, interpreta el artículo 1328, en el sentido de que debe prevalecer la teoría de la voluntad, cuando los efectos del acto jurídico o del contrato son efectos que se van a dar ínter partes, entonces ahí sí, hay que establecer según dice León Barandiaran cuál es la intención verdadera de las partes, cual ha sido su voluntad real, su voluntad interna, que los ha llevado a la celebración del acto jurídico para poder medir los alcances del acto, los efectos que el acto ha generado, pero cuando este acto jurídico surten efectos para terceras personas, cuando estos efectos se proyectan a terceras personas, que a consecuencia de ellas adquieren legítimas expectativas, derechos expectaticios, entonces debe prevalecer la declaración sobre la voluntad, frente a terceros, debe estarse a lo declarado y no a lo querido. Con estos antecedentes doctrinales que hemos sintetizado, se llega a las normas de interpretación, a su formación en el nuevo Código Civil.

En su Exposición dada por el Miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil doctor Fernando Vidal Ramírez¹⁸⁸ manifiesta que el Código Civil de 1936 pretendió no dar contenido a normas de interpretación y Olaechea dejó expresado en la exposición de motivos que la interpretación de los actos jurídicos no era materia propia del derecho positivo sino que correspondía a la Ciencia del Derecho, vale decir, a la doctrina, a la jurisprudencia. En el Código Civil de 1984 sin embargo, ha reaccionado contra esa posición y ha considerado que las normas de interpretación son propias del derecho positivo y por eso les da cabida en el Título IV del Libro II del Código Civil. Pero aun cuando el legislador del 1936 declaró que el Código no contenía normas de interpretación, el artículo 1328 que todos conocemos fue considerado siempre como una norma de interpretación. Aquel que señalaba que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, y se rige por las reglas de la buena fe y la común intención de las partes.

Luego Fernando Vidal Ramírez¹⁸⁹ en su condición de Miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1984, expuso en el *“I Seminario de difusión del Nuevo Código Civil”* en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, afirmando que la doctrina nacional ha encontrado siempre en el artículo 1328 del Código Civil de 1936 una norma de interpretación, y la interpretación más difundida, de mayor impacto si se quiere es la que hace el maestro José León Barandiarán que considera que cuando la relación jurídica, sus efectos se van a dar solamente ínter partes se debe interpretar el acto jurídico de acuerdo a la *“Teoría de la Voluntad”*, pero cuando la relación jurídica se proyecta o trasciende a terceros, entonces, el acto jurídico se debe interpretar de acuerdo a la *“Teoría de la declaración”*. En materia de interpretación siempre ha habido estas teorías diametralmente opuestas: La Teoría de la Voluntad que supone que la interpretación debe

¹⁸⁸ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (Miembro de la Comisión Reformadora), ***“Acto Jurídico, Prescripción y Caducidad”***. En: *“I Seminario de difusión del Nuevo Código Civil”* del 17 Set. Al 04 Oct. 1984, Centro Cultural Universitario de San Marcos “MARKASA”, Lima-Perú, Pág. 86.

¹⁸⁹ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (Miembro de la Comisión Reformadora), ***“Acto Jurídico, Prescripción y Caducidad”***. En: *“I Seminario de difusión del Nuevo Código Civil”* del 17 Set. Al 04 Oct. 1984, Centro Cultural Universitario de San Marcos “MARKASA”, Lima-Perú, Pág. 86 - 87.

hacerse en base a lo que el sujeto quiso, pero el Derecho marcha hacia una objetivación, es un hecho, y entonces el Código Civil de 1984 ha tomado partido y lo ha tomado así de manera definitiva, decisiva y definitiva. El Código Civil de 1984 adopta la Teoría de la Declaración. El acto jurídico se tiene que interpretar sobre lo declarado y no sobre lo querido, así aparece con toda claridad en el artículo 168 del Código. El acto jurídico dice: *“Debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él”*. No hay nada que hacer, el acto jurídico se interpreta de acuerdo a la declaración, de acuerdo a lo que se haya expresado en él. No puede decirse que la buena fe es subjetiva, esto es que la buena fe es la intención, pues la buena fe ya no es un concepto subjetivo, ya dejó de serlo, dado que la buena fe debe ser apreciada objetivamente, la buena fe es importante como conducta externa. El Derecho no se mete en el campo de las intenciones, en el mundo subjetivo de las personas, el Derecho aprecia la conducta externa de las personas, el comportamiento y ese comportamiento nos va a llevar a apreciar si existe buen o mala fe; y en consecuencia este punto ya estaba dilucidado en la doctrina nacional previa al Código Civil de 1984, por cuanto el propio maestro José León Barandiarán, comentando el artículo 1328 del Código Civil de 1936 hablaba que la buena fe tenía que ser apreciada objetivamente, entonces pues, no se trata de una buena fe que debe ser interpretada subjetivamente, sino de una buena fe que es objetiva, manifestada a través de comportamientos, de allí que el Código Civil haya tomado la posición que dejó expresado. Pero, si nosotros vamos a la lectura de los artículos que siguen, se confirma aún más la posición del Código Civil de 1984 en cuanto no cabe la menor duda que el nuevo Código Civil ha tomado posición afiliándose a la Teoría Objetiva o de la declaración.

b) Consideraciones preliminares

La interpretación es una actividad cognitiva que sirve para aclarar los alcances del contenido de un significante o término, a fin de eliminar las ambigüedades existentes y conocer el sentido de éstos en la construcción de una frase. Por ejemplo si una persona le indica a otra “entrégame la

alpaca”, el receptor del mensaje puede entender que se está refiriendo el emisor a la “alpaca” como auquénido o a la alpaca como metal, para precisar el mensaje y lograr una eficiente y efectiva comunicación tendrá que aclararse el contenido semántico de dicha palabra.

Otro ejemplo sería, cuando alguien comunica por telegrama que le sean reservadas en un hotel *“dos habitaciones con tres camas”* para una determinada noche. El comunicante entiende por ello una habitación con dos camas y otra con una cama, esto es, tres camas en total. El hotelero, no obstante, entiende que aquél encarga dos habitaciones con tres camas respectivamente, esto es, seis camas en total. Así, reserva para el cliente las dos habitaciones más amplias con dos camas y en cada una de ellas hace colocar una cama adicional. Dado que todas las habitaciones están ocupadas, no admite después a otras personas que solicitaban alojamiento, y el cliente en cuestión llega al anochecer. Este quiere pagar solamente el precio por tres camas, dado que, según él, no ha encargado más; el hotelero le carga en cuenta seis camas, pues, conforme al telegrama, la ha reservado por esa cantidad¹⁹⁰.

Otro ejemplo clásico traído de Pothier¹⁹¹ es el de la partición de un fundo entre Pedro y Pablo, y en la cual se expresa ambigüamente que “Pablo podrá transitar por el predio”. La interpretación lógica y que consulta la real intención de las partes es la de que Pablo podrá transitar por el predio de Pedro y no la de que Pablo podrá transitar por el predio de su propia heredad, porque esto último carecería de sentido.

Es oportuno también citar en esta parte de la investigación el ejemplo emblemático que menciona el profesor Juan Espinoza Espinoza¹⁹², “Recuerdo cuando organizamos un Congreso Internacional de Derecho Civil, uno de los profesores que conformaba la comisión organizadora se puso en contacto con un connotado civilista italiano para invitarlo, él aceptó y

¹⁹⁰ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). Ob. Cit., Pág. 476.

¹⁹¹ Citado por OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo (1994). Ob. Cit. Pág. 409-410.

¹⁹² ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit Pág. 207.

preguntó si podía llevar a su yerno (que también era profesor de derecho civil) y el organizador dijo que sí. A la llegada de los italianos, se les alojó en el mismo hotel y, durante el Congreso, también se invitó al yerno a exponer. Acabado el certamen, al momento de hacer el check out (dejar o salir del hotel) se le informó al civilista que su yerno tenía que pagar el alojamiento de su habitación, mientras que aquél había entendido que la invitación incluía dar hospedaje al yerno, máxime si había participado en el evento. En este caso aparentemente trivial nos encontramos con un problema de interpretación: no solo de la voluntad declarada al momento de perfeccionar el negocio jurídico, sino de la conducta posterior de las partes”.

Las expresiones usadas en la celebración de un acto jurídico pueden aparecer claras y univocas, sin embargo la verdadera intención de las partes no siempre puede coincidir con lo expresado, por ejemplo, por ignorancia puede declarar erróneamente que se ha celebrado un contrato de “leasing”, cuando en realidad lo que ha suscrito es un contrato de “arrendamiento”; la verdadera intención, el resultado práctico que persiguen las partes contratantes, no es celebrar un contrato de arrendamiento, sino uno de leasing; en casos como éste se dará al acto su verdadera significación derivada de su naturaleza, contenido y circunstancias, aun cuando dicha significación no coincida con la declaración.

Tal como se puede apreciar para construir adecuadamente una frase y permitir que el emisor se comunique con el receptor es necesario que se utilicen los significantes con sus significados adecuados considerando, siempre, el contexto en el que se construye el mensaje (espacio y tiempo). Entonces, la interpretación permite eliminar todo tipo de confusiones en el receptor y lograr de éste una reacción necesaria para la satisfacción del interés del emisor.

En principio debemos señalar que los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, son normas interpretativas, aplicables a todo o a cualquier negocio jurídico; sin embargo estos artículos han establecido diversos criterios de interpretación del acto jurídico y del contrato de modo muy desordenado y en

algunos casos incoherentes; sin establecer ninguna prelación o de subsidiaridad, de ahí la importancia el estudio en nuestra tesis.

Los criterios legales hermenéuticos de interpretación recogidos por el Código Civil peruano, serán a continuación objeto de análisis y estudio en los términos siguientes:

- a) La regla de interpretación de la voluntad declarada y de la común intención de las partes (artículos 168, 1361 y 1362 del Código Civil).
- b) Las reglas de interpretación según la buena fe (artículo 168 y 1362 del Código Civil).
- c) La reglas de interpretación sistemática (artículo 169 del Código Civil).
- d) La regla de interpretación funcional (artículo 170 del Código Civil)

c) Las reglas de interpretación de la voluntad declarada y de la común intención de las partes (artículos 168, 1361 y 1362 del Código Civil).

- ❑ **Artículo 168.- Interpretación objetiva:** *“El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”.*
- ❑ **Artículo 1361.- Obligatoriedad del contrato:** *“Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quién niegue esa coincidencia debe probarla”.*

- ❑ **Artículo 1362.- Buena fe y común intención de las partes:** *“Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”.*

El negocio jurídico, en el Perú, si bien es cierto alude a la manifestación de voluntad en los artículos 140 y 141 del Código Civil¹⁹³; sin embargo pone especial énfasis en la declaración de voluntad, en la medida, que enfrenta los dos tipos de manifestación existentes (expresa y tácita) indicando que “no puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa”, por tanto en nuestro Código Civil, el legislador considera importante que “la voluntad interna se encuentre declarada” (salvo los casos, excepcionales, de manifestaciones tácitas). Así también, podemos entenderlo del artículo 168 del Código Civil cuando se alude a lo “expresado en él (acto Jurídico)”, en tanto, la palabra “expresión” significa “declaración” dado que “expresar” es el uso de signos lingüísticos (palabras o gestos) para exteriorizar un mensaje, lo que implica una “manifestación recepticia” o declaración.

Hecho esta precisión, corresponde sostener, en base a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, que el artículo 168 del Código Civil vigente ha adoptado el sistema objetiva o declaracionista de interpretación de los actos o negocios jurídicos, recogido del Código Civil Alemán, privilegiando de esta manera a la declaración de la voluntad. Esto es así, para todos los actos o negocios jurídicos, incluidos los contratos, puesto que como se ha dicho, el contrato viene a ser especie del negocio jurídico, lo cual por ser un principio del derecho privado no cabe hacer ninguna discusión; siendo así, las normas de interpretación debe ser aplicables para

¹⁹³ **Artículo 140 del Código Civil:** “El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 1. Agente capaz; 2. Objeto física y jurídicamente posible; 3. Fin lícito; 4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad”.

Artículo 141 del Código Civil: “La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se formula oralmente, por escrito o por cualquier otro medio directo. Es tácita, cuando la voluntad se infiere indubitadamente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario”.

todo tipo de negocio jurídico; sin embargo, se advertimos que en el artículo 1361 del Código, se presume que la declaración expresada en un contrato corresponde a la voluntad común de las partes, es decir se refiere al sistema subjetivo o voluntariedad de la interpretación del contrato, lo cual pues no guarda coherencia ni unidad entre los artículos 168 y 1361 del Código Civil. Lo peor es que la carga de la prueba de quien niegue la presunción de la voluntad común de las partes, lo traslada a los agentes, cuando la tarea o la obligación de interpretar los actos o negocios jurídicos en conflicto no son los partes sino los operadores jurídicos (magistrados).

Al respecto el profesor Luciano Barchi Velaochaga¹⁹⁴ expresa “No compartimos la posición adoptada por el legislador en el artículo 1361 del Código Civil, creemos que las normas de interpretación deben buscar el sentido de una voluntad no interna, sino exteriorizada. Al admitir una prueba en contrario, genera mayor incertidumbre, en la operación para determinar el significado jurídicamente relevante del acuerdo contractual. Mayor incertidumbre de la ya existente, al no encontrar en el Código Civil un sistema orgánico de normas sobre interpretación que permita dar uniformidad a la operación interpretativa”. Luego, el citado autor sostiene categóricamente, que “la interpretación debe limitarse a las reglas interpretativas recogidas legislativamente, no pudiendo utilizarse criterios ‘personales’. Sin embargo, la mala regulación de la interpretación del contrato en el Código Civil deja la duda sobre la posibilidad de utilizar reglas no recogidas por el ordenamiento jurídico”, posición que suscribimos.

El artículo 1362 del Código Civil establece que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes; en consecuencia, cuando exista el conflicto en cuanto al contenido de la declaración de los actos o negocios jurídicos, se debe indagar e interpretar que dichos contratos, sí haya negociado, celebrado y ejecutado de acuerdo a la común intención de las partes y no

¹⁹⁴ BARCHI VELAOCHAGA, Luciano (2007), “**La Interpretación del Contrato en el Código Civil Peruano de 1984**”. En: VV AA (2007), “*Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina*”, Tomo III, Lima-Perù, Editorial Grijley, Pág. 1810-1811.

conforme a lo expresado en el contrato; esto es adoptando el sistema subjetivo, lo cual difiere pues sustancialmente con lo prescrito en el artículo 168 del Código Civil.

Podemos concluir que existe una regulación controversial entre el artículo 168 y el artículo 1362 del Código Civil, que amerita una análisis crítico para proponer una solución a esta controversia.

d) Las reglas de interpretación según la Buena Fe (artículo 168 y 1362 del Código Civil).

- ❑ **Artículo 168.-** Interpretación objetiva: *“El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”.*
- ❑ **Artículo 1362.-** Buena fe y común intención de las partes: *“Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”.*

Tanto el artículo 168 como el artículo 1362 del Código Civil peruano refieren a la noción de buena fe en los contratos, lo cual consideramos una reiteración innecesaria, pues se presume que todos los actos o negocios jurídicos se negocian, celebran y se ejecutan según las reglas de buena fe; asimismo, consideramos que el operador jurídico interpreta según el principio de la buena fe, caso contrario no tendría sentido depositar la confianza en los intérpretes; pero en todo caso, convendría suprimir en el artículo 1362 y dejar subsistente en las normas interpretativas de los actos o negocios jurídicos. Precisamente este cuestionamiento es también señalado por el profesor Juan Espinoza Espinoza¹⁹⁵ cuando refiere *“el artículo 1362 del Código Civil redundante en la invocación al principio de la buena fe. En efecto, si ya se establece el mismo en el artículo 168 del Código Civil, que es*

¹⁹⁵ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012), Ob. Cit., Pág. 215.

para todo tipo de acto jurídico (incluso el contrato), este extremo del artículo 1362 del Código Civil resulta superfluo”.

Ambas normas aluden al principio de la buena fe como un criterio rector, de carácter esencial y necesario para el devenir del contrato. En primer lugar debemos indicar que dicho criterio de “buena fe” en tanto está plasmado en la norma jurídica y “tipificado” será concebido como un “criterio normativo de alcance general” y no “un principio que subyace la norma escrita”. En segundo lugar, la noción de buena fe tiene diversos contenidos semánticos que ha conllevado a diversos debates en la Doctrina nacional y extranjera. Una de dichas nociones refiere a la buena fe como “el principio” que alude *“no al análisis de la labor del agente que realiza el trabajo hermenéutico de interpretación, sino al análisis de la actuación de las partes”¹⁹⁶ que han realizado el negocio; esto es, a la determinación de si éstas han actuado correctamente, en donde la buena fe interesa como regla de conducta que, “(...) con particular referencia a la interpretación del contrato exige, básicamente, el preservar la confianza razonable de cualquiera de las partes sobre el significado del acuerdo”¹⁹⁷ (...).*

Desde nuestro punto de vista, la buena fe (en dicho contexto) está relacionada con la valoración¹⁹⁸ (apreciación) que los sujetos intervinientes realizan respecto del contenido del acto jurídico (estipulaciones) teniendo en cuenta los diversos comportamientos (aspecto objetivo) y actitudes (aspecto subjetivo) que éstos han desplegado en la negociación, celebración y ejecución de éste. Dicha apreciación se sustenta en la confianza y “en la responsabilidad asumida por la declaración de voluntad emitida”. Por tanto,

¹⁹⁶ Ver: FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. **“Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano”**. En: Estudios sobre el contrato en general. Editorial ARA editores. Lima, Perú, 2004, pág. 823.

¹⁹⁷ BIANCA, Massimo. **“Diritto Civile. Tomo 3: Il contratto”**. Dott. A. Giuffré Editore S.p.A. Milán, 1987, Ristampa, 1992, p.394.

¹⁹⁸ Conforme a la doctrina actual (BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLI, Francesco Donato; y NATOLI, Ugo) existen dos aspectos necesario y básicos en la interpretación del negocio: los de puntualización del hecho, para lo cual se utiliza el criterio de la común intención de las partes; y los de valoración del hecho, para lo cual se utiliza el criterio de la buena fe.

al referirse la buena fe a una valoración ésta tiene un carácter subjetivo y no objetivo, como comúnmente se le atribuye.

La buena fe objetiva u *ob causante*, es decir la observancia de reglas y conductas de lealtad, buen comportamiento, probidad en las relaciones jurídicas, que además son las que se imponen en la convivencia humana, es el obrar bien con sinceridad y sin reservas¹⁹⁹. En este caso, como refiere Emilio Betti²⁰⁰, la buena fe significa lealtad y claridad en el hablar y en la conducta.

Respecto a la buena fe Mauro Grondona²⁰¹ nos indica: *“Asimismo, es imperioso añadir inmediatamente, que nos parece que la mención del principio de buena fe, por parte del legislador peruano, debe ser leída en estricta relación de necesidad lógico-sistemática con la mención de “lo que se haya expresado”: ello equivale a sostener que si bien el Código peruano pone el acento en “lo que se haya expresado” -es decir, en las palabras dichas o escritas-, y si bien ello podría originar una variada serie de problemas interpretativos iniciales, con referencia, no ya y no sólo al significado del contrato como operación económica –es decir, a los efectos del contrato-, sino también a la determinación del significado intrínseco, antes que negocial, de las palabras de los contratantes, con claros riesgos de subjetivismo extremo -es decir, al análisis lingüístico del texto contractual-, el legislador ha tenido el cuidado, de todos modos, de superar el impasse, por medio del criterio de la buena fe objetiva”.*

Como se puede apreciar, el distinguido jurista italiano relaciona la noción de la buena fe con la declaración de voluntad emitida, lo que restringe la conducta de los sujetos a los “que éstos hayan expresado”, es decir, “es conducta lo

¹⁹⁹ COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H. (1992), **“El Negocio Jurídico”**, Buenos Aires Argentina, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Pág. 369.

²⁰⁰ BETTI, Emilio (1965), **“Reflexiones sobre la Noción de Negocio Jurídico”**. En: VVAA, BETTI, Emilio y Otros (2001), **“Teoría General del Negocio Jurídico”** (4 estudios fundamentales), Lima-Perú, ARA Editores, Pág. 65.

²⁰¹ GRONDONA, Mauro (2004), **“La común intención de las partes y el principio de la buena fe en la interpretación del contrato: Un panorama de la autonomía privada”**. En: VVAA (Guido ALPA y Otros) “Estudios sobre el Contrato en General”, Lima Perú, 2ª Edición, ARA Editores, Pág. 761.

que materialmente puede ser apreciado”. Por ende, la buena fe no puede referirse al plano actitudinal del individuo en tanto éste no puede ser apreciado materialmente. Este último aspecto (que no puede ser excluido en el estudio de la voluntad de los sujetos intervinientes) se incorpora en la “común intención de las partes”.

Aquí se objetiviza la buena fe como un estándar de conducta arreglada a los imperativos éticos exigibles de acuerdo a la conciencia social imperante. Se puede sostener que esta especie expresa la lealtad, la honestidad, la probidad y confianza en el comportamiento de cada uno de los contratantes, actúa como regla de conducta que orienta la actuación ideal del sujeto, lo que determina que se le denomine buena fe lealtad u objetiva, se exige un tipo de conducta²⁰².

e) Las reglas de interpretación sistemática o interdependientes o totalidad (artículo 169 del Código Civil).

❑ **Artículo 169.- Interpretación sistemática:** *“Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”.*

Al respecto Juan Espinoza Espinoza²⁰³, sostiene que la interpretación sistemática, “implica que la labor hermenéutica no debe agotarse en una cláusula determinada del contrato, o del negocio, sino en su relación con otras, entendiendo las partes del mismo, no como una sumatoria del todo, sino como una unidad funcional”.

²⁰² GACETA JURÍDICA, con Presentación de Jorge Avendaño Valdez (2013), **“Diccionario Civil”**, Lima-Perú, Editorial Gaceta Jurídica, Pág. 65.

²⁰³ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit., Pág. 229. En igual término en el **“Diccionario Civil”** publicado en 2013 por Editorial Gaceta Jurídica Lima-Perú, con presentación de Jorge Avendaño Valdez, pág. 265.

Por su parte el jurista Fernando Vidal Ramírez²⁰⁴, refiere que el método de la interpretación interdependiente o sistemática está previsto en el artículo 169 del Código y ha tenido asiento, y sigue teniendo, en toda la codificación civil, pues lo considera el Código Civil francés (art. 1161)²⁰⁵ y el Código Civil italiano (art. 1363)²⁰⁶, para solo mencionar los que tienen entroncamiento con nuestra codificación. De ahí que puede ser considerado como un principio general informante en materia de interpretación y que el acto o negocio jurídico deba ser entendido por el conjunto de sus disposiciones o cláusulas.

El método de la interpretación interdependiente o sistemática, hace que el intérprete vea el conjunto de la manifestación de voluntad como una unidad y que, en caso de disposiciones o cláusulas contradictorias las armonice, evitando interpretaciones aisladas y, más bien, las integre al sentido de las demás, con las que deben formar un conjunto unitario.

El sentido integral del método de la interpretación interdependiente o sistemática está imbuido de una finalidad conservacionista del acto o negocio jurídico en cuanto a todos los aspectos, disposiciones o cláusulas del acto o negocio objeto de la interpretación. De este modo, el intérprete debe procurar la preservación del acto en cuanto a su validez y eficacia frente a cláusulas o disposiciones contradictorias o viciadas de nulidad.

Esta norma refiere al estudio de la totalidad del acto jurídico en tanto “contiene el programa contractual previsto por ellas”. De este modo: En primer lugar, una cláusula aparentemente clara debe ser evaluada y concebida como una conforme al acto jurídico o contrato “unitario”. Por otro lado, una cláusula aparentemente dudosa, debe ser contrastada con las demás estipulaciones del contrato en la medida que se concibe la existencia de una misma fuente (voluntad). De este modo se evita que a una cláusula

²⁰⁴ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011). Ob. Cit. Pág. 351.

²⁰⁵ **Artículo 1161.-** “Todas las cláusulas de los convenios se interpretan las unas por la otras, dando a cada una el sentido que resulte del acto entero”.

²⁰⁶ **Artículo 1363.-** “Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte del conjunto del acto”.

se le interprete de manera independiente, expresando un sentido que no es conforme con el conjunto del contrato.

Nello Pasquini²⁰⁷, citando al Código Civil italiano, a propósito de ello nos indica: “(...) el artículo 1363 del Código Civil. Trae un principio bastante simple, que se encuentra en cualquier técnica de interpretación textual, inclusive no necesariamente destinada a aclarar el sentido de una expresión no necesariamente destinada a aclarar el sentido de una expresión jurídica: el significado de las cláusulas no puede ser segmentado, sino que debe ser reconducido al conjunto de la intención común de los contratantes. En otros términos, la cláusula oscura, o las cláusulas oscuras, forman parte de un todo, y es precisamente a la luz de cuanto emerge totalmente de la completa declaración que es menester considerarlas para dar sentido a la operación negocial y a la singular cláusula particular (.).”.

f) Las reglas de interpretación funcional o finalista o teleológica (artículo 170 del Código Civil).

❑ **Artículo 170.- Interpretación finalista o teleológica:** *“Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto”.*

La interpretación funcional teleológica indica que las expresiones comprendidas en el negocio que tengan varios significados, (o ninguno), deben ser entendidas en aquel que sea más conveniente o corresponda mejor a la naturaleza del negocio, y para ello se tomará en cuenta la causa concreta del mismo²⁰⁸.

Fernando Vidal Ramírez²⁰⁹ hace una aclaración importante en cuanto al vocablo “objeto” que se debe tomar en sentido de finalidad, pues lo que el

²⁰⁷ PASQUINI, Nello. *“L’interpretazione complessiva”*. En: *L’interpretazione del Contratto*, a cura di Alpa, Guido, op.cit. p.224.

²⁰⁸ GACETA JURÍDICA, con Presentación de Jorge Avendaño Valdez (2013), *“Diccionario Civil”*, Lima-Perú, Editorial Gaceta Jurídica, pág. 265.

²⁰⁹ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2011). Ob. Cit. Pág. 351-352.

método de interpretación plantea es la interpretación basada en la finalidad del acto o negocio.

Por su parte Juan Espinoza Espinoza²¹⁰ señala que la interpretación teológica, a la cual se le denomina también finalista, causalista o funcional, ante la posibilidad de interpretar una cláusula o expresión en varios sentidos, tiene en cuenta la causa concreta y justificante por la cual se realiza el negocio jurídico.

El precepto señalado nos indica que en caso de existir dualidad de significados o contenidos semánticos las estipulaciones o normas jurídicas privadas establecidas por las partes entonces debemos privilegiar aquel acorde con la causa o fin económico del negocio y la naturaleza del mismo. Este artículo puede ser leído de modo integral con los anteriores pero sería mucho más provechoso proponer un criterio similar de base para evitar situaciones de conflicto.

Este artículo reconoce el último criterio normativo de interpretación relativo a la interpretación funcional o finalista. Esta interpretación se aplica cuando, luego de haberse agotado otros criterios hermeneúticos de interpretación subjetiva, subsisten significados plurívocos sobre el sentido de las expresiones utilizadas por las partes en el contrato, las cuales deben adecuarse a lo señalado por la naturaleza y el objeto del acto. En este sentido, la doctrina comparada ha entendido que al referirse al tema de la naturaleza del acto, se está ante un problema en donde la interpretación debe estar dirigida a buscar el significado del contrato en relación directa con la causa del mismo.

Este criterio interpretativo podría ser visto como uno de carácter objetivo pero ello no es correcto, puesto que el criterio finalista se relaciona con la común intención de las partes y se emplea como último recurso ante la

²¹⁰ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit. Pág. 236.

existencia de expresiones plurívocas. Por ende, aún nos encontramos ante una interpretación de carácter subjetiva.

En este sentido Massimo Bianca²¹¹ nos indica: *“La interpretación se traduce entonces en una operación circular en la cual las declaraciones y el comportamiento de las partes concurren a señalar la causa del contrato y ésta, a su vez, concurre a clarificar su significado”*.

Por otro lado, Gastón Fernández Cruz²¹² nos indica: *“La interpretación funcional está necesariamente conectada con la regla de interpretación subjetiva de la “común intención de las partes” (y por ello con la interpretación literal y con la interpretación global relativa a la valoración del comportamiento integral de las partes) y con la interpretación según buena fe, toda vez que, ante la existencia de diversos sentidos que pueden atribuirse a las expresiones declaradas por las partes, sólo cabe entenderlas referidas a la más conveniente a su causa, la cual, al estar necesariamente recogida en el consentimiento, nos reconduce a la común intención de las partes”*.

2.3.4. Otras reglas de interpretación del Código Civil.

❑ **Artículo 1361.-** Obligatoriedad del contrato: *“Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos.*

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”.

El presente artículo, desde el punto de vista de la interpretación, consideramos que es de tendencia objetiva, pues al expresar que “los

²¹¹ BIANCA, Massimo. Op. cit. p. 405

²¹² FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón (2004), *“Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano”*. En: VV.AA. (2004), *“Estudios sobre el Contrato en General”* (2ª ed.). Lima-Perú: ARA Editores, Pág. 835.

contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos”, resalta la declaración de voluntad expresada en los contratos, sin mencionar para nada respecto a la voluntad común de las partes; sin embargo, en el segundo párrafo del artículo, establece a la “voluntad común de las partes” como una presunción en la declaración expresada en el contrato, puesto que al presumir se deja al margen la posibilidad de indagar la voluntad real o la común intención de las partes.

Luego el artículo finaliza, señalando “*quien niegue esa coincidencia debe probarla*”, trasladando de esta forma la carga de la prueba a la parte que niegue la coincidencia, manteniéndose en situación pasiva los operadores jurídicos (jueces); pero en caso de que nadie niegue la presunción es válido el acto o negocio jurídico, aun cuando ello no corresponde a la verdadera voluntad o intención común de las partes, lo cual se estaría creando una norma interpretativa que atenta contra el principio de la autonomía privada.

❑ **Artículo 1362.- Buena fe y común intención de las partes:** “*Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes*”.

Sobre este artículo, se hizo un análisis y comentario crítico al comparar con el artículo 168 y 1361 del Código Civil, sin embargo, no se ha hecho mayores análisis sobre la buena fe, lo que a continuación anotaremos.

Profesor Juan Espinoza Espinoza²¹³, afirma que el principio de la buena fe puede ser afrontado desde dos perspectivas: una subjetiva, en la cual considera como la convicción interna que se está actuando correctamente, conforme a derecho (llamada también buena fe creencia); y otra objetiva, caracterizada por el comportamiento correcto del sujeto que es percibido por la contraparte o por los demás (buen fe, lealtad, probidad, confianza o comportamiento).

²¹³ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit., Pág. 224.

El artículo refiere a dos reglas interpretativas: el uso de la buena fe (creencia y confianza) y de la común intención de las partes (voluntad declarada conforme a un propósito común). Este precepto normativo refiere a un sistema mixto italiano donde tanto la declaración de voluntad como la voluntad interna cumplen un papel protagónico.

❑ **Artículo 1401.- Interpretación a favor de la contraparte o interpretación protectora de las cláusulas generales:** *“Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes, se interpretan, en caso de duda, a favor de la otra”.*

Como antecedente de este artículo lo encontramos en el artículo 1370 del Código Civil italiano, que a la letra dice: *“Las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato o en formularios predispuestos por uno de los contratantes se interpretarán, en la duda, a favor del otro”.* Esto es que impone la carga de hablar claro al que toma la iniciativa de un acto contractual o sea que el estipulante debe expresarse en forma clara e inequívoca de tal forma que sea entendido fácilmente por el destinatario, en caso contrario, debe asumir las consecuencias.

Como refiere el maestro Aníbal Torres Vásquez²¹⁴, las *cláusulas generales de contratación* son redactadas previa y unilateralmente por una de las partes del contrato en forma general y abstracta, con el fin de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros actos particulares, con elementos propios de ellos (Art. 1392)²¹⁵. En cambio, el contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o

²¹⁴ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). *“Acto Jurídico”*. Ob. Cit. Pág. 517.

²¹⁵ **Artículo 1392 del Código Civil.-** Cláusulas generales de contratación: *“Las cláusulas generales de contratación son aquellas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos”.*

rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas en formularios por la otra parte, declara su voluntad de aceptar (Art. 1390)²¹⁶.

Por su parte Juan Espinoza Espinoza²¹⁷, señala que la interpretación *contro proferentem* es aquella regla hermenéutica, que se aplica en la contratación en masa, basada en el principio que cualquier ambigüedad deberá interpretarse en beneficio del adherente. Aquí nos encontramos en un escenario donde no hubo negociación entre las partes, sino la adhesión de una al programa contractual diseñado por la otra; por consiguiente, la labor interpretativa (que no debe sustraerse de los criterios analizados anteriormente: buena fe, sistemática, teleológica, ni a otros que considere pertinente el Juez o el árbitro) tendrá que basarse en el principio que cualquier ambigüedad deberá interpretarse en beneficio del adherente. Ello se justifica plenamente si tenemos en cuenta que el predisponente, al beneficiarse con este tipo de contratación, tendrá que asumir los costos, por haber creado (ya que él redactó el contrato) dicha situación²¹⁸.

El artículo objeto de estudio refiere a la “interpretación contra stipulatorem” que implica una sanción a quien estipula o redacta una estipulación al ser dicho sujeto quien “domina la información” y asume la responsabilidad de su declaración. En tal sentido, la interpretación que se debe realizar debe favorecer al receptor de la declaración de voluntad puesto que éste confía y cree en el contenido de dicha manifestación. El magistrado o todo aquel que interprete el contrato debe privilegiar a la parte que se encuentra en desventaja o en peor posición para afrontar el costo de la información.

Desde el punto de vista doctrinal podemos citar uno de los principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales que establece UNIDROIT²¹⁹ en

²¹⁶ **Artículo 1390 del Código Civil.- Contrato de adhesión:** “El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar”.

²¹⁷ ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2012). Ob. Cit Pág. 244.

²¹⁸ GACETA JURÍDICA, con Presentación de Jorge Avendaño Valdez (2013), “**Diccionario Civil**”, Lima-Perú, Editorial Gaceta Jurídica, pág. 265.

²¹⁹ **UNIDROIT** - Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. El objetivo de los Principios de UNIDROIT es establecer un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas en todo el mundo independientemente de las específicas tradiciones jurídicas

su artículo 4.6 (Interpretación contra proferentem) que a la letra dice: *“Si los términos de un contrato dictados por una de las partes no son claros, se preferirá la interpretación que perjudique a dicha parte”*.

Por tanto, como dice Aníbal Torres Vásquez²²⁰, los contratos concluidos mediante cláusulas generales como en los por adhesión el contenido contractual es redactado por una sola de las partes denominada predisponente, sin participación del otro contratante, es lógico que a ella se le atribuya la responsabilidad por las obscuridades, falta de claridad, imprecisiones o ambigüedades, puesto que estaba en sus manos el expresarse en forma adecuada, o sea, idónea, clara, suficiente, seria, inequívoca, de fácil comprensión por el destinatario, razón que justifica que el contrato sea interpretado en su contra y en favor de la otra parte, quien lo único que hace para poder contratar es someterse a las estipulaciones del contrato estándar que casi siempre no lee, o si lo lee no lo entiende por su redacción técnica o abigarrada, o si lo entiende no tiene la posibilidad de obtener su modificación.

Si bien es cierto, este artículo se refiere solamente a los contratos concluidos mediante cláusulas generales de contratación y a los contratos por adhesión, su aplicación debe extenderse a todos los casos en los cuales el texto del contrato o de alguna de sus cláusulas haya sido predispuesto por una de las partes y la otra solamente haya aceptado.

Tal es así que en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571) encontramos el Principio de la interpretación *favor debilis* (Art. V.2.- Principio pro consumidor), orientado a proteger a la parte débil (consumidor) de la relación jurídica, cuya disposición es la siguiente: Artículo V.2.- Principio Pro Consumidor: *“En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando*

y condiciones económicas y políticas de los países en que vengán aplicados. A la vez, este objetivo se refleja en su presentación formal y en la política general que los inspira.

²²⁰ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). *“Acto Jurídico”*. Ob. Cit. Pág. 518.

exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a las cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor". Además se debe tener presente que este Código fue promulgado el primero de setiembre de 2010.

❑ **Artículo 1531.-** Criterios para la calificación del contrato: *"Si el precio de una transferencia se fija parte en dinero y parte en otro bien, se calificará el contrato de acuerdo con la intención manifiesta de los contratantes, independientemente de la denominación que se le dé.*

Si no consta la intención de las partes, el contrato es de permuta cuando el valor del bien es igual o excede al del dinero; y de compraventa, si es menor".

En el presente artículo se privilegia a la autonomía privada, es decir, a la facultad de determinar las reglas de un contrato una vez consolidada una relación jurídica negocial. En tanto ello, si existe una duda respecto a la naturaleza del contrato suscrito deberá en primer lugar asumirse una tesis voluntarista o subjetiva que privilegia la intención manifiesta de los contratantes, por tanto será tomada en cuenta la "común intención de las partes" tal como lo prescribe el artículo 1362 del Código Civil peruano. De no ser el caso y no poderse entender cuál es la intención de las partes se valora el criterio objetivo o material referido a la correspondencia de las prestaciones, la que se relaciona con la función del negocio. En este caso se tiene en cuenta la función económica y social del negocio celebrado.

❑ **Artículo 2055.-** Interpretación del derecho extranjero: *"Las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan*".

El presente artículo, establece como norma de interpretación de las disposiciones del derecho extranjero aplicable a un caso concreto, lo que

implica en primer lugar de que no es aplicable las normas de interpretación de nuestra legislación civil; y en segundo lugar, la interpretación se efectúa de acuerdo al sistema al que pertenezcan el derecho extranjero; esto es, que puede ser sistema de interpretación subjetivo, objetivo o mixto.

Consideramos también que es pertinente, que dicha interpretación se efectué de acuerdo al sistema de interpretación de actos o negocios jurídicos que dicha legislación o la doctrina extranjera haya establecido.

En conclusión, el artículo en referencia, señala claramente de que no es aplicable las normas de interpretación de nuestra Código Civil cuando se trata de aplicar el derecho extranjero.

2.3.5. La influencia de los usos y costumbres y la situación socioeconómica en el Negocio Jurídico.

Teniendo en cuenta la realidad cultural y el nivel socioeconómico de nuestro país, podemos advertir que en algunos actos o negocios jurídicos se presentan problemas o dificultades, tanto en su celebración como en su interpretación, y ello se debe muchas veces por los usos y costumbres y/o por la situación socioeconómica de los sujetos que participan en determinados actos o negocios jurídicos.

La realidad de nuestro país es que está dividido en tres regiones (costa, sierra y selva), donde tanto los usos y costumbres como la situación socioeconómica defieren; sin embargo, parece que la aplicación de las normas del acto o negocio jurídico y demás legislaciones, estuvieron pensados u orientados para personas de la ciudad con un nivel cultural y socioeconómico uniforme.

Carmen Arana Courrejolles²²¹ presenta el siguiente concepto de uso social “Cuando la gente usa una y otra vez, constantemente, determinadas palabras para designar algo, o fórmulas para significar, o ciertas conductas para comunicar, esta manifestación general se convierte en una práctica uniforme que hace que el mismo grupo de gente o “todo el mundo”, acabe por entender aquellas palabras, fórmulas o conductas, siempre en el mismo sentido”.

Como dice Danz²²² el valor de la costumbre en las normas de interpretación lo demuestra el que cuando las partes usan, una y otra vez, constantemente, las mismas palabras, la gente –ya sea todo el mundo o sólo una clase social especial, como la de los comerciantes- acaban por entenderlas siempre en el mismo sentido; es la “práctica uniforme” que se exige para que nazca una norma de derecho consuetudinario.

El concepto general que el citado autor tiene sobre la costumbre es: la costumbre abarca todas formas conducta voluntaria que hacemos nuestras; es una regla individual de conducta; su característica es la reiteración normal de actos uniformes. Y cuando el proceder del individuo corresponde a la conducta consuetudinaria de la comunidad a que pertenece, este proceder acostumbrado se convierte en hábito, el uso. El uso es la costumbre social.

a) Usos y costumbres sociales.

El jurista peruano Juan Guillermo Lohmann Luca De Tena²²³, refiere que “por costumbre se conoce la permanente observancia en un lugar de ciertas maneras de actuar con relevancia y contenido jurídicos, sin que el grupo que así obra sea compelido para hacerlo. De este modo, la constante repetición de la conducta acaba por convertirse en norma no escrita, pero observada por el común denominador”. Luego señala, “llámese uso, en cambio, a la

²²¹ ARANA COURREJOLLES, Carmen (1992), *“La Interpretación del Acto Jurídico”*. Lima-Perú: Cuzco., Pág. 166-167.

²²² DANZ, Erich (1926). Ob. Cit. Pág. 156-157.

²²³ LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo (1997), *“El negocio jurídico”*, (2ª edición), reimpresión de la segunda edición de 1994, Lima Perú, Editorial Griley, Pág. 281.

misma conducta establecida, digámoslo así, por voluntad popular y de modo irreflexivo. Su contenido, en cambio, no es de carácter jurídico, sino ético, social, comercial o de otro orden. Tampoco tiene notas de coercibilidad como no sea de rechazo a la conducta desigual”. Teniendo en cuenta esta aseveración, podemos decir que los usos y costumbres de alguna manera constituyen fuentes del derecho, lo que implica tener en cuenta en el momento de la interpretación cuando a través de ellas se han materializado o celebrado el acto o negocio jurídico.

Por eso compartimos la posición del jurista Argentino Rubén H. Compagnucci De Caso, que en la interpretación “el juez deberá valorar esos hechos conforme a los usos sociales, es decir conforme a las prácticas efectivas del lugar, las costumbres ya existentes, las especiales expresiones idiomáticas que puedan haberse utilizado antes o correspondan a la localidad de celebración o ejecución del acuerdo, etc.; en síntesis: todas las circunstancias objetivas de lugar y tiempo que puedan reflejar un entendimiento de lo que las partes han querido (consciente o inconscientemente) al celebrar el acuerdo”²²⁴. Así por ejemplo, es costumbre en algunos lugares de nuestro país prestar asentimiento en el remate de ganado con una simple inclinación de la cabeza. No ocurre ello en la subasta de inmueble que se realiza en la zona de Lima.

El jurista alemán Werner Flume resalta la importancia de los usos en la interpretación de los negocios jurídicos cuando refiere que “los usos del tráfico son una circunstancia de la mayor importancia para la interpretación normativa. En particular es importante en el tráfico mercantil la interpretación según los usos. Son decisivos los usos del tráfico locales. Sin embargo, cuando los usos locales difieren según los lugares su vigencia sólo es inequívoca, si las partes de la declaración y la relación jurídica son del mismo lugar. Hay que tener en cuenta de modo especial que se debe combatir el intento de los normalmente más fuertes en el ramo para realizar

²²⁴ COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H. (1992), *“El Negocio Jurídico”*, Buenos Aires Argentina, Editorial ASTREA de Alfredo y Ricardo Depalma S,R,L. Pág. 368.

sus intereses en su favor y en contra de los más débiles, por medio de la hipóstasis de su opinión como “usos del tráfico”²²⁵.

“Es importante señalar que en la interpretación judicial la labor del magistrado debe rodearse de sus vivencias empíricas, y en la mayoría de los casos debe el juzgador prescindir de la influencia de sus conocimientos jurídicos”²²⁶. Por su parte Danz dice el Juzgador “como un profano que se halla en contacto con la vida; deberá aplicar las normas de la experiencia de la vida, sus conocimientos privados no jurídicos”²²⁷.

b) Situación socioeconómica.

La situación socioeconómica de los sujetos también es un factor influyente en el celebración de los negocios jurídicos, puesto que muchas veces las personas que son de un bajo nivel socioeconómico son seducidos u obligados implícitamente a celebrar un determinado acto o negocio jurídico por aquellos sujetos que ostenta un nivel económico elevado, situación ésta que consideramos que también que debería ser materia de interpretación, a fin de encontrar o determinar la real voluntad de los contrayentes en determinados actos o negocios jurídicos, de ese modo evitar que los poderosos económicamente se aprovechen de los débiles.

Se dice que una familia es pobre cuando no tiene la capacidad para cubrir una canasta básica de subsistencia, y una familia es de extrema pobreza cuando no logre cubrir los requerimientos de una canasta alimentaria²²⁸. Por tanto la pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la

²²⁵ FLUME, Werner (1998), “*El Negocio Jurídico*”, Madrid España, Traducción de José Miquel González, Fundación Cultural del Notariado, Pág. 375-376.

²²⁶ COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H. (1992) Ob. Cit., Pág. 368.

²²⁷ DANZ, Erich (1926), Ob. Cit. Pág. 125.

²²⁸ Según el censo de población 1993, existe en el país más de 12 millones de habitantes en condición de pobreza del total de 22'639 mil personas.

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

El mapa de pobreza²²⁹ muestra que 11 millones de peruanos viven con menos de 48 dólares al mes. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha presentado el nuevo Mapa Provincial y Distrital de Pobreza del Perú, 2007. Según dicho documento, el 39,3% de peruanos, viven en situación de pobreza con menos de 48 dólares mensuales y 13,7% en extrema pobreza, con menos de 18 dólares al mes. Sin embargo, lo que más llama la atención es su distribución territorial. Hay poblados con el 100% de pobreza. Ancash tiene el 42.6% de su población debajo de la línea de pobreza. El 7% del total de la población peruana es analfabeto; esto significa que este porcentaje de población al no tener conocimiento de lectura y escritura, no solamente es fácilmente manipulable y pasible de engaños, sino que no puede expresar su manifestación de voluntad adecuadamente en la materialización del negocio jurídico, puesto que en la creación, modificación y extinción de las relaciones jurídicas se requiere un mínimo nivel educativo a fin de comprender las consecuencias de la manifestación de voluntad.

Precisamente como corolario a lo expuesto podemos citar lo que expone Doménico Barbero²³⁰ cuando al comentar el artículo 1362 del Código Civil Italiano²³¹ señala que *“por ignorancia o por otras causas las palabras adoptadas pueden traicionar al pensamiento, he aquí la admonición preceptiva (sanción reguladora) de la disposición en examen: no detenerse en las palabras”*. Por eso para no detenerse en las palabras el citado autor recomienda *“tomad en cuenta, no ya sólo las palabras, sino todo otro dato*

²²⁹ Pobreza significa: “Indigencia, escasez, falta, carencia de lo imprescindible para el sustento de la vida, escaso haber de la gente pobre”. En: **“Diccionario Básico de la Lengua Española”**, España, Editorial Planeta, Volumen II, Pág.1115.

²³⁰ BARBERO, Doménico (1967). Ob. Cit. Pág. 605.

²³¹ **Art. 1362.-** “Al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la intención común de las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aún posterior a la conclusión del contrato” (Código Civil Italiano de 1942).

de hecho, o circunstancia relevante, que sirva para descubrir la intención más que las palabras mismas”.

Por eso consideramos que la interpretación que recae en un juez debe tener presente lo que el jurista alemán Erich Danz²³² reclama al tratar de caracterizar al buen juez y dice: *“el mejor juez será el que sepa ponerse el mismo en el lugar de las partes; verá entonces, y muy pronto, si se coloca primero en el lugar del demandante y luego en el del demandado, pero seriamente como si se tratase de su propio bolsillo”*. Precisamente al optar esa posición neutral e imparcial permitirá al juez advertir la presencia implícita o no del aspecto económico de una de las partes celebrantes del acto o negocio jurídico, o también del más fuerte o del más débil, y precisamente a ello se refería el profesor Aníbal Torres Vásquez cuando señalaba: *“Si el Código adoptara el criterio objetivista a ultranza, sin ninguna atenuación, sería un pobre Código puesto solamente al servicio de la parte más fuerte, propiciaría la usura, la expoliación de la parte débil, el dolo”*²³³.

²³² DANZ, Erich (1926), Ob. Cit. Pág. 133.

²³³ TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). Ob. Cit., Pág. 503.

CAPITULO 3: METODOLOGÍA.

En la aplicación del método científico a la investigación del Derecho, es preciso anotar que todo conocimiento jurídico debe concluir en una construcción científica enmarcada en una realidad específica. Esta investigación tiene en cuenta un enfoque dogmático, pragmático y funcional del Derecho, teniendo en consideración la aplicación social de la institución y los problemas de la jurisprudencia peruana.

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN.

A continuación se indica el tipo de investigación desarrollado, a su vez, el nivel que éste ha tenido para cumplir con el objetivo principal y los objetivos específicos señalados al inicio de la misma.

3.1.1. Tipo de Investigación.

La presente investigación refiere a un tema abordado en menor medida en la doctrina, por lo que reconoce una serie de falencias. La revisión de la literatura reveló que hay escasa bibliografía e incluso muy pocos autores refieren al tema de modo especial sobre el tema de la interpretación de los actos o negocios jurídicos a la luz del Código Civil. Por ende primero se efectúa una labor exploratoria²³⁴ de la revisión bibliográfica nacional y

²³⁴ Los estudios exploratorios se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. En: HERNÁNDEZ, S., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, L.,(2010). *“Metodología de la investigación”* (5ª ed.). México: Mc Graw Hill, pág. 85.

extranjera que de alguna manera tratan sobre el tema materia de la investigación.

Luego se efectúan la descripción²³⁵ de los conceptos, definiciones de algunas categorías principales; se describen también los sistemas o teorías de interpretación, el contenido y alcance de algunas normas de interpretación regulada en nuestro Código Civil, la jurisprudencia pronunciada en casación por la Corte Suprema de Justicia del Perú, discusión de resultados, propuestas para la solución del problema y finalmente las conclusiones y recomendaciones.

Finalmente es de tipo explicativo²³⁶, porque en el desarrollo de la investigación se da conocer o se explica las causas del problema de la interpretación en los actos o negocios jurídicos; es decir, si el sistema de interpretación establecido en nuestro Código Civil es la adecuada o correcta para desentrañar el sentido o alcance de la manifestación o declaración de voluntad de las partes.

En conclusión el presente investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo²³⁷ e inclusive en cierto modo podemos decir que es correlacional, dado que en el desarrollo del trabajo en alguna medida se evalúa las relaciones que existen entre conceptos, teorías o sistemas de interpretación de los negocios jurídicos o en la legislación comparada.

No está demás mencionar que la investigación se realizado dentro del marco dogmático, de acuerdo al esquema aprobada y publicada en la página Web de la Unidad de Postgrado.

²³⁵ Los estudios descriptivos miden conceptos o recolectan información sobre éstos. Sirven para analizar como es y cómo se manifiestan un fenómeno y sus componentes. En: HERNÁNDEZ SAMPIERI y Otros (2010). Ob. Cit. pág. 87.

²³⁶ El estudio explicativo está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. En: HERNÁNDEZ SAMPIERI y Otros (2010). Ob. Cit. Pág. 85.

²³⁷ Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios, descriptiva, en su inicio, y terminar siendo descriptivo, correlacional y hasta explicativa, todo depende de los objetivos del investigador. En: HERNÁNDEZ SAMPIERI y Otros (2010). Ob. Cit. Pág. 87.

3.1.2. Nivel de Investigación.

El estudio de la presente investigación es de nivel básico²³⁸ y aplicativo²³⁹; pues en un primer momento está dirigida a cuestionar o refutar el sistema de interpretación establecido en nuestra la legislación civil; luego, hechas las propuestas modificatorias de las normas de interpretación de los negocios jurídicos, se pretende aplicar las mismas, para que los operadores jurídicos en su quehacer de desentrañar o determinar el sentido o alcance de la manifestación o declaración de voluntad contenida en un determinado negocio jurídico, observen obligatoriamente las normas modificatorias de la interpretación del acto o negocio jurídico.

3. 2. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

3.2.1. Métodos de Investigación.

Se utilizaron los siguientes métodos:

- a) **Método Analítico.-** En la determinación de los principales elementos de la interpretación del acto jurídico y el procedimiento de interpretación.
- b) **Método Comparativo.-** En la contrastación entre las normas legales y la realidad social que regulan; así como las medidas y políticas estatales implementadas.

²³⁸ Las investigaciones dirigidas a establecer o a refutar teorías y proposiciones fundamentales de una rama de la ciencia, con validez más o menos universal, son llamados investigaciones básicas. En: MALETTA, Héctor (2009). *“Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica”*. Lima: Universidad del Pacífico. Pág. 110.

²³⁹ Esta investigación se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. En: SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo & REYES MEZA, Carlos (2002). “Metodología y diseños en la investigación científica” (3ª ed.). Lima: Universidad Ricardo Palma. pág. 18.

- c) **Método Histórico.-** En el análisis del surgimiento y desarrollo de la interpretación del Negocio Jurídico en el Perú.
- d) **Método Sistemático.-** Es aplicado en el estudio del marco legal integral de la interpretación de los negocio jurídicos en el sistema peruano.
- e) **Método Deductivo.-** Es empleado en el estudio del panorama general de la interpretación del negocio jurídico.

3. 2. 2. Diseño de la Investigación.

El diseño que se ha empleado es el de la causa-efecto, netamente una investigación transaccional o transversal descriptivo-correlacional, dentro del propósito de investigar, las relaciones entre los conceptos o teorías que se vienen utilizando en la investigación, los problemas planteados y el marco teórico de la misma.

3. 3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.

Las fases metodológicas de nuestra investigación pueden caracterizarse de la siguiente manera:

- a. Evaluación y estudio del Sistema de Interpretación del Negocio Jurídico en el Perú.
- b. Estudio de los elementos constitutivos de la interpretación del Negocio Jurídico.
- c. Examen de las normas jurídicas referidas a la interpretación del Negocio Jurídico.

- d. Análisis y sistematización de la información recolectada.
- e. Contraste de los resultados obtenidos con las conclusiones preliminares.
- f. Formular soluciones a los principales problemas que se presentan luego de efectuada la labor de contraste (modelo explicativo).

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

Las técnicas de recolección de información y análisis empleados en el desarrollo de esta investigación son:

- a. La observación y análisis documental, a través de la evaluación normativa sobre la interpretación del negocio jurídico en el Perú; así como de jurisprudencias referidas a dicha materia con el propósito de conocer los alcances pragmáticos de las instituciones objeto de investigación.
- b. El fichaje, que es utilizado principalmente para el procesamiento de la información obtenida de obras, artículos y otras fuentes secundarias para su respectivo análisis y sistematización.

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

4.1.1. Teoría o Sistema predominante en el derecho comparado.

En la determinación de la prevalencia entre la teoría subjetiva (Voluntad) y la teoría objetiva (Declaración) se debe apelar al sustento lógico y racional; esto es que, que desde el punto de vista de la teoría subjetiva *“no puede existir una declaración de voluntad que sea únicamente formal o exteriorización sin contenido de la intención de las partes”*, pero tampoco en la teoría objetiva se *“ignora la existencia de la intención de las partes, puesto que el negocio jurídico opera con las intenciones y no con las palabras de estas”*. Por tanto *“prescindir de la voluntad real de las partes, contentándose con una voluntad típica conseguida abstractamente según la teoría objetiva lleva a la negación del concepto del negocio jurídico, pues el núcleo del negocio está en la voluntad del sujeto”*. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia racional y lógica, pueda ser que en la interpretación de un determinado acto o negocio jurídico sea imposible llegar encontrar la voluntad real de las partes, lo que obligaría recurrir a un sistema mixto.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los capítulos precedentes, propiamente vista desde el punto de vista del derecho comparado, la mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica, han adoptado en su mayoría el sistema mixta de interpretación del negocio jurídico; esto es el subjetivo y objetivo, otorgando en el orden de prelación a la interpretación subjetiva,

pero en caso de que no se pudiera realizar esta interpretación, se daría la interpretación objetiva. Tal así como se puede observarse en los ordenamientos civiles de Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, México, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay etc.

Las razones se desprenden de las críticas efectuadas tanto al sistema subjetivo como al sistema objetivo, dado que ambos tienen ciertas falencias cuando se pretende una adecuada interpretación de negocios jurídicos, tanto más cuando se tenga los usos y costumbre o el nivel socio cultural de un país, por lo que consideramos que el sistema mixto sería una forma de interpretación inclusiva de estos sectores, de tal modo el negocio jurídico pueda cumplir su objetivo conforme a la realidad de cada país.

El maestro José León Barandiarán²⁴⁰, luego de analizar la teoría de la voluntad y teoría de la declaración, afirmaba que en “general se opta por una solución ecléctica, dándose valor a la voluntad interna por encima de la declaración, en cuanto a las relaciones entre las partes. Así, en el caso de simulación relativa se atribuye valor el acto oculto y no al aparente; los vicios de voluntad anulan el acto jurídico”.

4.1.2. Teoría o Sistema aplicada en la jurisprudencia civil peruana.

La interpretación del negocio jurídico en la jurisprudencia nacional se enmarca dentro del sistema de interpretación objetiva, sustentándose fundamentalmente en lo dispuesto en el artículo 168 del Código Civil, lo que a continuación citamos las resoluciones resueltas en casación y resoluciones resueltas en Tribunales administrativas, expedidas en los términos siguientes:

1. **CAS. Nº 2380-1999:** “toda regla de derecho necesita de la interpretación para su aplicación, y aún el que sostenga lo contrario por considerar que la letra es clara, está practicando una interpretación gramatical que, por

²⁴⁰ LEÓN BARANDIARAN, José (1983), “*Curso del Acto Jurídico*”, Lima Perú, Imprenta UNMSM, Pg. 17.

prescindir de las reglas de la hermenéutica, lo conducirá inevitablemente a un error” (CAS. Nº 2380; EL Peruano, 18 de diciembre de 1999).

2. **CAS. Nº 1757- 2009 AREQUIPA:** Noveno.- Que, en relación al alegato referido a señalar que el contrato deberá interpretarse de acuerdo a las reglas del artículo 168 del Código Civil, cabe tener presente que el referido dispositivo legal establece que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Norma en mención que regula el sistema de interpretación objetiva del intérprete es la declaración en sí, con independencia de lo que realmente quiso el agente. Décimo.- Al respecto, no obstante la parte recurrente pretende la interpretación del contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del Código Civil, empero contrariamente a lo estipulado en el citado dispositivo pretende otorgar una interpretación distinta a lo expresamente estipulado en la cláusula quinta del contrato materia de Litis; razones por las cuales, este extremo debe ser desestimado, debiendo tomarse en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 1361 del Código Civil que establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y que se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla (CAS. Nº 1757-2009- Arequipa, Lima, 09 marzo de 2010; Publicado en El Peruano el miércoles 29 de febrero de 2012. Pág. 33822-33823).

3. **CAS. Nº 452-2007-LIMA:** “Interpretación de los contratos, ello consiste en determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones, siendo que en tres hipótesis fundamentales tiene lugar la interpretación del contrato: 1. Cuando sus términos son oscuros y ambiguos, 2. Cuando siendo claros sus términos, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece manifestada y, 3. Cuando relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas, estando a que los artículos ciento sesenta y ocho a ciento setenta regulan las reglas de

interpretación correspondiendo a los Jueces de mérito -primera y segunda instancia- interpretar los contratos” (CAS. Nº 452-2007-LIMA. Obligación de Dar Suma de Dinero, del 26 de noviembre de 2007).

En la presente jurisprudencia casatoria, se afirma en forma contundente que los artículos 168 a 170 del Código Civil regulan las reglas de interpretación en materia de interpretación de los contratos, y corresponde a los jueces de las instancias correspondientes a interpretar los contratos.

4. **CAS. Nº 2587-2005- LIMA:** “Que, conforme a los artículos 168 y 170 del Código Civil los actos jurídicos deben ser interpretados de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe, así como según la naturaleza y el objeto del acto; siendo que en el presente caso si bien se advierte que las partes han otorgado el “*Nomen juris*” de renovación, la naturaleza del pacto de acuerdo a los criterios de interpretación que establecen las normas acotadas ha sido establecer una cláusula de prórroga en la que se autorizaba al Banco a prorrogar el plazo del título valor sin que sea necesaria la intervención de los obligados” (CAS. Nº 2587-2005-Lima 12 de abril 2006).

5. **CAS. Nº 2080-2001-LIMA:** “El Colegiado, para resolver la controversia de su competencia, debía, en principio, determinar si le asistía o no a la parte accionante derecho de propiedad sobre el bien materia de Litis; sin embargo, lejos de determinar ello, la Sala se limita a indicar que tal precisión no le resulta posible por una supuesta “confusa redacción del contrato”, y que el derecho de propiedad o no deberá ser determinado en la vía correspondiente, lo cual constituye un error porque el Colegiado tiene la obligación de interpretar el título del accionante ya sea aplicando el método objetivo, sistemático o teleológico, previstos en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, a fin de determinar si le asiste o no el derecho de propiedad, porque sólo así se estará pronunciando adecuadamente sobre uno de los puntos controvertidos fijados en la audiencia correspondiente” (CAS. Nº 2080-2001-Lima Desalojo, Lima 19

Octubre 2001; Revista Peruana de Jurisprudencia, Año 4, N° 12, Trujillo, 2002, pp. 46-48.).

6. **Exp. N° 53822-97- LIMA:** “conforme establece el artículo 168 del Código Civil, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de buena fe; que en tal sentido, la buena fe protege a quien realiza un acto jurídico basado en la expresión de voluntad exteriorizada” (Exp. N° 53822-97, Lima 16 de setiembre de 1998).

La segunda instancia confirma esta resolución sin mayores argumentos; sin embargo, en Casación la Corte Suprema se ha pronunciado en el siguiente sentido:

CAS N° 765-99 LIMA, Lima, 21 de mayo de 1999: “Que la interpretación del contenido de determinada cláusula contractual a fin de determinar cuál fue la intención de las partes al redactarla, es una tarea de las instancias de mérito, pues la labor de la Corte cuando conoce en vía de casación se circunscribe a las cuestiones de iure o de derecho con expresa exclusión de la apreciación probatoria”.

7. **CAS. N° 1713-96-LIMA:** “Conforme al Artículo 168 del Código Civil, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe, de donde resulta que la buena fe es cláusula general en todos los contratos y que éstos se interpretan objetivamente” (Cas. N° 1713-Lima, “*El Peruano*”, 15 de octubre de 1998, p. 1932; y en “*Guía Rápida de Jurisprudencia Civil y Proceso Civil*”, 2000, presentada por Marianella Ledesma Narváez, Editorial Gaceta Jurídica, pág. 40).

En esta resolución no solamente señala que el acto jurídico se interpreta de acuerdo con lo que se haya expresado en él sino también señala que los contratos se interpretan objetivamente, con lo que se demuestra claramente el sistema objetivo adoptado en nuestro sistema.

8. **CAS. Nº 2013-96:** “Que, el artículo 1362 del Código Civil preceptúa que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Que la común intención de las partes a que se refiere el artículo acotado, no puede ser interpretada en forma distinta a la efectiva declaración de voluntad expresada por las partes en el contrato respectivo, toda vez que ello significaría prescindir de la interpretación objetiva que todo magistrado debe observar de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico”(Cas. Nº 2013-96. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 38. Enero 2001. Pág. 239).
9. **R. Nº 252-98-ORLC/TR:** “si bien el Código Civil no contiene disposiciones específicas sobre la interpretación de los testamentos, resulta supletoriamente aplicables, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de esta declaraciones “*mortis causa*”, las normas generales de interpretación de los actos jurídicos, entre las cuales se encuentran los artículos 168 y 169 del mismo Código, que estipulan que dicha interpretación debe efectuarse de acuerdo con lo expresado en él y según el principio de buena fe, atribuyéndose a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas” (R. Nº 252-98-ORLC/TR, de fecha 23 de julio 1998; Resolución contenida y comentada en el “*Dialogo con la Jurisprudencia Nº 58*”, del mes de Julio 2003, Pág. 107-115).
10. **R. Nº 212-98-ORLC/TR:** “si bien el Código Civil no contiene disposiciones específicas sobre la interpretación de los testamentos, resultan supletoriamente aplicables, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de esta declaraciones “*mortis causa*”, las normas generales de interpretación del acto jurídico, entre las cuales se encuentran los artículos 168 y 169 del mismo Código, que estipulan que dicha interpretación debe efectuarse de acuerdo con lo expresado en él y según el principio de buena fe, atribuyéndose a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas” (R. Nº 212-98-ORLC/TR del 29

de mayo 1998; Resolución contenida y comentada en el Diálogo con la Jurisprudencia N° 87 del mes de Diciembre 2005, Pág. 99-106).

11. **RES. N° 375-2000-ORLC/TR:** “ No deberá extenderse asiento de hipoteca legal cuando en el instrumento público se pacte que la cancelación del saldo de precio será efectuada por la compradora al momento de la firma de la escritura pública y la entrega física del bien, en la que al haberse establecido un plazo, ocurre que la conclusión de firmas es posterior a dicho plazo, por cuanto de dicha manifestación de voluntad se infiere que ha habido cancelación total del precio de venta, dado que de haberse omitido el pago del saldo del precio, los vendedores no hubieran suscrito la correspondiente escritura pública, acorde con lo establecido en el artículo 168 del Código Civil que señala que *el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe*” (Res. N° 375-2000-ORLC/TR, del 07-11-2000, Jurisprudencia Registral, Vol. XI, T. I, P.41).

Al igual que el anterior, también a nivel administrativo, la Oficina Nación de Registros Públicos, invoca que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él; esto es un sistema de interpretación objetiva.

12. **RES. N° 184-2000-ORLC/TR:** El testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes y ordena su propia sucesión, dentro de los límites establecidos en la ley, de conformidad al artículo 686 del Código Civil, siendo de aplicación al caso de disposiciones testamentarias dudosas o ambiguas, el artículo 169 del Código Civil que señala que las cláusulas que señala que las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, asimismo conforme al principio de conservación del testamento se debe optar por aquella interpretación que permite la validez y aplicación de testamento sobre aquella que lo conduce a su inaplicación o ineficacia, siempre y cuando dicha interpretación no resulte incompatible con la voluntad

notoria del testador”. (RES. N° 184-2000-ORLC/TR Lima, del 02 – 06-2000, Jurisprudencia Registral, Año V, Vol. X, p. 176).

Con respecto a la interpretación testamentaria los juristas italianos Lina Bigliazzi Geri y Otros²⁴¹, han señalado que *“la interpretación subjetiva tiene aquí un relieve más acentuado, porque la finalidad principal de la disciplina dictada en materia testamentaria es la de tutelar en la mayor medida posible la expresión libre y plena de la última voluntad del difunto”*; sin embargo como hemos advertido en nuestra legislación se ha aplicado una interpretación objetiva con lo que se corre el riesgo de desnaturalizar la voluntad real del testador.

Efectivamente, como señala el doctor Jairo Cieza Mora²⁴², jurado informante de la presente tesis, el jurista alemán Erich Danz, a pesar de identificarse con el sistema de interpretación objetiva, en materia testamentaria ha optado por el sistema subjetivo cuando señala: “Las disposiciones mortis causa (...) se deberán tomar, por el contrario, en el sentido que solía atribuirles el mismo causante” (...) ²⁴³. “No importa, pues que el sentido común y usual de las palabras usadas por el causante no coincida con el que resulte de modo habitual de expresarse; este será el decisivo”. Asimismo el citado autor refiere que el artículo 133 del Código Civil alemán “es también aplicable a las disposiciones mortis causa y excluye la interpretación al pie de la letra, es decir, la sujeción al sentido corriente de las palabras sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto” ²⁴⁴. Lo antes indicado guarda coherencia con lo señalado por Danz ya que en aspectos patrimoniales “El juez deberá discernir también claramente el fin económico que el testador persigue para tenerse a él en la interpretación. Pero el testador no puede, ni

²⁴¹ BIGLIAZZI GERI, Lina y Otros (1992), **“Derecho Civil. Tomo I – Volumen 2: Hechos y Actos Jurídicos”**, Traducción Fernando Hinestrosa, Colombia, Universidad Externado de Colombia; Pág. 977.

²⁴² CIEZA MORA, Jairo (2013), *“Informe sobre borrador de tesis presentado por el sr. Francisco Solano Huamani Mendoza, titulado La Interpretación del negocio jurídico: Problemas normativos y soluciones a la luz del Código Civil Peruano para optar por el Grado Académico de Magister”*, pág. 3-4.

²⁴³ DANZ, Erch (1926). Ob. Cit. Pág. 337.

²⁴⁴ DANZ, Erch (1926). Ob. Cit. Pág. 338

mucho menos, prever expresamente las contingencias que se puedan producir; en estos casos, el juez habrá de suplir las lagunas de la declaración, como hace todo intérprete. El juez ha de resolver las dificultades penetrando fielmente en el pensamiento fundamental del testador, tomando en cuenta todas las circunstancias que pudieron pesar sobre su ánimo en el momento de testar y teniendo presente todo lo que el causante pudo, según esto querer o no querer”²⁴⁵.

4.1.3. Incoherencia, falta de unicidad y vacíos en las normas de interpretación del negocio jurídico.

Como se ha señalado, el ordenamiento civil peruano ha adoptado el sistema de interpretación objetiva, al regular en su artículo 168 del Código Civil que los actos jurídicos deben ser interpretados *“de acuerdo con lo que se haya expresado en él”*, contrariamente a la decisión adoptada en el derecho comparado antes mencionada que han recogido el sistema subjetivo o en todo caso, si existiera la imposibilidad de aplicar este sistema, se debe tomar el sistema objetivo como una aplicación residual, configurándose de ese modo el sistema mixto.

El maestro José León Barandiaran²⁴⁶, luego de analizar la teoría de la voluntad y teoría de la declaración, ya afirmaba antes de la promulgación del Código Civil de 1984, que en “general se opta por una solución ecléctica, dándose valor a la voluntad interna por encima de la declaración, en cuanto a las relaciones entre las partes. Así, en el caso de simulación relativa se atribuye valor el acto oculto y no al aparente; los vicios de voluntad anulan el acto jurídico”.

Las reglas de interpretación objetiva, están más bien dirigidas a fijar el significado del contrato cuando resulta dudosa la común intención de los contratantes, por lo que en este supuesto el significado del contrato se

²⁴⁵ DANZ, Erch (1926). Ob. Cit. Pág. 339.

²⁴⁶ LEÓN BARANDIARAN, José (1983), *“Curso del Acto Jurídico”*, Lima Perú, Imprenta UNMSM, Pg. 17.

complementa o uniforma recurriendo a cánones legales fundamentalmente destinados a garantizar la conservación del contrato, conforme a normativas típicas de estándares contractuales (como, por ejemplo, cuando las estipulaciones de un contrato de compraventa pactadas por las partes, se complementan con la normatividad típica del contrato de compraventa establecida por la ley) o de equidad²⁴⁷.

En este orden de ideas, la sola existencia de una duda interpretativa no determina la aplicación de reglas de interpretación objetiva, pues éstas constituyen una solución, solamente, cuando luego de aplicarse reglas de interpretación subjetiva se encuentra como resultado varios significados posibles del acuerdo, por lo que el verdadero y último significado del mismo debe encontrarse recurriendo a valoraciones normativas, como las antes mencionadas. Por esta razón, la interpretación del contrato bajo reglas de interpretación objetiva, tiene siempre una aplicación residual, por lo que es llamada también interpretación integradora²⁴⁸. Por tanto podemos llamarlo como algo supletoria o complementario.

La autonomía privada es protegida, por así decir, inclusive contra sí misma, porque la ley quiere salvaguardar el espíritu auténtico, la sustancia real de la operación perseguida por las partes, allí donde ella haya sido tergiversada y falseada por una imperfecta formulación verbal del texto del contrato, inclusive si éste no deja aparentemente espacio, en su tenor objetivo, a equívocos e incertidumbres. Así, si las partes han usado una expresión que, según el común modo de entender, tiene un cierto significado, pero resulta en cambio que ellas de común acuerdo han entendido atribuirle un

²⁴⁷ BIANCA, Massimo, *“Diritto Civile, Tomo 3: Il Contratto”*, Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Milán, 1987, Ristampa. 1992, p. 385. Citado por FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón en FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón (2004), *“Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil Peruano”*. En: VVAA (Guido Alpa y otros), selección, traducción y notas de Leysser L. León, Presentación de Vincenzo Roppo, *“Estudios sobre el Contrato en General”*, Lima Perú, 2da. Edición, ARA Editores, Pág.809.

²⁴⁸ BIANCA, Massimo, oB. Cit. Pag. 406-407, citado por FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón (2004), *“Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil Peruano”*. En: VVAA (Guido Alpa y otros), selección, traducción y notas de Leysser L. León, Presentación de Vincenzo Roppo, *“Estudios sobre el Contrato en General”*, Lima Perú, 2da. Edición, ARA Editores, Pág.809.

significado diverso, es este último el que prevalece: para la ley, en efecto, la interpretación no debe 'limitarse al sentido literal de las palabras'²⁴⁹.

Manuel De La Puente y Lavallo²⁵⁰ refiere que en los Códigos Civiles peruanos posteriores, los contratos dejaron de tener sus propias normas expresas sobre interpretación, por lo cual fue necesario recurrir a las normas generales sobre interpretación del acto jurídico, desde que el contrato es un acto jurídico. Tal es el caso del Código Civil de 1984, que no tiene normas sobre interpretación de los contratos, por lo cual son de aplicación sus artículos 168, 169 y 170 del Código Civil que versa sobre la interpretación del acto jurídico. Recuérdese que el doctor Arias Schreiber, autor del anteproyecto sobre contratos de la Comisión Reformadora, ha manifestado que en el artículo sobre acto jurídico ya aprobado por la Comisión Reformadora se han introducido normas relativas a su interpretación, todo lo cual es aplicable a los contratos en la medida que éstos no son sino una especie de aquél.

El tema de la interpretación de los contratos implica, dentro de la normatividad legal contenida en el Código Civil peruano de 1984, ubicar a los mismos (como categoría general) dentro de la disciplina de los actos jurídicos, dado que en nuestro ordenamiento jurídico se considera a aquellos como una especie integrante del género conformado por estos, siéndoles aplicables a los mismos las disposiciones establecidas para el común de dichos género²⁵¹. Por tanto, los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil tienen que ser aplicados a cualquier contrato, en tanto éste es un acto jurídico.

Es importante tener presente que la relación entre el acto o negocio jurídico y el contrato, es de género a especie, tal como nos recuerda Francesco

²⁴⁹ ROPPO, Enzo. Citado por FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón (2004), Ob. Cit. Pág. 818.

²⁵⁰ DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel (2007), *"Interpretación del Contrato"*. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., *Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina*, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1637-1638.

²⁵¹ FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón (2004), Ob. Cit. Pág. 801.

Galgano²⁵² cuando señala que las relaciones entre negocio jurídico y contrato es una relación de género a especie: el primero es el género, el segundo es una de las especies, junto al acto unilateral, *inter vivos o mortis causa*, y a los actos unilaterales o bilaterales del derecho de familia.

Fernando Vidal Ramírez²⁵³ nos dice que *“la interpretación del contrato en el derecho peruano está regulada por las normas del Código Civil en materia de interpretación del acto jurídico, desde que el contrato está comprendido dentro de la latitud de su concepto y que cualquiera que sea su naturaleza y características es, esencial y básicamente, un acto jurídico negocial. El articulado en materia contractual no tiene propiamente normas de interpretación, salvo la del artículo 1401 respecto a las cláusulas generales de contratación y contratos de adhesión”*.

Luego concluye, sosteniendo que *“el contrato no ha sido, pues, objeto de normas de interpretación, sistemáticamente preceptuadas sino de normas aisladas, algunas específicamente orientadas a su interpretación y otras a las que los exégetas y la doctrina les han dado ese carácter”*. Luego señala *“que la interpretación se orienta a determinar el contenido normativo del contrato y a establecer el sentido y alcance de la manifestación de voluntad de los contratantes, lo que supone, entonces, indagar la razón de ser de la relación contractual que ha quedado entablada, pero preservando lo que cada contratante ha querido y expresado”*.

En conclusión los argumentos expuestos por los juristas mencionados, no hacen sino corroborar nuestra posición de que las normas de interpretación de los actos o negocios jurídicos se encuentran dispersos en libros diferentes, cuando lo correcto es que este tipo de normas bien puede estar como parte general del Código Civil como en el caso del Código alemán o en todo caso reunidos en el libro del acto jurídico.

²⁵² GALGANO, Francesco (1992), **“El Negocio Jurídico”**, traducción realizada por Francisco de P. Blasco Gascó y Lorenzo Prats Albentosa, Valencia España, Tirant lo Blanch, Pág. 35

²⁵³ VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2007) **“La interpretación del contrato en el derecho peruano”**. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, Pág. 1643.

4.2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS.

4.2.1. Hipótesis general.

Ho: “Los sistemas y reglas de interpretación del negocio jurídico establecidos en el Código Civil Peruano deben ser reformulados, adoptándose un sistema mixto de interpretación de tendencia subjetiva”.

Conforme se ha demostrado que tenemos artículos que reconocen principios de sistemas interpretativos diversos: objetivo o declaracionista, subjetivo o voluntarista y mixto o dual; lo que implica la incoherencia y unicidad entre de las reglas de interpretación del negocio jurídico. Esto es como hemos señalado que las reglas de interpretación del negocio jurídico contenidos en los artículos 168, 169 y 170 de nuestro Código Civil responden al sistema objetivo (declaracionista); Subjetivo (voluntarista) y Mixto (dual).

Además existen vacíos que deberán ser cubiertos con reglas adicionales y normas dispersas que deberán ser integradas para evitar la existencia de una duplicidad (de reglas) que generen problemas de vaguedad y antinomias.

En todo caso la Teoría de la interpretación del negocio jurídico que ha adoptado nuestra legislación civil es de tendencia objetiva, lo cual es contraria no solamente con el sistema de interpretación adoptada por la mayoría de los países, especialmente latinoamericanos, que han adoptado el sistema mixto, sino fundamentalmente porque nuestro sistema legislativo así lo exige en razón de la situación sociocultural de la mayoría de nuestra población, caracterizado por tener ciertas costumbres y plurilingües divergentes, con presencia de niveles socioeconómico y educativos bajas,

los que muchas veces no permiten expresarse o manifestarse correctamente la voluntad en la celebración de los negocios jurídicos.

Por todo ello consideramos que los sistemas y reglas de interpretación de los negocios jurídicos establecidos en el Código Civil Peruano deben ser reformulados, adoptándose un sistema mixto de interpretación de tendencia subjetiva.

4.2.2. Hipótesis Secundarias.

H1: *“Los sistemas y reglas de interpretación del negocio jurídico contenidos en el Código Civil son dispersos, incoherentes y de tendencia objetiva”.*

Son dispersos porque en el artículo 168 del Código Civil, referidos a la interpretación del acto jurídico, establece una determinada forma de interpretación, adoptando el sistema objetivo; esto es *“El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”*; luego en el artículo 1361 al referirse sobre los contratos (especie del acto jurídico) prescribe que: *“Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”*; artículo cuya primera parte concuerda con el sistema objetivo establecido en el artículo 168, pero no así con la segunda parte, puesto que al presumir que la declaración expresada responde a la voluntad común de las partes (voluntad real), se está adoptando un sistema subjetivo, y lo peor es que la carga de la prueba lo traslada a las partes, cuando lo correcto debería ser que los interpretes (jueces) son los que deben buscar e indagar la voluntad real de las partes; esto es que si alguna de las partes cuestiona sin presentar prueba alguna, los interpretes no están en la facultad de indagar la voluntad real de las partes y solo se limitan a corroborar lo expresado en el contrato; sin embargo, ello guarda contrasentido con el artículo 1362 que establece que *“Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas*

de la buena fe y común intención de las partes"; esto es que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, y precisamente el objeto de interpretación es determinar la común intención de las partes.

Por otro lado, el artículo 1401 del Código Civil regula que *"Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes, se interpretan, en caso de duda, a favor de la otra"*; como se observa este artículo establece una forma distinta de interpretar los contratos, cuando se trata que el contrato ha sido redactado por una de las partes, lo cual no se tiene regulado en los artículos genéricos de los actos o negocios jurídicos, cuando lo correcto es que este tipo de normas debería estar en el Libro II del Código Civil.

Asimismo cabe mencionar el artículo 1531 del Código Civil que dispone que *"Si el precio de una transferencia se fija parte en dinero y parte en otro bien, se calificará el contrato de acuerdo con la intención manifiesta de los contratantes, independientemente de la denominación que se le dé. Si no constan la intención de las partes, el contrato es de permuta cuando el valor del bien es igual o excede al del dinero; y de compraventa, si es menor"*. Como puede notarse en el presente artículo, también se toma en cuenta *"la intención de las partes"*, al igual que en el sistema de interpretación subjetiva en el que se privilegia la intención de las partes.

Finalmente tenemos el artículo 2055 del Código Civil que señala que *"las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan"*; esto es, que la interpretación puede ser de acuerdo con el sistema objetivo, subjetivo o mixto, dependiendo al sistema al que pertenece el derecho extranjero, lo cual consideramos que debió estar en el libro del acto jurídico como una de las reglas de interpretación para disposiciones extranjeras.

Conforme a este hipótesis en el presente investigación se ha efectuado un estudio coherente y ordenado de los principios de las diversas sistemas de

interpretación; y precisamente en virtud de dicho estudio se ha llegado a la conclusión de recomendar la adopción del sistema mixto en nuestra legislación civil en cuando corresponde a los negocios jurídicos.

Es una realidad plenamente constatable que en el articulado correspondiente a la interpretación de los negocios jurídicos (actos jurídicos para nuestro Código Civil) “no existe una integridad sistemática en los criterios interpretativos a utilizar ante un negocio que debe ser interpretado. Los criterios que se encuentran recogidos en los tres artículos dedicados a la temática interpretativa *no contienen reglas armónicas de aplicación* que se complementen entre sí, e incluso no existe un orden de prioridad entre ellas, que permita esbozar la construcción de un sistema interpretativo unívoco, denotándose tan solo una tendencia objetivante”²⁵⁴ que se manifiesta principalmente, según parecer propio, en los artículos 168 al 170 del Código Civil.

Precisamente sobre este aspecto se pronuncia Carmen Arana Courrejolles²⁵⁵, manifestando la incidencia en la ausencia de un cuerpo orgánico; esto que *“las normas interpretativas carecen de un cuerpo teórico referencial que clarifique el alcance normativo de los criterios interpretativos, su importancia práctica, los principios del análisis y la finalidad que persigue la interpretación”*; por lo que se deduce a partir de la constatación de la falta de articulación y orden, que conlleva a la carencia de unidad, es decir de una totalidad organizada, por lo que se concluye que, en conjunto, tales normas no tienen ningún valor funcional excluyéndose así la posibilidad de establecer normas principales y normas subsidiarias.

Como hemos señalado, la orientación adoptada por nuestro Código Civil es claramente objetivista o declaracionista, sobre la base del artículo 168, que señala que para interpretar el acto jurídico se debe tomar en cuenta únicamente la voluntad manifestada; sin embargo, en materia contractual no

²⁵⁴ PALACIOS MARTÍNEZ, Eric (2002). *“Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico”* (Concepto, interpretación, ineficacia). Lima: Jurista Editores, Pág. 130.

²⁵⁵ ARANA COURREJOLLES, Carmen (1992). Ob Cit. Pág. 320-319.

hay claridad en los planteamientos del Código Civil, pues algunos artículos son típicamente declaracionista. Esta disparidad de criterios al interior del propio Código ha dado lugar a un interesante debate en nuestro medio sobre si en materia contractual se ha consagrado el voluntarismo o el declaracionismo., pues sería absurdo e incongruente que dentro de un Código se establecieran normas declaracionistas para el acto jurídico y normas voluntaristas para el contrato.

Por ello, es necesario señalar también –al igual que el maestro extinto Lizardo Taboada Córdova²⁵⁶– que en el ámbito nacional, con la mayor naturalidad, como algo totalmente lógico, se acostumbra mencionar que el sistema del Código es declaracionista en materia negocial y voluntarista en materia contractual, lo que desde nuestro punto de vista es completamente inadecuado e incorrecto. Sería absurdo que en un Código declaracionista en materia negocial existan normas voluntaristas en materia contractual, pues se trata de dos campos íntimamente vinculados, que no pueden tener en esta materia una regulación distinta.

H2: *“De acuerdo a la legislación comparada y la realidad peruana, se debe adoptar el sistema mixto de interpretación de los negocios jurídicos con tendencia subjetiva”.*

Efectivamente en la presente investigación se ha determinado con claridad que la normatividad contenido en el Libro II de nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 168 pertenece al sistema objetivo de la interpretación de los actos o negocios jurídicos, lo cual como hemos señalado no es lo más adecuado para nuestra realidad, sino un sistema mixto de tendencia subjetiva, en el que el intérprete trate de determinar la intención de partes más que la interpretación literal de lo expresado en el acto o negocio jurídico.

²⁵⁶ TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2002). *“Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”*. Lima: Grijley, .Pág. 206 y 207.

Esto es que la orden de prelación en cuanto a la interpretación de los actos o negocios jurídicos debe ser la operación o la actividad del magistrado o del operador jurídico respectivo, determinar primero la voluntad real o la verdadera intención de las partes en la celebración del negocio jurídico y no simplemente limitarse a la interpretación literal ni tampoco presunciones con carga de la prueba a las partes; luego agotado todos los esfuerzos y los métodos interpretativos, no sea posible determinar la verdadera intención de las partes, en segundo lugar, se puede recurrir a otra forma de interpretación, haciendo uso de los aforismos o máximas interpretativas que a lo largo del tiempo han venido compilando los autores y que con frecuencia se usan a falta de disposición legal, como ejemplos de aforismos de esta naturaleza: *“Cuando la ley no distingue tampoco debe hacerlo el intérprete”*; *“sobre la letra debe prevalecer la intención”*; *“Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”*; *“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”*; etc.

Al respecto compartimos la tesis expuesto por el jurista argentino Santos Cifuentes²⁵⁷, quien sostiene que *“El intérprete debe utilizar una doble faz **subjetivo-objetiva**. Por un lado la voluntad real (histórica) de las partes; por el otro, en caso de que no sea fructífera esa indagación subjetiva, atender a una serie de cartabones (reglas) orientadores para construir la voluntad presunta. La primera operación –**subjetiva**– atiende al comportamiento de las partes relacionado con el negocio y su formación; al criterio sistemático en cuanto se considera el negocio en su conjunto y en cada una de sus expresiones y cláusulas tratándolas como un todo, y a la buena fe o la conducta de las partes por la recíproca lealtad y confianza que se deben mutuamente. La segunda operación –**objetiva**– atiende a principios legales como los de conservación del negocio, lo que más convengan a la naturaleza del negocio y a la equidad, los usos y costumbres y la inclinación favorable al deudor y a la liberación”*.

²⁵⁷ CIFUENTES, Santos (2004). Ob. Cit. Pág. 344.

En cuanto a la orden de prelación o jerarquía entre la interpretación subjetiva o histórica (o en concreto) y la interpretación objetiva, Francisco Messineo²⁵⁸ afirma que la relación o jerarquía entre la interpretación subjetiva y objetiva es de subordinación lógica del segundo al primero. Por tanto, *“el intérprete puede recurrir al subsidio de las reglas de interpretación objetiva, sólo cuando no pueda reconstruir sin dudas la intención común concreta, es decir, solamente cuando se vea precisado por la imposibilidad recién señalada a sustituir por algo presuntivo o supositicio la efectiva intención común concreta”*. Con esta afirmación categórica del autor, queda claro nuestra hipótesis planteada.

En países como México, a falta de ley que precise el alcance de los actos jurídicos, establecen como reglas de interpretación los Principios Generales del Derecho: “Debe tenerse en cuenta que a falta de ley que precise el alcance de los actos jurídicos, cuando sus autores no han hecho uso de su autonomía de voluntad, se debe estar a los Principios Generales de Derecho según dispone el Código Civil de acuerdo con la Constitución Federal de la República”²⁵⁹.

Teniendo en cuenta la hipótesis planteada y los argumentos expuestos desde el punto de vista doctrinario y derecho comparado, consideramos que es necesario efectuar una modificación de los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, para ello proponemos un proyecto de ley que modificada los citados artículos, de ese modo se pretende superar los problemas planteados sobre la interpretación de los actos o negocios jurídicos en el Perú.

Establecer el sistema mixto en la interpretación con tendencia subjetiva, consideramos que es lo más adecuado, conforme a lo que se tiene en el derecho comparado.

²⁵⁸ MESSINEO, Francesco (1986). Tomo II. Ob. Cit. Pag. 90.

²⁵⁹ BAQUEIRO ROJAS, Edgard (1995), **“Diccionario Jurídico Harla. Volumen I: Derecho Civil”**. México: Harla, Pág. 63-64.

4.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Luego del análisis y discusión de los resultados corresponde presentar los resultados desde el punto de vista Teórico o doctrinario, derecho comparado, normatividad del Código Civil y Jurisprudencia nacional.

a) Resultado desde el punto vista teórico o doctrinario.

Luego del análisis y discusión de las teorías o sistemas de interpretación del negocio jurídico, se ha advertido la parte positiva y negativa o crítica de cada uno de las teorías de la interpretación.

El sistema objetivo al prevalecer la declaración o manifestación (exteriorizado) de la voluntad en la interpretación de los negocios jurídicos, pretende garantizar la seguridad jurídica; sin embargo, al descartar o negar la interpretación de la voluntad real o común intención de las partes, se corre el riesgo que en la interpretación se llegue a determinar una voluntad no querida o deseada por las partes o permitir la manipulación de las voluntades, puesto que no admite la interpretación de la común intención de las partes. En consecuencia este sistema de interpretación no es lo idóneo para nuestra realidad.

El sistema subjetivo pretende llegar a la voluntad real o común intención de las partes que celebraron el negocio jurídico; sin embargo, ello muchas veces no siempre es posible, por lo que tampoco es una teoría adecuada para la interpretación de los actos o negocios jurídicos.

El Sistema mixto, prevalece que en la interpretación de los negocios jurídicos se trate de encontrar la común intención de las partes, pero en

caso que ello es definitivamente imposible; entonces faculta recurrir a la interpretación objetiva.

En conclusión, consideramos que la teoría o sistema de interpretación del acto o negocio jurídico que debe adoptar nuestro ordenamiento jurídico civil, debe ser el sistema mixto.

b) Resultado desde el punto de vista del derecho comparado.

El resultado del análisis del sistema o teoría de interpretación de los negocios jurídicos en los países de Europa, es que todos los países ha establecido en sus ordenamientos civiles el sistema subjetivo; esto es prevaleciendo en la interpretación el común intención o la voluntad real de las partes, aun cuando como en el caso de Alemania doctrinariamente se cuestionaba el sistema subjetivo y recomendaba el sistema objetivo desde el punto de vista de la seguridad jurídica.

En los países centro y sudamericanos, tal como se ha mencionado y se ha efectuado el análisis correspondiente, teniendo como referentes a la normatividad civil del continente europeo, han adoptado el sistema o teoría subjetiva o mixta, lo cual guarda con el objetivo de la interpretación.

En nuestro país, tal como hemos sustentado, se ha adoptado el sistema objetivo en la interpretación de los actos o negocios jurídicos, aun cuando no guarda coherencia cuando se refiere a los contratos.

c) Resultado desde la normatividad del Código Civil.

Conforme hemos señalado, al analizar el artículo 168 del Código Civil peruano, llegamos a la conclusión que nuestra legislación civil ha adoptado el sistema objetivo para la interpretación de los actos o negocios jurídicos.

Esta afirmación es corroborados casi por todos los juristas peruanos especialistas en la materia, tanto es así que el mismo ponente o coautor que fuera del Libro II Acto Jurídico del Código Civil de 1984, doctor Fernando Vidal Ramírez en reiteradas oportunidades ha reafirmado que nuestro ordenamiento civil ha adoptado el sistema objetivo en la interpretación de los actos jurídicos. Con lo cual queda zanjado el sistema adoptado por nuestra legislación civil.

Por otro lado, el resultado de nuestra investigación advierte cierta incoherencia e confusa en la interpretación, cuando se trata del negocio jurídico llamado “contratos”, puesto que según el artículo 1362 de nuestro Código, la interpretación sería bajo el sistema subjetivo; esto es encontrar la “común intención de las partes”

d) Resultado desde el punto de vista de la Jurisprudencia Nacional.

La jurisprudencia peruana no es uniforme en cuanto a la interpretación de los actos o negocios jurídicos, pues por un lado los operadores resaltan el sistema objetivo contenido en el artículo 168 de nuestro Código Civil, y por otro lado, recomiendan que en la interpretación deba de encontrarse o determinarse la común intención de las partes.

Primero Caso.- Tenemos en la Casación N° 452-2007-Lima (Caso N° 1) que en su quinto considerando dice:

“Quinto.- Interpretación de los contratos, ello consiste en determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones, siendo que en tres hipótesis fundamentales tiene lugar la interpretación del contrato: 1. Cuando sus términos son oscuros y ambiguos. 2. Cuando siendo claro sus términos, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece manifestada y. 3. Cuando relacionando las cláusulas del contrato surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas, estando a que los artículos 168 a 170 regulan las reglas de interpretación correspondiendo a los Jueces de mérito –primera y segunda instancia- interpretar los contratos”.

Como puede advertirse en el numeral 2, señala que la interpretación de los contratos se puede dar “*cuando siendo claro sus términos, no se*

concilian con la verdadera intención de las partes que aparece manifestada"; esto es que se refiere a una interpretación subjetiva; sin embargo, cuando menciona *"que los artículos 168 a 170 regulan las reglas de interpretación"*, está señalando una interpretación objetiva, lo cual viene a ser una contradicción.

Precisamente como resultado del desarrollo de la investigación, se resalta la incoherencia y falta de unidad en la interpretación de los actos o negocios jurídicos, dado que ello se refleja en la jurisprudencia nacional. Además, nos atrevemos a señalar que la norma de interpretación contenida en el artículo 168 del Código Civil, no siempre es observada por los operadores jurídicos.

La falta de unidad resalta también cuando en el artículo 168 del Código Civil establece que el acto jurídico debe interpretarse según el principio de buena fe, y luego en el artículo 1362 del mismo cuerpo legal señala que el acto jurídico debe celebrarse y ejecutarse según las reglas de buena fe, como si el contrato no fuera un negocio jurídico.

Segundo Caso.- Observamos en los artículos noveno y décimo de la Casación Nº 1757-2009-Arequipa (Caso Nº 2), cuyo tenor literal es lo siguiente:

"Noveno.- Que, en relación al alegato referido a señalar que el contrato deberá interpretarse de acuerdo a las reglas del artículo 168 del Código Civil, cabe tener presente que el referido dispositivo legal establece que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. *Norma en mención que regula el sistema de interpretación objetiva del intérprete es la declaración en sí, con independencia de lo que realmente quiso el agente.* **Décimo.-** Al respecto, no obstante la parte recurrente pretende la interpretación del contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del Código Civil, empero contrariamente a lo estipulado en el citado dispositivo pretende otorgar una interpretación distinta a lo expresamente estipulado en la cláusula quinta del contrato materia de Litis; razones por las cuales, este extremo debe ser desestimado, debiendo tomarse en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 1361 del Código Civil que

establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y que se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla”.

Se advierte que el artículo noveno señala en forma categórica que el sistema de interpretación de los contratos es objetiva (sistema objetiva), con independencia de lo que realmente quiso el agente; luego contrariamente en el artículo décimo, basándose en el artículo 1361 del Código Civil, señala la presunción de que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes (sistema subjetiva), lo cual es un contrasentido que amerita una regulación adecuada.

Tercer caso.- Tenemos el séptimo considerando de la Casación N° 2587-2005-Lima, cuyo tenor literal es la siguiente:

“Sétimo.- Que, conforme a los artículos 168 y 170 del Código Civil los actos jurídicos deben ser interpretados de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe, así como según la naturaleza y el objeto del acto; siendo que en el presente caso si bien se advierte que las partes han otorgado el “Nomen juris” de renovación, la naturaleza del pacto de acuerdo a los criterios de interpretación que establecen las normas acotadas ha sido establecer una cláusula de prórroga en la que se autorizaba al Banco a prorrogar el plazo del título valor sin que sea necesaria la intervención de los obligados”.

En esta casación los magistrados solo se limitan indicar que los actos jurídicos se interpretan de acuerdo con lo que se haya expresado en el contrato; esto desde el punto de vista del sistema objetivo de interpretación y para nada señala la voluntad real o sistema subjetivo de interpretación o sea lo que importa es lo que se ha expresado en el contrato y no la voluntad real

Cuarto caso.- Tenemos la Casación N° 2080-2001-Lima (Desalojo), cuyo quinto considerando es la siguiente:

“Quinto.- Que, de lo reseñado en el 3° considerando de la presente resolución, queda clara que el Colegiado para resolver la controversia de su competencia, debía, en principio, determinar si le asistía o no a la parte accionante derecho de propiedad sobre el bien materia de litis; sin embargo lejos de determinar ello, la

Sala se limita a indicar que tal precisión no le resulta posible por una supuesta “confusa redacción del contrato”, y que el derecho de propiedad o no deberá ser determinado en la vía correspondiente, lo cual constituye un error porque el Colegiado tiene la obligación de interpretar el título del accionante ya sea aplicando el método objetivo, sistemático o teleológico, previstos en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, a fin de determinar si le asiste o no el derecho de propiedad, porque sólo así se estará pronunciando adecuadamente sobre uno de los puntos controvertidos fijados en la audiencia correspondiente”.

En este caso la Sala Civil Suprema señala que el título debe interpretarse conforme a los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil; esto es en otras palabras desde el punto de vista del sistema subjetivo de la interpretación, sin reparar para nada el sistema subjetivo.

Quinto caso.- En un primer momento tenemos la sentencia de primera instancia, recaída en el Exp. N° 53822-97 del Segundo Juzgado Civil de Lima, cuyo cuarto considerando es la siguiente:

“CUARTO.- Que siendo ello así no puede inferirse que se haya incurrido en causal de nulidad por exceso en las atribuciones del representante en la constitución de hipoteca antes referida, puesto que en el poder no se indicó que la facultad de otorgar en garantía el inmueble fuera únicamente para deudas u obligaciones de los demandantes, ni hasta por un monto determinado, ni que debiera señalarse expresamente en cualquier posterior hipoteca el domicilio real de los demandantes y no del representante; que en todo caso, se debieron haber limitado los alcances del poder en forma expresa, puesto que conforme establece el artículo 168 del Código Civil, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de buena fe; que en tal sentido, la buena fe protege a quien realiza un acto jurídico basado en la expresión de voluntad exteriorizada, tal como lo ha hecho el Banco Mercantil, ahora absorbido por el Banco Santander-Perú”.

Se observa que en esta sentencia el Juez Civil, señalando el artículo 168 del Código Civil, se refiere a la interpretación objetiva del acto jurídico; luego dicha sentencia fue confirmada por la Sala Civil Superior (Exp. N° 53822-97); pero lo que llama la atención es lo que la Sala Civil de la Corte Suprema se ha pronunciado en vía de Casación N° 765-99-Lima, en su quinto considerando, cuyo tenor literal es la siguiente:

“Quinto.- Que la interpretación del contenido de determinada cláusula contractual a fin de determinar cuál fue la intención de las partes al redactarla, es una tarea de las instancias de mérito, pues la labor de la Corte cuando conoce en vía de casación se circunscribe a las cuestiones de iure o de derecho con expresa exclusión de la apreciación probatoria”.

Se advierte que la Sala Civil de la Corte Suprema señala que en la interpretación del contrato debe determinarse cuál ha sido la intención de las partes al redactarla; esto es, que adopta el sistema subjetivo, mientras tanto el juez de primera instancia como el de segunda instancia se refieren a la interpretación objetiva; lo cual pues demuestra con claridad los pronunciamientos contradictorios de los magistrados en un mismo expediente.

Sexto caso.- Tenemos la interpretación que hace Registros Públicos sobre los Testamentos, donde por falta de disposiciones sobre interpretación de los Testamentos, supletoriamente se aplican los artículos 168 y 169 del Código Civil; esto es que se aplica el sistema objetivo de la interpretación, tal como observa en uno de los considerandos de la Resolución N° 252-98-ORLC/TR, cuyo tenor literal es la siguiente:

“Que, en tal sentido, si bien el Código Civil no contiene disposiciones específicas sobre la interpretación de los testamentos, resulta supletoriamente aplicables, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de esta declaraciones “mortis causa”, las normas generales de interpretación de los actos jurídicos, entre las cuales se encuentran los artículos 168 y 169 del mismo Código, que estipulan que dicha interpretación debe efectuarse de acuerdo con lo expresado en él y según el principio de buena fe, atribuyéndose a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas”

Asimismo tenemos la Resolución N° 212-98-ORLC/TR, donde al igual que el anterior mencionado, aplica supletoriamente los artículos 168 y 169 del Código Civil para interpretar los testamentos, pero se advierte un contrasentido en sus considerandos que a continuación citamos:

“Que, en tal sentido, si bien el Código Civil no contiene disposiciones específicas sobre la interpretación de los testamentos, resultan supletoriamente aplicables, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estas declaraciones mortis causa, las normas generales de interpretación del acto jurídico, entre las cuales se encuentran los artículos 168 y 169 del mismo Código, que estipulan que dicha interpretación debe efectuarse de acuerdo con lo expresado en él y según el principio de la buena fe, atribuyéndose a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas”;

En este considerando se refiere a la interpretación objetiva del testamento, para cuyo efecto se pretende aplicar supletoriamente los normas de interpretación del acto jurídico.

“Que, adicionalmente, resulta conveniente tener en cuenta que la interpretación de los testamentos reviste caracteres especiales derivados de la circunstancia que la voluntad del testador no puede renovarse o aclararse por su autor, por lo que, como indica Guillermo Lohmann Luca de Tena, debe darse “preferencia a la voluntad sobre la declaración, siempre que esta voluntad aparezca efectivamente manifestada, siquiera de una manera imperfecta o no acorde con los criterios generales” y que “siempre supuesta la existencia de duda, en la interpretación gramatical debe preconizarse una interpretación más restrictiva que extensiva, porque la última puede acaso hacer aparecer una voluntad donde tal vez no existiera en lo absoluto” (Guillermo Lohmann Luca de Tena, “Derecho de Sucesiones” Vol. XVII- Tomo II, Biblioteca Para Leer el Código Civil Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996, págs. 238 241), siendo que la voluntad expresada por la testadora, sin perjuicio de la posible existencia de inexactitudes terminológicas, resulta clara en la atribución dominial del inmueble solo a favor de dos de sus sucesores, no resultando procedente que en sede registral se interprete en forma extensiva la existencia de una voluntad diferente que beneficie también a doña María Nelly Ruesta Angulo de Prosser”.

En este considerando, amparándose en la obra del jurista Guillermo Lohman Luca de Tena, sostiene que debe darse preferencia a la voluntad sobre la declaración; o sea, se debe dar preferencia a la voluntad o intención del testador más que a la declaración, con lo cual se estaría dando prevalencia a la interpretación subjetiva o voluntaria, más que a la interpretación objetiva o declaracionista, lo cual guarda una contradicción con el considerando anterior, toda vez que ello ocurre en el mismo expediente o sobre mismo causa.

Estos son pues la casuística o los pronunciamientos jurisprudenciales que demuestran de que no existe una coherencia en la aplicación de las normas de interpretación de los negocios jurídicos, reflejándose cierto desorden y contrasentidos que ameritan pues una modificación de las normas de interpretación de los actos o negocios jurídicos, como una forma de ordenar y uniformizar los criterios interpretativos dentro un sistema mixto.

CAPITULO 5: IMPACTOS.

5.1. PROPUESTA PARA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

La propuesta para la solución del problema es modificar el artículo 168, 169 y 170 del Código Civil e incorporar el artículo 170-A en el Código Civil; esto es respecto a las normas de interpretación del acto o negocio jurídico, contenido en el Libro II del actual Código Civil, para cuyo efecto se propone el siguiente Proyecto de Ley:

a) Fundamentación del Proyecto de Ley.

Considerando:

Que, es necesario modificar e incorporar artículos que regulan sobre interpretación del Acto Jurídico del Código Civil, adecuando las mismas acorde con la realidad social del país, con la finalidad de promover negocios jurídicos que permitan mayor desarrollo económico y social, expresado ello en el mejor nivel de vida de la población, especialmente en las zonas rurales y marginales, como parte de la política de inclusión social.

Exposición de Motivos.

Que, para efectos de la interpretación de los actos jurídicos el artículo 168 del Código Civil prescribe: “***El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de buena fe***”. Acogiéndose con ello a la teoría o sistema objetivista o declaracionista; sin

embargo por otra parte al desarrollar estos principios en su específica aplicación a los contratos, regula en el artículo 1361 del Código: “Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la **voluntad común de las partes** y quién niegue esa coincidencia debe probarla”. Asimismo en el artículo 1362 del mismo cuerpo legal regula “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y **común intención de las partes**”.

Que, teniendo en cuenta los artículos 1361 y 1362 del Código Civil, se advierte que en materia contractual se acoge al sistema o teoría de interpretación subjetiva o voluntaria, en contraste con el artículo 168 del Código; generando con ello una confusión y/o desorden en materia de la interpretación de los actos o negocios jurídicos, toda vez que el negocio jurídico viene ser el género, mientras el contrato la especie.

Que, por lo expuesto, es necesario uniformizar los criterios en la regulación de la interpretación de los negocios jurídicos, incluyendo por supuesto los contratos, teniendo en consideración la idiosincrasia y el nivel de desarrollo sociocultural peruana, a fin de que las normas interpretativas de los negocios jurídicos sea el fiel reflejo de los comportamientos individuales y colectivos que suelen practicarse en los diversos negocios.

Que, dentro de ese marco, las normas de interpretación de los negocios jurídicos no pueden ser trabas ni normas perjudiciales del ser humano, puesto que “*la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado*”²⁶⁰; de lo que se colige que las normas jurídicas están al servicio de la persona y no al revés.

Por estas consideraciones se presenta el siguiente proyecto de ley modificatoria.

²⁶⁰ **Art. 1. Constitución Políticas del Estado**, prescribe: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

b) Proyecto de Ley.**Artículo 1.- Modificación de los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil.**

Modifícase los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, conforme a los siguientes textos:

“Artículo 168.- El negocio jurídico debe ser interpretado de acuerdo a la común intención de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras.

En la determinación de la intención común de las partes, el intérprete debe apreciar el comportamiento de las partes, anterior, simultáneo y posterior a la celebración del negocio jurídico y todas las circunstancias que contribuyan a determinar su voluntad real.

Si las palabras parecieran contrarias a la voluntad de las partes, prevalecerá ésta sobre aquellas”.

“Artículo 169.- Las cláusulas de los negocios jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, conforme la unidad del acto jurídico. De existir una cláusula dudosa se interpretará según el sentido unitario del negocio jurídico.

Las cláusulas insertas en las condiciones generales del negocio jurídico o en formularios dispuestos por uno de los agentes se interpretan, en caso de duda, a favor del otro. Cuando a un acto impreso se le añade un manuscrito y los textos son contradictorios, prevalece el manuscrito”.

“Artículo 170.- Si una expresión tiene varios significados debe utilizarse aquel que sea conforme a la causa del negocio jurídico celebrado y en el sentido que le permita producir efectos jurídicos”.

Artículo 2.- Incorporación del artículo 170-A del Código Civil.

“Artículo 170-A.- *Cuando a pesar de la aplicación de las normas contenidas en este título, el negocio jurídico continúa siendo oscuro, debe éste ser entendido en el sentido menos gravoso para el obligado, si fuese a título gratuito, y en el sentido que realice la armonización equitativa de los intereses de los agentes, si fuese a título oneroso.*

El negocio jurídico debe ser interpretado de acuerdo con la buena fe, teniendo en cuenta, en su caso, los usos y costumbres admitidos, para interpretar sus ambigüedades”.

5.2. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Para la implementación de la propuesta, no requiere mayor costo que la de presentar el Proyecto de Ley en el Congreso de la República para su discusión y aprobación, luego con el visto bueno del Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación y puesta en vigencia.

Luego será importante realizar la capacitación de los operadores jurídicos para una cabal comprensión de las normas modificatorias a fin de que se puedan aplicarse correctamente en la interpretación de los actos o negocios jurídicos. Esta capacitación podemos dividir en tres niveles: Un primer Nivel sería de los magistrados y secretarios jurisdiccionales; segundo Nivel sería de los funcionarios o servidores públicos, especialmente de los Registros Públicos, y un tercer Nivel sería de los abogados y otros interesados.

La capacitación de los magistrados y secretarios jurisdiccionales a nivel nacional podría realizarse a través de la Academia de la Magistratura, entidad encargado de capacitación en el ámbito jurisdiccional; mientras la capacitación de los funcionarios o servidores públicos, especialmente del personal de Registros Públicos, podrían capacitarse mediante cursos o seminarios organizados por las mismas entidades; y finalmente la

capacitación de los abogados y otros interesados, podrían ser a través de las universidades y colegios de abogados del Perú.

Por lo expuesto, consideramos que en la implementación de la propuesta no ocasionará mayores costos, puesto que la Academia de la Magistratura cuenta con el presupuesto anual orientado a la capacitación de los magistrados y secretarios jurisdiccionales; en lo que respecta a la capacitación de los funcionarios o servidores públicos (Registros Públicos) podrían ser autofinanciadas mediante cursos o seminarios, y finalmente la capacitación de abogados y otros no generaran muchos gatos.

5.3. BENEFICIO QUE APORTA LA PROPUESTA.

El beneficio que aporta la propuesta, es que no solamente nuestro ordenamiento civil estaría acorde con la doctrina y la legislación comparada, sino fundamentalmente que en la interpretación de los actos o negocios jurídicos debe primar la voluntad real o la común intención de las partes como el claro reflejo de la autonomía privada de la voluntad.

Además teniendo en cuenta la realidad nacional, es de apreciar que la sociedad peruana cuenta con ciertos niveles de situaciones socioculturales (pobreza, analfabetismo, problemas lingüísticos: quechua, aymara, etc.) y un gran sector de la población se expresan o se manifiestan a través de sus usos y costumbres sociales, los que no siempre pueden estar acorde o conforme a la ley, por eso también es importante adoptar un sistema mixto en la interpretación de los actos o negocios jurídicos, puesto que por tener ciertas características desfavorables no pueden expresar adecuada o correctamente su voluntad en los actos jurídicos, tal como regula la ley. De tal modo, cuando haya discusión sobre interpretación de los actos jurídicos realizados, pueda el intérprete (juez), primero indagar la intención o voluntad real de las partes, y si ello no fuera posible definitivamente, se debe recurrir a lo que hayan declarado o expresado en el acto jurídico.

En términos generales, el beneficio que aportará este proyecto ley, es que definitivamente se acabara con las confusiones o incertidumbres en la aplicación de las normas, puesto que las propuestas expresan con claridad para todos los actos jurídicos con lo que se guarda coherencia tanto con la doctrina como con la legislación comparada.

Finalmente podemos afirmar que prevalecer una interpretación que no exprese la intención o voluntad real de las partes es un acto de injusticia.

CONCLUSIONES.

Tanto en la doctrina como en el derecho comparado se recomienda adoptar el sistema mixto de interpretación del acto o negocio jurídico; esto es con prevalencia del sistema subjetivo (común intención de las partes) y subsidiariamente el sistema objetivo (conforme a lo declarado la voluntad)..

En la población peruana se tiene un considerable grado de pobreza y analfabetismo, lo que aunado a los usos y costumbres de determinadas comunidades campesinas, nativas y de toda la población rural, determinan serias dificultades para expresar su voluntad en la celebración y ejecución del acto o negocio jurídico; así como también la posibilidad de comprender los efectos de los negocios jurídicos conforme se estipula en el Código Civil.

El Código Civil peruano acoge una concepción objetiva para la interpretación de los actos o negocios jurídicos, cuyas reglas se encuentran establecidas en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil; sin embargo, se advierte cierta contradicción o incoherencia con lo dispuesto en el artículo 1362 del Código, dado que en este último se menciona que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse de acuerdo a la “*común intención de las partes*”, lo que implica que en caso de conflicto en la interpretación, el operador jurídico deberá indagar y determinar cuál ha sido la común intención de las partes al celebrar ese negocio jurídico.

El orden de prelación en la interpretación de los actos o negocios jurídicos debe ser primero, indagar y determinar la voluntad real o la común intención de las partes (interpretación subjetiva); y segundo, subsidiariamente se debe recurrir a la interpretación de la voluntad declarada (interpretación objetiva), haciendo el uso del principio de la buena fe, y de los métodos sistemático y finalista o teleológica de la interpretación del acto o negocio jurídico.

La interpretación literal es un punto de partida y no constituye una regla de interpretación del negocio jurídico. La común intención de las partes implica una regla subjetiva de interpretación en tanto se busca conocer la voluntad real del sujeto y apreciar sus intenciones (sea mediante la manifestación de la voluntad externa o por medio de sus comportamientos).

La buena fe constituye solamente otros de los criterios de interpretación que el intérprete debe tener en cuenta para llegar a aprehender la “común intención de las partes” y consiste en aplicarlo como regla de conducta para averiguar cuál ha sido la confianza razonable que las partes atribuyen a las declaraciones y comportamientos de la contraparte y al significado objetivo del acuerdo.

El criterio de la interpretación sistemática del contrato impone al intérprete la obligación de interpretar cualquier cláusula del contrato en función de su conjunto, es decir, teniendo en cuenta el todo (como expresión de una misma voluntad).

El criterio de la interpretación finalista o teleológica es de carácter subsidiario y busca eliminar el significado diverso de los términos utilizados por las partes en el negocio. Es subsidiario en la medida que está relacionado con la común intención de las partes (como regla general).

RECOMENDACIONES.

Como recomendación consideramos que deben modificarse e incorporarse a los artículos de la interpretación del acto o negocio jurídico en los siguientes términos:

Artículo 168 del Código Civil.- *“El negocio jurídico debe ser interpretado de acuerdo a la común intención de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras.*

En la determinación de la intención común de las partes, el intérprete debe apreciar el comportamiento de las partes, anterior, simultáneo y posterior a la celebración del negocio jurídico y todas las circunstancias que contribuyan a determinar su voluntad real.

Si las palabras parecieran contrarias a la voluntad de las partes, prevalecerá ésta sobre aquellas”.

Artículo 169 del Código Civil.- *“Las cláusulas de los negocios jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, conforme la unidad del acto jurídico. De existir una cláusula dudosa se interpretará según el sentido unitario del negocio jurídico.*

Las cláusulas insertas en las condiciones generales del negocio jurídico o en formularios dispuestos por uno de los agentes se interpretan, en caso de duda, a favor del otro. Cuando a un acto impreso se le añade un manuscrito y los textos son contradictorios, prevalece el manuscrito”.

Artículo 170 del Código Civil.- *“Si una expresión tiene varios significados debe utilizarse aquel que sea conforme a la causa del negocio jurídico celebrado y en el sentido que le permita producir efectos jurídicos”.*

Artículo 170-A del Código Civil.- *“Cuando a pesar de la aplicación de las normas contenidas en este título, el negocio jurídico continúa siendo oscuro, debe éste ser entendido en el sentido menos gravoso para el obligado, si fuese a título gratuito, y en el sentido que realice la armonización equitativa de los intereses de los agentes, si fuese a título oneroso.*

El negocio jurídico debe ser interpretado de acuerdo con la buena fe, teniendo en cuenta, en su caso, los usos y costumbres admitidos, para interpretar sus ambigüedades”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALBALADEJO, Manuel (1993). ***“El Negocio Jurídico”*** (2ª ed.). Barcelona: Librería Bosch.
2. ALBALADEJO, Manuel (1996). ***“Derecho Civil”*** (14ª ed.). (Tomo I: Volumen Segundo). Barcelona: José María Bosch Editor.
3. ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel. (1979). ***“Manual de Filosofía del Derecho”***. Buenos Aires: Astrea.
4. ALZAMORA VALDEZ, Mario. (1987). ***“Introducción a la Ciencia del Derecho”*** (10ª ed.). Lima: EDDILI.
5. ANDORNO, Luis. (2001). ***“La Interpretación en los Negocios Jurídicos”***. En: VVAA, Derecho Privado - Libro Homenaje a Alberto J. Bueres, Oscar J. Ámela (dirección) y Dora Mariana Gesualdi (Coordinación), Buenos Aires: Hammurabi.
6. ARANA COURREJOLLES, Carmen (1992). ***“La Interpretación del Acto Jurídico”***. Lima: Cultural Cuzco.
7. AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. (2007). ***“Presentación”***. En: VVAA, Carlos Soto Coaguila (Director), Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina, Tomo III, Lima: Grijley.
8. BAQUEIRO ROJAS, Edgard. (1995). ***“Diccionario Jurídico Harla: Volumen I: Derecho Civil”***. México: Harla.
9. BARBERO, Doménico (1967). ***“Sistema del Derecho Privado” – Volumen I*** (6ª ed.). Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América.
10. BARRIGA HERNÁNDEZ, Carlos (2006). ***Epistemología***. Lima: Facultad de Educación de la UNMSM.
11. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano (2007), ***“La Interpretación del Contrato en el Código Civil Peruano de 1984”***. En: VV AA (2007), “Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”, Tomo III, Lima-Perú, Editorial Grijley, pág. 1765-1816.
12. BETTI, Emilio (1975). ***“Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos”***. Traducción y prólogo por José Luís de los Mozos. Madrid: Revista de Derecho Privado.

13. BETTI, Emilio (2000). ***“Teoría General del Negocio Jurídico”***. Traducción y concordancia con el Derecho español por A. Martín Pérez y Estudio Preliminar por José Luís Monereo Pérez. Granada: Comares.
14. BETTI, Emilio (2001). ***“Reflexiones sobre la noción del negocio jurídico”***. En: VVAA, ***“Teoría General del Negocio Jurídico”*** (4 estudios fundamentales), traducción y edición al cuidado de Leysser L. León, Presentación de Giovanni Battista Ferri, ARA Editores.
15. BIANCA, Máximo (1992). ***Diritto Civile. Tomo 3: Il contratto***. Dott.A.Giuffré Editore S.P.A. Milano, Italia.1987. Ristampa.
16. BIGLIAZZI, L., BRECCIA, U., BUSNELLI, F., & NATOLI, U. (1992). ***Derecho Civil. Tomo I – Volumen 2: “Hechos y Actos Jurídicos”***. Traducción Fernando Hinestrosa. Colombia: Universidad Externado de Colombia.
17. BODENHEIMER, Edgar (1981). ***“Teoría del Derecho”***. México: Fondo de Cultura Económica.
18. CABANELLAS, Guillermo (1992). ***“Repertorio Jurídico de Principios Generales del Derecho, Locuciones, Máximas y Aforismos Latinos y Castellanos”*** (4ª ed.). Buenos Aires: Heliasta.
19. CABANELLAS, Guillermo (1994). ***“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”***. Tomo IV (23ª ed.). Buenos Aires: Heliasta.
20. CARNELUTTI, Francesco (1955). ***“Teoría General del Derecho”***. Traducciones de la edición italiana por Francisco Javier Osset. Madrid: Revista de Derecho Privado.
21. CARIOTTA FERRARA, Luigi (1956). ***“El negocio jurídico”***. Traducción de la edición italiana por Manuel Albaladejo. Madrid: Aguilar.
22. CASTILLO ALVA, José Luís (2006). ***“Razonamiento judicial, interpretación, argumentación y motivación de las resoluciones judiciales”*** (2ª ed.). Lima: Ara Editores.
23. CIFUENTES, Santos. (2004). ***“Negocio Jurídico”*** (2ª ed.). Buenos Aires: ASTREA de Alfredo y Ricardo Depalma.
24. COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén. (1992). ***“El Negocio Jurídico”***. Buenos Aires: Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.

25. CORDERO MIRANDA, Mario (2007). ***“La interpretación de los contratos en Bolivia”***. En: VV. AA (2007), “Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”, Tomo I, Lima-Perú.
26. COUTURE, Eduardo J. (1979). ***“Estudios de Derecho Procesal Civil”*** (3ª ed.). (Tomo III). Buenos Aires: Ediciones Depalma.
27. CLEMENTE DE DIEGO, Felipe. (1959). ***“Instituciones de Derecho Civil”***. En: PUIG BRUTAU, J. (1981). *“Introducción al Derecho Civil”*. Barcelona: Bosch.
28. COVIELLO, Nicolà. (1949). ***“Doctrina General del Derecho Civil”*** (4ª ed.). México: UTHEA.
29. DANZ Erich (1926). ***“La interpretación de los Negocios Jurídicos”***. Traducción de la 3ª ed. Alemana y concordancias con el Derecho español por W. Roces. Madrid: Librería General de Victoriano Suarez.
30. DANZ, Erich (2009). ***“La Interpretación de los Negocios Jurídicos”***. Traducción de la 3ra. Edición Alemana de 1911 por W. Roces. Lima: Editora Escolani.
31. DE CASTRO Y BRAVO, Federico. (1997). ***“El Negocio Jurídico”***. Madrid: Civitas.
32. DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel (2007). ***“Interpretación del Contrato”***. En: VVAA, Carlos Soto Coaguila (Dir.), “Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”. Tomo III. Lima: Grijley.
33. DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO, Ignacio, ***“La Interpretación del Negocio Jurídico”***, pagina web: http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7096/7096856/la_interpretacion_del_negocio_juridico.
34. DÍEZ-PICAZO, Luis (1973). ***“Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho”***. Madrid: Ariel.
35. DU PASQUIER, Claude. (1983). ***« Introducción al Derecho »*** (3ª ed.). Traducción del francés y notas por Julio Ayasta Gonzáles. Lima: Ediciones y Distribuciones Justo Valenzuela.
36. DUCCI CLARO, Carlos. (1989), ***“Interpretación Jurídica”*** (3ª ed.). Chile: Jurídica de Chile.
37. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. (2012). ***“Acto Jurídico Negocial”*** (3ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

38. ENNECCERUS, Ludwig. (1953). ***“Tratado de Derecho Civil”***. Traducido de la 39ª edición alemana. Tomo I. Barcelona: Casa Editorial Bosch.
39. FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. (2004). ***“Introducción al estudio de la Interpretación en el Código Civil Peruano”***. En: VVAA, Guido Alpa y Otros, selección, traducción y notas de Leysser L. León, Presentación de Vincenzo Roppo, ***“Estudios sobre el contrato en General”*** (2ª ed.), Lima: ARA Editores.
40. FERRATER MORA, José (2007), ***“Diccionario de Filosofía Abreviado”*** (28ª ed.). Argentina: Sudamericana.
41. FERRI, Luigi. (1989). ***“La autonomía privada”***. Traducción de la edición italiana por Luís Sancho Mendizabal. Madrid: Revista de Derecho Privado.
42. FERRI Luigi. (2004). ***“Lecciones sobre el Contrato”*** (Reimpresión de la 2ª edición de 1982). Lima: Grijley.
43. FLUME, Werner (1998). ***“El Negocio Jurídico”*** (4ª ed.). Traducción por José María Miquel Gonzáles y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado.
44. GACETA JURÍDICA, con Presentación de Jorge Avendaño Valdez (2013), ***“Diccionario Civil”***, Lima-Perú, Editorial Gaceta Jurídica.
45. GALGANO, Francesco. (1992). ***“El Negocio Jurídico”***. Traducción realizada por Francisco de P. Blasco Gascò y Lorenzo Prats Albentosa. Valencia: Tirant lo Blanch.
46. GALGANO, Francesco. (1999). ***“El Crepúsculo del Negocio Jurídico”***. En: VVAA, BETTI, E., y Otros (2001), ***“Teoría General del Negocio Jurídico”*** (4 estudios fundamentales), Lima: ARA Editores.
47. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo (1988). ***“Introducción al Estudio del Derecho”*** (39ª ed.). México: Porrúa.
48. GARCÍA TOMA, Víctor (2007). ***“Introducción a las Ciencias Jurídicas”*** (2ª ed.). Lima: Jurista Editores.
49. GASCÓN ABELLAN, Marina & GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). ***“La Argumentación en el Derecho”*** (2ª ed.). Lima: Palestra.
50. GOLDSCHMIDT, Werner. (1983). ***“Introducción Filosófica al Derecho”*** (6ª ed.). Buenos Aires: Desalma.

51. GRONDONA, Mauro (2004). ***“La común intención de las partes y el principio de la buena fe en la interpretación del contrato: Un panorama de la autonomía privada”***. En: VVAA (Guido Alpa y Otros), selección, traducción y notas de Leysser L. León, Presentación de Vincenzo Roppo, *“Estudios sobre el contrato en General”*, (2ª ed.). Lima: ARA Editores.
52. GUASTINI, Ricardo (2008). ***“La Interpretación de la Constitución”***. En: VV.AA, Santiago Ortega (compilador). *“Interpretación y Razonamiento Jurídico”*. Lima: Hermeneia Editores.
53. HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, P. (2007). ***“Fundamentos de metodología de la investigación”*** (4ª ed.), México: Mc Graw Hill.
54. HERNÁNDEZ, J. (1995). ***“Análisis de la fórmula: Interpretación Jurídica del Párrafo cuarto del artículo 14 constitucional”***. División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, Internet, Pág. Web, [www.filosofíayderecho.com/rtf/número 5/interpretacion.htm](http://www.filosofíayderecho.com/rtf/número%205/interpretacion.htm).
55. HINESTROSA, Fernando (2007). ***“Presentación”***. En: SOTO COAGUILA, Carlos A., *“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”*, Tomo III. pág. XXXI. Lima: Grijley.
56. Kelsen, Hans. (1982). ***“Teoría Pura del Derecho”*** (18ª ed.). Argentina: Universitaria de Buenos Aires.
57. LARENZ Karl. (1956). ***“Bases del Negocio Jurídico y Cumplimiento de los Contratos”***. Traducción de Carlos Fernández Rodríguez. Madrid: Revista de Derecho Privado.
58. LATORRE SEGURA, Ángel. (1976). ***“Introducción al Derecho”*** (7ª ed.). Barcelona: Ariel.
59. LEÓN BARANDIARAN, José. (1999). ***“Acto Jurídico”*** (3ª ed.). Lima: edición económica Gaceta Jurídica.
60. LEÓN BARANDIARAN, José (1983). ***“Curso de Acto Jurídico”***. Lima-Perú: UNMSM.
61. LEÓN, Leysser. (2007). ***“La Responsabilidad Civil”*** (2ª ed.). Prólogo de Luigi Corsaro. Lima: Jurista Editores.
62. LOHMANN, G. (1997). ***“El Negocio Jurídico”***. Segunda reimpresión de la segunda edición Lima: Grijley.

63. LORENZETTI, Ricardo Luis. (2007). ***“Interpretación del Contrato en el Derecho Argentino”***. En: VV. AA, Carlos Alberto Soto Coahuila (Director), Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latín, Tomo I, Lima: Grijley.
64. MALETTA, Héctor (2009). ***“Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica”***. Lima: Universidad del Pacífico.
65. MARTÍNEZ ROLDAN, Luis y FERNÁNDEZ SUAREZ, Jesús A. (1994). ***Curso de Teoría del Derecho y Metodología Jurídica***. Barcelona: Ariel.
66. MÈLICH ORSINI, José (1986). ***“La Interpretación de los contratos y de los actos jurídicos en el nuevo Código Civil Peruano”***. En: VVAA, El Código Civil Peruano y el Sistema Jurídico Latinoamericano, Ponencias presentadas en el Congreso Internacional celebrado en Lima del 09 al 11 de agosto de 1985, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima y la Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA), Lima: Cuzco S.A. MÉLICH ORSINI, José (1986),
67. MESSINEO, Francesco (1954). ***“Manual de Derecho Civil y Comercial”***. Tomo I. Buenos Aires: Ediciones Jurídica Europa-América.
68. MESSINEO, Francesco (1986). ***“Doctrina General del Contrato”- Tomo II***. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
69. MEZA BARROS, Ramón (1987). ***“Manual de Derecho Civil”***. Tomo I (7ªedición). Manuales Jurídicos Nº 39. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
70. MORALES HERVIAS, Rómulo., & LEÓN Leyser. (2004). ***“Presentación”***. En: FERRI, Luigi, “Lecciones sobre El Contrato (Curso de Derecho Civil)”, traducción de Nelvar Carreteros Torres, Pág. XV-XVI Lima: Grijley.
71. MOREYRA GARCÍA, F. (2005). ***“El Acto Jurídico según el Código Civil Peruano”***. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
72. OSSORIO, Manuel (1999), ***“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”*** (26ª ed.), Buenos Aires – Argentina: Heliasta.

73. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, & OSPINA ACOSTA, Eduardo. (1994). ***“Teoría General del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos”*** (4ª ed.). Santa Fe de Bogotá: Temis.
74. OSTERLING PARODI, Felipe & CASTILLO FREYRE, Mario. (2011). ***“Nulidad virtual. La sanción no tipificada”***. En: VVAA, Carlos Alberto Calderón Puertas y Carlos Agurto Gonzales (Coordinadores), ***“Volumen X: Acto Jurídico”***, Lima: Jurídica Motivensa.
75. OSTI, Giuseppe, voz ***“Contratto”***, en ***Novissimo Digesto italiano***, vol. Utet, Turin, 1959, Pág. 522. En: LEÓN HILARIO, Leysser L. (2007), ***“La Responsabilidad Civil”*** (2ª edición), Prólogo de Luigi Corsaro, Lima – Perú, Jurista Editores.
76. PARADISO AJANI, Massimo. (2011). ***“Hechos, Actos y Negocios Jurídicos”***. En: VVAA, Carlos Alberto Calderón Puertas y Carlos Agurto Gonzales (Coordinadores), ***Volumen X: Acto Jurídico***, Lima: Jurídica Motivensa.
77. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). ***“Diccionario de la Lengua española”*** (22ª ed.). (Tomo II). Madrid: Espasa Calpe.
78. RODRÍGUEZ ALCALÁ, Roberto Moreno (2007). ***“¿Contratos hechos por Jueces? 41/2 sugerencias para evadir al Juez cadí en la Interpretación del Contrato”***. En: VV. AA, Carlos Alberto Soto Coahuila (Director), ***“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”*** Tomo II, pág. 1463-1506, Lima: Gijley
79. ROMERO MONTES, Francisco. (2003). ***“Curso del Acto Jurídico”***. Lima: Librería Portocarrero.
80. RUBIO CORREA, Marcial. (2009). ***“El Sistema Jurídico - Introducción al Derecho”*** (10ª ed.). Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
81. SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo & REYES MEZA, Carlos (2002). ***“Metodología y diseños en la investigación científica”*** (3ª ed.). Lima: Universidad Ricardo Palma.
82. SANTORO PASSARELLI, Francesco (1964), ***“Doctrinas Generales del Derecho Civil”***. Traducción por A. Luna Serrano. Madrid: Revista de Derecho Privado.

83. SCOGNAMIGLIO, Renato. (2004). ***“Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico”***. Edición y traducción y notas de Leysser L, León, Prólogo de Pietro Rescigno. Lima: Grijley.
84. SOTO COAGUILA, Carlos Alberto (2007), ***“La Interpretación de los Contratos Predispuesto en el Derecho Peruano”***. En: VV AA (2007), ***“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”***, Tomo III, Lima Perú, Editorial Grijley, págs. 2031-2080.
85. STOLFI, Giuseppe. (1959). ***“Teoría del negocio jurídico”***. Traducciones de la edición italiana por Jaime Santos Briz. Madrid: Revista de Derecho Privado.
86. TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2002). ***“Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato”***. Lima: Grijley.
87. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2012). ***“Acto Jurídico”*** (4ª ed.). Lima: IDEMSA.
88. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2001). ***“Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho”*** (2ª ed.). Lima: Idemsa y Colombia: Temis.
89. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal (2008). ***“Diccionario de Jurisprudencia Civil”***. Lima: Grijley.
90. TRABUCCHI, Alberto (1967). ***“Instituciones de Derecho Civil”***. (Tomo I). Madrid: Revista de Derecho Privado.
91. VIDAL RAMÍREZ, Fernando. (2011). ***“El Acto Jurídico”*** (8ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.
92. VIDAL RAMÍREZ, Fernando. (2007). ***“La Interpretación del Contrato en el Derecho Peruano”***. En: VV. AA, Carlos Alberto Soto Coahuila (Director), ***“Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina”*** Tomo III, Lima: Gijley
93. VIDAL RAMÍREZ, Fernando. (1985). ***“Exposición sobre el Libro del Acto Jurídico”***. En: VVAA, ***“El Derecho: Exegesis y Análisis del Código Civil de 1984”***, Arequipa: Colegio de Abogados de Arequipa, Año LXIV, N° 297.
94. VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2000). ***“El Derecho Civil en sus conceptos fundamentales”*** (2ª ed.). Lima: Edición Económica Gaceta Jurídica.

95. VIDAL RAMÍREZ, Fernando (1984). **“Acto Jurídico, Prescripción y Caducidad”**. En: VVAA, “1er. Seminario de Difusión del Nuevo Código Civil del 17 Set., al 04 Oct. 1984”, Lima: Programa Académica de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
96. VIDAL RAMÍREZ, Fernando (2003). **“Comentario de definición del Acto Jurídico y Elementos de Validez”**. En: VVAA, “Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas”, Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica.
97. VON TUHR, Andreas (2005), **“Derecho Civil- Volumen II: Los Hechos Jurídicos”** Madrid España, Editorial Marcial Pons.

ANEXOS

CASO Nº 1

CAS. Nº 452-2007-LIMA. Obligación de Dar Suma de Dinero.

Lima, veintiséis de noviembre del dos mil siete.- **LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA**; vista la causa número cuatrocientos cincuenta y dos- dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; **MATERIA DEL PROCESO**: Se trata del recurso de casación interpuesto por Del Pilar Miraflores Hotel Sociedad Anónima, contra la resolución de vista emitida por la Primera Sala Civil Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas trescientos setenta y tres, su fecha cuatro de octubre del dos mil seis, que confirma la sentencia apelada de fojas doscientos ochenta y cinco, de fecha veinticinco de mayo del dos mil seis, que declara fundada la demanda; ordena llevar adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con pagar al ejecutante la suma de un millón ciento setenta y mil novecientos veintisiete dólares americanos con treinta y cuatro centavos, más intereses demandados, costas y costos; **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución del trece de junio del dos mil siete, por las causales previstas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual los recurrentes denuncian: ***I. la interpretación errónea de una norma de derecho material***, con respecto, ***a) del artículo mil trescientos sesenta y dos del Código Civil***, alegando que es imposible jurídica, contractual, financiera y tributariamente, pretender que se procedió a ejecutar el derecho de dar por vencidas todas las cuotas pendientes de pago contenido en la cláusula décima de los contratos materia de Litis, puesto que ser así, lo que hubiese sucedido es que el acreedor no hubiese requerido a mi representada “SOLO” (sic) las cuotas contenidas en sus cartas de resolución contractual, sino además, aquellas que aún no habían vencido, generando con ello que el importe total que hubiese reclamado (por capital e intereses) fuese superior a los tres millones de dólares, en tal sentido, agrega que resulta incongruente pretender darle la naturaleza jurídica de una comunicación de aceleración de cuotas por vencer conforme a lo establecido en la décima cláusula de los contratos de arrendamiento financiero y leaseback, amparándose erróneamente en lo dispuesto por el artículo mil trescientos sesenta y dos del Código Civil, pues a tal derecho de aceleración el banco renunció expresamente, toda vez que al momento de comunicar su decisión de resolver los contratos, “SOLO EXIGIÓ LOS IMPORTES ADEUDADOS POR CONCEPTO DE LA RENTA VENCIDA” (sic) y en ningún momento indicó el ejercicio del referido derecho, ***b) del artículo noventa del Decreto Legislativo doscientos noventa y nueve***, (debe entenderse como artículo nueve conforme a lo expuesto en el recurso), en atención a que el segundo párrafo del numeral denunciado señala expresamente que en caso de incumplimiento en dos o más cuotas faculta al acreedor a dar por resuelto el contrato, situación que en el presente caso se ha presentado y que de ninguna manera puede considerarse como una aceleración del vencimiento de las cuotas pendientes de pago a la fecha de la comunicación. *Continúa* afirmando que la pretendida justificación contenida en la sentencia impugnada, mediante la cual se pretende sustentar que el importe demandado (que carece de toda justificación contractual y financiera) se ha obtenido por la aceleración de las cuotas, no tiene sustento, ***II. Inaplicación de una norma de derecho material***, a saber del ***artículo mil trescientos veintitrés del Código Civil***, para lo cual argumenta que dicho numeral, al cual hace referencia la resolución impugnada, está referido única y exclusivamente a aquellos casos en los cuales una única obligación es fraccionada o se acuerda que se efectuó en cuotas periódicas, puesto que conforme lo establece el artículo mil doscientos veinte del Código Civil, pago equivale a ejecución integral de la prestación, por lo que corresponde determinar si existía una única prestación que hubiese sido fraccionada en cuanto a su pago, siendo que en el caso de los contratos de arrendamiento financiero, existen múltiples prestaciones, las cuales se agotan o concluyen de manera consecutiva, cada vez que la renta pactada se devenga, por lo tanto

no puede pretenderse que exista una sola obligación de pago “fraccionada” en el período temporal contenido en los contratos de arrendamiento financiero, en consecuencia no resulta aplicable al presente caso la norma denunciada, **III. La contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso**, ya que, a) no es posible pretender considerar que al amparo del principio de libertad de contratación y del principio de búsqueda de la voluntad real (artículo mil trescientos sesenta y dos del Código Civil), se pueda resolver *ultra petita*, lesionando con ello los legítimos derechos de su representada con una interpretación antojadiza y contraria al sentido de la voluntad contractual y la legislación especial que regulan los contratos de arrendamiento financiero, ya que al señalar que la resolución del contrato por parte del Banco Interbank no es tal en base al principio de la búsqueda de la voluntad real, sin embargo, en base al mismo principio las partes acordaron que en caso de incumplimiento el acreedor podía resolver el contrato tal como así lo disponen los diferentes contratos mercantiles; y b) en ningún momento se nos ha comunicado el hecho fáctico de haber recibido de parte de uno de los fiadores solidarios un pago parcial ascendente a cuatrocientos sesenta mil dólares, importe que la Sala pretende desconocer al señalar taxativamente en el sexto considerando de la impugnada, desconociendo con ello el valor probatorio que un instrumento público tiene, no está cuestionando el derecho que tiene el acreedor a exigir que se pague, lo que cuestiona es que el acreedor no tiene derecho a exigir más allá de lo que el contrato y la propia ley le otorga; y, **CONSIDERANDO: Primero.-**Que, existiendo denuncias por vicios *In Iudicando e in Procedendo*, corresponde verificar primero si se ha configurado o no esta última causal, pues en caso de ser estimada se dispondría el reenvío de la causa al estado procesal correspondiente, impidiendo que sea factible el análisis de las normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida; **Segundo.-Sobre las denuncias por vicios In Procedendo**, con respecto al ítem a) de la denuncia por contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se debe indicar que como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente número dos mil quinientos ocho-dos mil cuatro-AA, publicada el doce de noviembre del dos mil cuatro, en el diario Oficial El Peruano, “el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, (...), a fin de que las personas estén en condición de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un proceso, (...) jurisdiccional, debe respetarse el debido proceso legal..., desde aquella perspectiva y estando a los hechos en que se sustenta el ítem a), se debe precisar que los presentes autos versan sobre una de Obligación de Dar Suma de Dinero, por la cual el Banco Internacional del Perú – INTERBANK-, emplaza a Del Pilar Miraflores Hotel Sociedad Anónima a efectos que se le pague la suma de un millón ciento sesenta y seis mil novecientos veintisiete dólares americanos con treinta y cuatro centavos, más los intereses moratorios y compensatorios, según lo pactado en los contratos materia de ejecución, siendo que como es de verse de la resolución impugnada de fojas trescientos setenta y tres, su fecha cuatro de octubre del dos mil seis, que confirma la sentencia de primera instancia, de fojas doscientos ochenta y cinco, de fecha veinticinco de mayo del dos mil seis, se ordena que se lleve adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con pagar a la ejecutante la suma de un millón ciento sesenta y seis mil novecientos veintisiete dólares americanos con treinta y cuatro centavos, más los intereses demandados, con lo que se cumple el Principio de Congruencia Procesal, por el cual, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes en atención al principio antes mencionado previsto en la segunda parte del artículo séptimo del Título Preliminar citado, toda vez que la infracción a este principio determina la emisión de sentencias incongruentes como la sentencia *ultra petita*, la *extra petita*, *citra petita* e *infra petita*, estando a que en el caso de autos de forma alguna puede alegarse que la sentencia recurrida es incongruente por ser una sentencia *ultra petita*, vale decir, que se resuelve más allá del petitorio o hechos, por lo expuesto líneas arriba, consecuentemente este extremo del recurso deviene en inamparable, máxime si lo que busca en el fondo la recurrente es cuestionar la aplicación de normas de naturaleza material, como lo es el artículo mil trescientos sesenta y dos del Código Civil, lo que no resulta viable al amparo de una causal de naturaleza procesal, **Tercero.-**Con respecto al ítem b) de la causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se tiene que, como se observa de autos la Sala Civil, en la resolución de vista recurrida, ha valorado de

manera conjunta, utilizando su apreciación razonada todos y cada uno de los medios probatorios aportados al proceso, de conformidad con el artículo ciento noventa y siete del Código Procesal Civil, al extremo de no desconocer, como alega la recurrente, el pago parcial que supuestamente habrían haber realizado los fiadores sino que en todo caso, ordena al AQuo que en la etapa de ejecución verifique tal hecho, resultando igualmente inviable este extremo del recurso, **Cuarto.-Con respecto a las denuncias por vicios In iudicando**, a saber de **la interpretación errónea del artículo mil trescientos sesenta y dos del Código Civil y nueve del Decreto Legislativo número doscientos noventa y nueve, (ítems a y b del numeral I)**, causal que se configura cuando concurren los siguientes supuestos: **a)** el Juez establece determinados hechos esenciales, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; **b)** que aquellos hechos, así establecidos judicialmente tienen relación de semejanza esencial o identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica material individualmente seleccionada como pertinente para el caso concreto; **c)** que elegida esta norma como pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); **d)** que en la actividad interpretativa, el Juzgador utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma (es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma), con lo que resuelve litigio de manera distinta o contraria a los valores y fines del derecho y, especialmente vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia; **Quinto.- Interpretación de los contratos**, ello consiste en determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones, siendo que en tres hipótesis fundamentales tiene lugar la interpretación del contrato: 1. Cuando sus términos son oscuros y ambiguos, 2. Cuando siendo claros sus términos, no se concilian con la naturaleza del contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece manifestada y, 3. Cuando relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o algunas de ellas, estando a que los artículos ciento sesenta y ocho a ciento setenta regulan las reglas de interpretación correspondiendo a los Jueces de mérito - primera y segunda instancia- interpretar los contratos, lo que escapa al control de la Corte de Casación, pues esta sólo puede intervenir cuando se infringe una Ley en caso que se desnaturaliza el contrato al interpretarlo, o como sostiene Sánchez Palacio Paiva, en su libro “El Recurso de Casación Civil-Praxis”, “en casación, no se controla la interpretación de la voluntad de las personas. Esto excluye los términos de un contrato...Resultando claro que los fines de la casación no se compatibilizan con los pactos privados y que tampoco pueden dar lugar a la ejemplificación”, sin embargo dicho autor reconoce que “por ejemplo, determinar si los hechos que se han constatado configuran un contrato de mutuo o se trata de un contrato de depósito, o establecer si se presentan los elementos que configuran un contrato de compra venta, etc. Tal calificación no importa una cuestión fáctica, sino que es un control de derecho que entra de lleno en el oficio casatorio”, criterio que es tomado por este Supremo Colegiado; **Sexto.-Sobre lo cuestionado por la recurrente**, como es de verse del recurso de casación interpuesto, lo que la denunciante cuestiona no es sino la interpretación sobre adelantamiento de cuotas vencidas, que el A Quem ha dado a los contratos sub litis específicamente a la cláusula décima de la Escritura Pública de Compra Venta Leaseback inmobiliario de fecha once de agosto del dos mil de fojas catorce –treinta y nueve, modificado por Escritura Pública de modificación de Arrendamiento Financiero de fecha diez de noviembre del dos mil de fojas cuarenta, así como la cláusula décima de la Escritura Pública de arrendamiento financiero de fecha once de agosto del dos mil de fojas cincuenta, modificada por Escritura Pública de modificación de arrendamiento financiero de fecha diez de noviembre del dos mil de fojas setenta y dos, y de la décima cláusula de la Escritura Pública de arrendamiento financiero de fecha nueve de noviembre del dos mil de fojas ochenta y dos, que señalan que “...si el banco resolviera el presente contrato, podrá dar por vencida todas las cuotas del arrendamiento financiero, produciéndose el vencimiento anticipado de las mismas, las que deberán ser pagadas de inmediato...”lo cual difiere, según la recurrente, de la verdadera voluntad objetiva de las normas denunciadas, en tal sentido, y como ya se ha señalado líneas arriba, éste Colegiado ha precisado que la interpretación de los contratos –en línea de principio rector- es tarea confiada a la cordura del juzgador de mérito, pues ello son cuestiones de hecho reservados a jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error de calificación del contrato, error éste de derecho, situación que de forma alguna ha denunciado la recurrente al invocar la interpretación errónea del artículo mil trescientos sesenta y dos del Código Civil o del artículo noveno del Decreto Legislativo doscientos

noventa y nueve, pues no cuestiona la naturaleza de los contratos sub litis (leasing) sino más bien los acuerdos adoptados, vale decir, si es o no un adelantamiento de cuotas, o que nos remitiría a una interpretación de los pactos privados, por lo que el recurso en este extremo debe desestimarse; **Séptimo.-Sobre la inaplicación de una norma de derecho material**, a saber del **artículo mil trescientos veintitrés del Código Civil**, a que se hace referencia el **ítem II)**, causal que se configura cuando concurren los siguientes supuestos: a) el Juez por medio de una valoración conjunta y razonada de las pruebas, establece como probado ciertos hechos alegados por las partes y relevantes del litigio; b) que estos hechos guardan relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material; c) que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) el Juez no aplica esta norma (específicamente, la consecuencia jurídica), resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia, a dicho respecto ante todo debe señalarse que como es de verse de la sentencia impugnada, la Sala Civil si ha aplicado dicha norma material, por lo que la causal deviene en inaplicable, sin embargo se debe indicar que nuevamente lo que pretende la recurrente es una interpretación de las cláusulas contractuales, lo cual resulta inviable en sede Casatoria, mas aún si se precisa que el recurso extraordinario de casación tiene un carácter restrictivo, pues en primer lugar sólo se provocara la apertura de esta Sede Casatoria si se configuran, algunas de las causales que se encuentran predisuestas en la ley, vale decir, las preceptuadas en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Procesal Civil, siendo que tal criterio se agudiza por no actuar este Supremo Tribunal como una tercera instancia y en segundo lugar, por cuanto, este recurso tiene por principal finalidad, en el sistema puro u ortodoxo, la correcta observación del derecho positivo en las decisiones judiciales y, complementariamente la unificación de dichas decisiones en casos similares, en tal línea de ideas, es de deducir que en lo que concierne a la interpretación de los contratos no es tarea de este Supremo Tribunal, pues ello encierra una cuestión de hecho reservada a los Jueces de instancia; **Octavo.-Que**, siendo así, al no verificarse las causales denunciadas, debe procederse conforme a lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y siete, trescientos noventa y ocho y trescientos noventa y nueve del Código Procesal Civil; por cuyas razones, declararon: **INFUNDADA** el recurso de casación interpuesto Del Pilar Miraflores Hotel Sociedad Anónima, en consecuencia **NO CASARON** la resolución de vista de fojas trescientos setenta y tres, su fecha cuatro de octubre del dos mil seis, **CONDENARON** al recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Banco Internacional del Perú -Interbank contra Del Pilar Miraflores Hotel Sociedad Anónima sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron. Vocal Ponente Señor Solís Espinoza.- SS. TICONA POSTIGO, SOLÍS ESPINOZA, PALOMINO GARCÍA, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA.

CASO Nº 2

CAS. Nº 1757- 2009 AREQUIPA. Lima, nueve de marzo de dos mil diez.- **VISTA;** Con el acompañado; la causa número mil setecientos cincuenta y siete – dos mil nueve; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, luego de verificada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: **RECURSO DE CASACIÓN:** Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas ciento noventa y siete por don Fidel Díaz Miranda, contra la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y siete, su fecha quince de mayo de dos mil nueve, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirma la sentencia de fojas ciento catorce, su fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, en el extremo que declara fundada la demanda interpuesta por don Yuri Herrera Camino sobre otorgamiento de escritura pública. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO:** La parte recurrente, invocando la causal de infracción normativa material, denuncia que si bien la pretensión incoada por el demandante se sustenta en el artículo 1412 del Código Civil, también es cierto que su defensa se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 1426 del citado Código, que establece que en los contratos bilaterales se suspende el cumplimiento de una obligación si la otra parte no ha cumplido con la suya, por lo que debió fijarse como punto controvertido establecer si el demandante cumplió con su obligación del pago total del precio de venta del predio. Agrega, que en el caso de autos existen dos posiciones respecto de la minuta de compraventa, la que exige el otorgamiento de la escritura pública y la que se opone a dicha formalización, pues los compradores no han cumplido con el pago total de venta, por lo que la recurrida debió interpretar el contrato conforme a las reglas del artículo 168 del Código Civil de lo que se desprende que se ha inaplicado una norma de derecho material. Finalmente sostiene que la sentencia debió considerar el artículo 1426 del Código Civil, pues una de las partes no cumplió la prestación a su cargo, dado que el demandante no canceló el precio total de la compraventa. **CONSIDERANDO: Primero.-** Que, es materia de la demanda el otorgamiento de la escritura pública correspondiente a la venta de la propiedad denominada Fundo La Verónica, ubicado en la Avenida La Aviación, kilómetro 7 Lateral 4 Cerro Colorado, de la ciudad de Arequipa, efectuada mediante minuta de contrato de compra venta de predio rústico de fecha tres de agosto de dos mil cinco, demanda que se sustenta en lo dispuesto en el artículo 1412 del Código Civil referido a la exigencia de partes del cumplimiento de la formalidad del contrato. **Segundo.-** Que, en ambas instancias de mérito se ha llegado a determinar que de acuerdo a lo pactado en la cláusula quinta, forma de pago del contrato de compra venta de predio rústico, antes citado, los compradores tenían noventa días para cancelar el saldo del precio, plazo que empezaba a computar a partir de la suscripción de la escritura pública, por lo que, atendiendo a que a la fecha aún no se ha suscrito la escritura pública, el plazo de los noventa días no ha empezado a correr, por lo que concluyen que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1549 del Código Civil el comprador puede requerir al vendedor para que formalice el referido contrato. **Tercero.-** Cabe tener presente que la autonomía privada o libertad de contratación es el derecho que tienen las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos. Las personas son libres para negociar la celebración de sus contratos (libertad de contratar) y las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, plazos, y demás particularidades que regirán la relación jurídica creada por el contrato (libertad contractual). Esta libertad de contratación es un derecho fundamental de la persona reconocido por la Constitución Política en el inciso 14) del artículo 2 y garantizado también por el artículo 62 del texto constitucional; siempre y cuando no contravengan al orden público, a las buenas costumbres (artículo V del Título Preliminar del Código Civil), así como las normas legales de carácter imperativo (artículo 1354 del Código Civil). Por tanto el acuerdo entre las partes de elevar a escritura pública la minuta de compraventa y

posteriormente cancelar el precio de venta, no contraviene normas de orden público o afecta las buenas costumbres, habiendo interpretado las instancias esta cláusula quinta del contrato de acuerdo al texto literal de esta, precisamente en salvaguarda de esta libertad de contratación. **Cuarto.-** El artículo 1529 del Código Civil establece que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Norma que debe observarse atendiendo las estipulaciones particulares pactadas por las partes, de conformidad a la autonomía de la voluntad de las partes expuesta precedentemente, por lo que, en el caso de autos, debe analizarse si el contrato está sujeto a modalidad (sujeto a plazo, modo o condición). **Quinto.-** En ese orden de ideas, conforme se ha determinado en las instancias de mérito, la forma de pago del precio de la compra venta del inmueble materia de Litis se encuentra establecido la cláusula quinta de la minuta de compraventa obrante a folios tres de autos, que textualmente establece "(...) **QUINTA.- FORMA DE PAGO. (...) – La cantidad de US \$ 58 400.00 (Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos y 00/100 Dólares Americanos) que serán cancelados en un plazo que no exceda a los 90 días de suscrita la escritura pública**". Conforme a los términos pactados en la citada cláusula, se aprecia que las partes contratantes establecieron como condición del pago del saldo del precio del bien, el otorgamiento previo de la Escritura Pública. **Sexto.-** El artículo 1426 del Código Civil²⁶¹ que regula la excepción de incumplimiento o *expetio non adimpleti contractus*, por su naturaleza jurídica constituye una verdadera y propia excepción sustancial, basada en el Derecho sustantivo, y no procesal; considerada como el ejercicio de la facultad que tiene cada parte de suspender legítimamente la prestación debida, cuando la otra parte exige la ejecución de ella, mientras que esta parte no cumple u ofrece cumplir la contraprestación a su cargo. (De la Puente y Lavalle Manuel, El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo II, Palestra Editores, Lima, 2001 pp. 317.) **Sétimo.-** Sobre el particular, el demandado plantea que, por tratarse del cumplimiento de la relación jurídica obligacional creada por un contrato de compraventa al no haber cancelado el precio, él no está obligado a ejecutar la prestación a su cargo por cuanto el demandante no ha ejecutado aún la contraprestación que le corresponde ni ha garantizado su ejecución. Al respecto, no cabe aplicar al presente caso el artículo 1426 del Código Civil, como pretende la parte recurrente, al estar el pago del precio del bien materia de venta sujeto a condición como es el otorgamiento previo de la Escritura Pública. **Octavo.-** En tal sentido, resulta infundado el alegato referido a señalar a que en las instancias de mérito se omitió fijar como punto controvertido establecer si el demandante cumplió con su obligación de pago total del precio de venta del predio, lo que queda desvirtuado, al haberse emitido pronunciamiento según lo expresado en la sentencia de vista en los acápites 2.4 y 2.5, razón por la cual, no se encuentra acreditado el agravio denunciado. **Noveno.-** Que, en relación al alegato referido a señalar que el contrato deberá interpretarse de acuerdo a las reglas del artículo 168 del Código Civil, cabe tener presente que el referido dispositivo legal establece que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Norma en mención que regula el sistema de interpretación objetiva del intérprete es la declaración en sí, con independencia de lo que realmente quiso el agente. **Décimo.-** Al respecto, no obstante la parte recurrente pretende la interpretación del contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del Código Civil, empero contrariamente a lo estipulado en el citado dispositivo pretende otorgar una interpretación distinta a lo expresamente estipulado en la cláusula quinta del contrato materia de Litis; razones por las cuales, este extremo debe ser desestimado, debiendo tomarse en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 1361 del Código Civil que establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y que se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. Por las consideraciones antes anotadas, y advirtiéndose que los agravios alegados en el recurso de casación resultan infundados y verificándose que la sentencia de vista recurrida ha sido emitida acorde a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil. **RESOLUCIÓN:** Declararon **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto a fojas ciento noventa y siete por don Fidel Díaz Miranda, en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y siete, su fecha quince de mayo de dos mil

²⁶¹ Artículo 1426 del Código Civil.- En los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento.

nueve, en el extremo que confirma la sentencia apelada de fojas ciento catorce, su fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho que declara fundada la demanda sobre otorgamiento de escritura pública, con lo demás que contiene; **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley, y los devolvieron.- Vocal Ponente Mac Rae Thays.- SS. VÁSQUEZ CORTEZ, TÁVARA CÓRDOVA, RODRÍGUEZ MENDOZA, ACEVEDO MENA, MAC RAE THAYS.

Publicado en El Peruano el miércoles 29 de febrero de 2012. Pág. 33822-33823.

CASO Nº 3.

CAS. Nº 2587-2005- LIMA.

Lima, 12 de abril dos mil seis.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, vista la causa número dos mil quinientos ochenta y siete guion dos mil cinco, en audiencia pública de la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente resolución: **1. MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del recurso de casación interpuesto por Estancia Don Sancho Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista de fojas doscientos dos, su fecha once de mayo de dos mil cinco, emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia apelada contenido en la resolución número veinticinco obrante a fojas ciento setenta y uno, su fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro, declara infundada la contradicción efectuada por la codemandada Estancia Don Sancho Sociedad Anónima Cerrada y Carlos Alberto Boloña Behr, y Fundada la demanda ejecutiva interpuesta por el Banco Wiese Sudameris, y en consecuencia ordena que los ejecutados Estancia Don Sancho Sociedad Anónima Cerrada, Carlos Alberto Boloña Behr y Sylvia Acuña Koetzle de Boloña cumplan con pagar solidariamente a favor del ejecutante la suma de cuatrocientos veinte mil dólares americanos, más intereses, costas y costos del proceso. **2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:** Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha quince de noviembre de dos mil cinco, ha estimado procedente el recurso de casación por la causal prevista en el inciso 1º del artículo 386 del Código Procesal Civil, respecto de la denuncia de interpretación errónea del artículo 279 inciso 11 de la Ley de Títulos Valores –Ley 27287-, pues se sostiene que la Sala Superior al indicar que el Banco demandante no prorrogó el pagaré sino que lo renovó con la autorización consignada en el título-valor, interpreta erróneamente tal norma por cuanto si el Banco realiza las renovaciones sin una nueva intervención de los obligados, éstos quedan liberados de toda obligación, siendo que la única manera de ampliar el plazo sin la intervención de los obligados era mediante la prórroga previamente pactada en el título-valor. **3. CONSIDERANDOS: Primero.-**Que, el artículo 279 de la Ley 27287 –Ley de Títulos Valores- estableció el glosario de términos de la referida Ley, definiendo en sus incisos 10º y 11º la prórroga y la renovación de los títulos valores, señalando con respecto a la primera que la prórroga es la ampliación de plazo de vencimiento de un título-valor, sobre la base de un acuerdo previo adoptado conforme al artículo 49, sin que para ello se requiera de intervención de los obligados, los mismos que mantienen su obligación respecto del título prorrogado; y en relación a la segunda, que la renovación es la ampliación de plazo de vencimiento de un título-valor, en mérito a una nueva y expresa intervención del obligado u obligados que asumirán desde entonces las obligaciones respectivas, quedando liberados de toda obligación quienes no intervengan en la renovación. **Segundo.-**Que, la cláusula de prórroga del plazo se encuentra regulada en el artículo 49 de la Ley de Títulos Valores, consistiendo ella en una ampliación del plazo del título-valor en la fecha de vencimiento o aún después de él, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: a) el obligado que admitió tal prórroga haya otorgado su consentimiento expreso en el mismo título-valor; b) que no se haya extinguido el plazo para ejercitar la acción derivada del título-valor a la fecha en que se realiza la prórroga; y, c) que el título-valor no haya sido protestado o no se haya obtenido la formalidad sustitutoria, de ser el caso. **Tercero.-**Que, conforme el artículo 49.2 de la referida Ley Cartular la prórroga del plazo surtirá plenos efectos por el sólo mérito de la consignación del nuevo plazo de vencimiento que deje el tenedor en el mismo título, firmando dicha prórroga o prórrogas que conceda; siendo que la cláusula de prórroga acordada con el obligado principal en la oportunidad de la emisión o aceptación del título surte sus efectos inclusive frente a los obligados solidarios o garantes que hubieran intervenido en el título que consigne dicha cláusula, así como frente a quienes intervengan en el título luego de las prórrogas, según lo establece el artículo 49.4 de la citada Ley. **Cuarto.-**Que, en consecuencia, la cláusula de

prórroga consiste en un consentimiento expreso que otorga el obligado principal para que el título valor pueda ser ampliado en su plazo por el tenedor a su vencimiento, sin que sea necesaria la intervención del obligado ni de los garantes solidarios respecto de los cuales también surte sus efectos la prórroga del plazo de vencimiento del título valor; no quedando los mismos liberados de la obligación. **Quinto.**-Que, a diferencia de ello la renovación no es una autorización previa para que el título-valor sea prorrogado a su vencimiento por el tenedor, sino que es un acuerdo de ampliación del plazo que se manifiesta con la nueva intervención del obligado en el título-valor asumiendo desde entonces las obligaciones respectivas, quedando liberados de toda obligación quienes no intervienen en la renovación; requiriéndose por tanto su intervención para que se entienda que el título-valor renovado surte efectos con respecto de ellos. **Sexto.**-Que, en el caso sub materia se ha establecido en el pagaré emitido con fecha treinta y uno de julio de dos mil uno, obrante a fojas dos, se señaló que: "...el Banco se reserva el derecho de renovar este pagaré cuando lo estime conveniente, por lo que acepto/ aceptamos todas las anotaciones que en tal sentido haga en este título, ya sea por el importe total o cantidad menor, aun cuando las mismas no aparezcan suscritas por mi/nosotros". **Sétimo.**-Que, conforme a los artículos 168 y 170 del Código Civil los actos jurídicos deben ser interpretados de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe, así como según la naturaleza y el objeto del acto; siendo que en el presente caso si bien se advierte que las partes han otorgado el "*Nomen juris*" de renovación, la naturaleza del pacto de acuerdo a los criterios de interpretación que establecen las normas acotadas ha sido establecer una cláusula de prórroga en la que se autorizaba al Banco a prorrogar el plazo del título valor sin que sea necesaria la intervención de los obligados. **Octavo.**-Que, asimismo se colige que el pagaré puesto a cobro ha sido prorrogado conforme a lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley de Títulos Valores, por cuanto ello se ha efectuado después de su vencimiento y antes de que se haya extinguido el plazo para ejercitar la acción derivada del título-valor; no habiéndose incurrido por tanto en defecto formal, gozando el título de mérito ejecutivo para que se pueda despachar su ejecución. **Noveno.**-Que, si bien la Sala de mérito ha incurrido en error al invocar el artículo 279 inciso 11º de la Ley de Títulos Valores, respecto de la renovación de los títulos valores, cuando de acuerdo a la naturaleza del acto corresponde una cláusula de prórroga, ello no amerita que se case la sentencia de vista por el simple hecho de estar erróneamente motivada sólo en este punto, puesto que su parte resolutive se ajusta a derecho, habiéndose procedido a efectuar la correspondiente rectificación conforme a los considerandos precedentes; resultando infundado el recurso de casación de conformidad con lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil. **4. DECISIÓN:** Por tales consideraciones: **a)** Declararon **INFUNDADO** el recurso de casación de fojas doscientos veintisiete, interpuesto por Estancia Don Sancho Sociedad Anónima Cerrada, en consecuencia, **NO CASARON** la sentencia de vista de fojas doscientos dos, su fecha once de mayo de dos mil cinco, **b)** **CONDENARON** a la entidad recurrente a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, **c)** **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco Wiese Sudamris, sobre obligación de dar suma de dinero; y los devolvieron.- SS. CAROAJULCA BUSTAMANTE, SANTOS PEÑA, PALOMINO GARCÍA, HERNÁNDEZ PÉREZ, MIRANDA CANALES. **C-53188.**

Publicado: en El Peruano el lunes 2 de octubre de 2006, Pág. 17134-17135.

CASO N° 4

CAS. N° 2080-2001- LIMA DESALOJO

Lima 19 de octubre del 2001

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica: Vista la causa 2080-2001, con el acompañado, en Audiencia Pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Julia Aurora Urresti Torres contra la sentencia de vista de fs. 90, su fecha 19 de abril del 2001, que revocando la sentencia apelada de fs. 63, su fecha 24 de enero del mismo, declara improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha 13 de agosto del 2001 ha estimado procedente el recurso por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al haber el Colegiado omitido cumplir su obligación de pronunciarse sobre la cuestión controvertida, declarando improcedente la demanda por una supuesta “redacción confusa del contrato”, lo que no constituye causal de improcedencia alguna tal como se aprecia de lo establecido por el artículo 427 del Código Adjetivo. **CONSIDERANDO: Primero.-**Que, por el principio de congruencia procesal, los jueces se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretensionado, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hecho no alegados por las partes, lo que a su vez implica que tienen la obligación de pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso en sus medios impugnatorios, lo que en buena cuenta significa pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos que constituyen la cuestión materia de discusión.

Segundo.-Que, en la presente causa se fijó como puntos controvertidos los siguientes, a) establecer el derecho que le asiste a la parte demandante para la restitución de los aires que se ubican sobre el 2° piso de la calle Esteban Tuerden, N° 898, que viene a ser el 3° piso de todo el inmueble; y b) establecer si los demandados tienen justo título que ampare su posesión sobre el área demandada. **Tercero.-**Que, de lo señalado en el considerando precedente queda claro que la materia controvertida giraba en demostrar, por un lado que la parte accionante tenía o no título que la legitimara para solicitar el desalojo, y por otro lado que la parte emplazada tuviera o no título que justificara la posesión que ejerce sobre el bien materia de litis. **Cuarto.-**Que, la Sala de revisión al pronunciarse respecto al fondo de la controversia señala que “de autos es de verse que las partes debaten sobre el derecho de propiedad sobre los aires del 2° piso del mencionado inmueble, pugna que se origina en la confusa redacción del contrato contenido en la escritura pública de fs.6 respecto a la transmisión, o no, de la propiedad de los aires del 2° piso, situación que al no aparecer claramente expresada en dicho contrato deberá ser previamente materia del proceso y vía correspondiente, no del presente proceso de desalojo que precisa la clara delimitación del derecho de propiedad y la ocupación por el demandado sin título alguno, aspectos que no se aprecian en el presente proceso por la situación descrita (...)”. **Quinto.-**Que, de lo reseñado en el 3° considerando de la presente resolución, queda clara que el Colegiado para resolver la controversia de su competencia, debía, en principio, determinar si le asistía o no a la parte accionante derecho de propiedad sobre el bien materia de litis; sin embargo lejos de determinar ello, la Sala se limita a indicar que tal precisión no le resulta posible por una supuesta “confusa redacción del contrato”, y que el derecho de propiedad o no deberá ser determinado en la vía correspondiente, lo cual constituye un error porque el Colegiado tiene la obligación de interpretar el título del accionante ya sea aplicando el método objetivo, sistemático o teleológico, previstos en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, a fin de determinar si le asiste o no el derecho de propiedad, porque sólo así se estará pronunciando adecuadamente sobre uno de los puntos controvertidos fijados en la audiencia correspondiente. Caso contrario, no se estaría resolviendo dicho punto, lo que implicaría una contravención del principio de congruencia procesal establecido en el artículo

VII del Título Preliminar del C.P.C. e inc.4° del artículo 122 del Código acotado. **Sexto.**-Que, a lo expuesto debe añadirse que lo que no es materia de un proceso de desalojo por ocupación precaria, es la determinación a cuál de las partes le asiste mejor derecho de propiedad, para lo cual se requiere evidentemente que dichos sujetos procesales hayan acreditado derecho de propiedad sobre el mismo predio, pero ni siquiera ha sido determinado ni en forma positiva ni negativa en este proceso al accionante, pese a que ello constituye uno de los elementos centrales de la discusión jurisdiccional en este tipo de litis. **Sétimo.**-Que, de lo expuesto resulta evidente que se ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, siendo de aplicación lo establecido en el numeral 2.1 del inciso 2° del art. 396 del C.P.C.; que estando a las conclusiones arribadas declararon **FUNDADA** el Recurso de Casación interpuesto por doña Julia Aurora Urresti Torres; en consecuencia **NULA** la sentencia de vista de fs. 9, su fecha 19 de abril del 2001; **ORDENARON** al Órgano Jurisdiccional Inferior expedir nuevo fallo con arreglo a Ley; en los seguidos por Julia Aurora Urresti Torres con Víctor Saúl Polanco Sevilla y otra; sobre Desalojo por Ocupante Precario; y los devolvieron. SS. ECHEVARRIA A, LAZARTE H, ZUBIATE R, BIAGGI G., QUINTANILLA Q. C-30344
Fecha de Publicación: 02-02-02.

CASO Nº 5

CAS. Nº 881- 99 - ICA.

Lima, 10 de noviembre de 1999.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: en la causa vista de Audiencia Pública en la fecha del año en curso, con los acompañados, emite la siguiente sentencia: **MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del Recurso de Casación interpuesto por don Enrique De la Borda Parró y doña Sandra Woll Vda. De la Borda, por su propio derecho y como apoderada de sus hijos José Enrique De la Borda Woll, Sandra Verónica De la Borda Woll y Rodrigo de la Borda Woll, contra la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, obrante a fs. 925, su fecha 3 de marzo de 1999, que confirma la resolución que declara improcedente la tacha formulada por el abogado de la demandada; confirma la resolución que declara infundada las excepciones de caducidad y falta de legitimidad para obrar de la demandante, confirma la sentencia apelada de fs. 890, su fecha 23 de setiembre de 1998, que declara infundadas las observaciones contra el dictamen pericial propuesta por el abogado de los emplazados, y fundada en parte la demanda, la reforma en lo que respecta al tipo de moneda y fija el monto de las mejoras en 449, 398.87 nuevos soles; con los demás que contiene. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO:** La Corte mediante resolución de fecha 31 de mayo de 1999, ha estimado procedente el Recurso de Casación únicamente por la causal de inaplicación de los arts. 220 y 2120 del C.C. **CONSIDERANDO: Primero.-** Que, el art. 220 del C.C. es una norma de derecho procesal, pues establece quiénes están legitimados para solicitar la nulidad del acto jurídico. **Segundo.-** Que, consecuentemente, dicha norma jurídica no puede ser materia de la causal de inaplicación, la cual está reservada exclusivamente para normas de índole material. **Tercero.-** Que, por su parte, al invocarse el art. 2120 del Código Sustantivo, los recurrentes pretenden la aplicación de las normas contenidas en el C.C. de 1936, lo cual resulta contradictorio, pues en el primer extremo del recurso se pretende la aplicación de una norma del C.C. vigente. **Cuarto.-** Que, a mayor abundamiento, al fundamentarse ambas denuncias los impugnantes consideran que la demanda deviene en infundada, por lo dispuesto en la cláusula 7ª del contrato de arrendamiento celebrado entre los justiciables. **Quinto.-** Que, el contenido de los contratos no pueden ser materia de revisión en vía casatoria por cuanto de la interpretación de las cláusulas contractuales, no pueden extraerse consecuencias de alcance general que permita cumplir con los fines del extraordinario Recurso de Casación. **Sexto.-** Que, los límites de la sentencia casatoria están determinadas por el cumplimiento de los requisitos de fondo establecidos en el art. 388 del C.P.C., de ahí que en el presente caso no es posible emitir un pronunciamiento de mérito, pues el recurso no cumple con aquellos requisitos. **SENTENCIA:** Por las consideraciones que anteceden, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 397 del C.P.C., la Sala Civil de la Corte Suprema; declara **INFUNDADO** el Recurso de Casación interpuesto por don José Enrique De la Borda Parró y otros; en consecuencia **NO CASAR** la sentencia de vista de fs. 925, su fecha 3 de marzo de 1999, **CONDENARON** a los recurrentes al pago de una multa de 2 Unidades de Referencia Procesal, así como de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; en los seguidos por doña Nelly Miranda Ruiz de Castilla sobre pago de mejoras y otro concepto; **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. SS. PANTOJA, IBERICO M, OVIEDO DE A, CELIS, ALVA.

CASO Nº 6

SENTENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE LIMA EXP. Nº 53822-97

Lima, 16 de setiembre de 1998.

Vistos; Resulta de autos, que por escrito de fojas 37 y siguientes, subsanada por escrito de fojas 49 y siguiente, don Antonio León Mosquito y Lidia Santos Mosquito de León, interpone demanda contra el Banco, José Darío Hernández y otro a efectos de que se declare la nulidad de Escritura de Constitución de Hipoteca y el acto que la contiene de fecha 4 de julio de 1995 ante el Notario José Laos de Lama, sobre su casa sita en la calle Los Algarrobos Nº 108 y 110 del distrito de San Martín de Porras; señala como fundamento de hecho que los sorprendió que se colocara unos carteles de remate en su casa referida ordenados en el proceso que el Banco los sigue por ante el Décimo Tercer Juzgado Civil Transitorio de Lima y que realmente no conocen al supuesto apoderado José Darío Hernández Jiménez que constituyó una hipoteca a sus nombres y que jamás han tenido ninguna relación con la beneficiada JHM Contratistas Generales SRLtda. Cuyas obligaciones aparecen garantizando con la hipoteca por la cuantiosa suma de U.S. \$ 58,000.00 y que la pretensión que interponen la sujetan al texto del mandato por no haber sido declarada su invalidez y por haber sido utilizado por el supuesto apoderado referido y que se advierte que tal acto jurídico está afectada de nulidad absoluta e ineficacia, toda vez que en dicho mandato no se precisa el monto siendo por lo tanto no indubitable además de otras razones que exponen; por lo que interponen la presente demanda; Admitida de fojas 56 fue notificada a las partes conforme a ley; Por escrito de fojas 81 a 92 el Banco Santander se apersona al proceso y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos señalando además que la hipoteca materia de la nulidad se constituyó a través de representante de los demandados otorgado por Escritura Pública y se realizó cumpliendo todos los requisitos legales con los demás fundamentos de hecho y derecho que allí se exponen; Por resolución de fojas 93 se tuvo por contestada la demanda; Por resolución de fojas 96 se declaró rebelde a la co-demandada JHM Contratistas Generales S.R. Lta, y se señaló fecha para la audiencia de saneamiento procesal y conciliación; Por resolución de fojas 109 se integra la resolución número 5 declarándose también rebelde al codemandado Darío Hurado Jiménez; Por resolución de fojas 119 se corrige nombre del co-demandado Darío Hernández Jiménez y se señala nueva fecha para la audiencia respectiva, la cual se reprograma por resolución de fojas 126; Por resolución de fojas 133 se traslada pedido de los demandantes; Por escrito de fojas 144 el co-demandado José Darío Hernández Jiménez se apersona al proceso y solicita se sobrecarte auto admisorio; Por resolución de fojas 154 se declara improcedente lo solicitado. Por resolución de fojas 165 se ordena poner a conocimiento de la parte demandante la devolución de cédula que se hace; Por escrito de fojas 168 el co-demandado Banco Santander deduce nulidad el cual se corre traslado a la parte demandante por resolución de fojas 175; Por resolución de fojas 177 se señala nueva fecha de audiencia; Por resolución de fojas 183 se pone a conocimiento de la parte demandante la devolución de cédula efectuada; Por resolución de fojas 184 se señala nueva fecha de audiencia; Por resolución de fojas 208 se declara improcedente la nulidad deducida; A fojas 224 y 226 obra el acta de audiencia de saneamiento procesal y conciliación donde se declara saneado el proceso, se prescindió proponer fórmula conciliatoria, se fijó el punto materia de controversia y se admitieron los medios probatorios señalándose fecha para la audiencia de pruebas; Por resolución de fojas 258 se traslada a la parte demandada el ofrecimiento del medio probatorio extemporáneo; A fojas 265 obra el acta de actuación de medios probatorios donde se le concedió a las partes el término de alegatos, habiéndolo hecho las partes apersonadas; Por escrito de fojas 294 se absuelve el traslado conferido y por resolución de fojas 296 se declara improcedente el ofrecimiento de medios probatorios

extemporáneos; Por escrito de fojas 316 los demandantes formulan apelación la misma que se concede por resolución de fojas 319 sin efecto suspensivo y con calidad de diferida ordenándose traerse los autos para la sentencia; Por resolución de fojas 320 se ordena sobrecartar a las partes el escrito de fojas 133; Por resolución de fojas 339 se tiene por absuelto el traslado conferido ordenándose tener presente al momento de sentenciar; por lo que los presentes autos se encuentra en estado de emitir sentencia; **y CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Que el artículo 160 del Código Civil establece que el acto jurídico celebrado por el representante, dentro los límites de las facultades que se haya conferido, produce efecto directamente respecto del representado; que asimismo el inciso 1 del artículo 167 del mismo cuerpo de leyes establece que los representantes legales requieren autorización expresa para disponer o gravar los bienes del representado; **SEGUNDO.-** Que conforme aparece del testimonio de escritura pública de poder especial que corre de fojas 3 a 5 del expediente, los demandantes otorgaron poder especial a favor de don José Darío Hernández Jiménez, para que en su nombre y representación, hipotecara, gravara, o pusiera en garantía a favor de entidades ya sean bancarias, financiera o de otra índole el inmueble ubicado en el jirón Los Algarrobos número 108, lote 6, manzana V, Urb. Los Jardines del distrito de San Martín de Porres; que si bien los demandantes han cuestionado dicho poder indicando que no correspondió a la realidad de su intención, no lo es menos que los demandantes no han demandado expresamente en el presente proceso la invalidez del mencionado poder, sino tan sólo de la constitución de la hipoteca cuyo testimonio corre a fojas 614 del principal, celebrada por el mencionado José Darío Hernández Jiménez en representación de los demandantes a favor del Banco Mercantil, con intervención de la firma J.H.M. Contratistas Generales S.A.; **TERCERO.-** Que dicho poder se autorizó en su cláusula segunda, en forma expresa, para que el apoderado suscribiera los documentos para tales efectos, tales como la escritura y sus aclaraciones de ser necesarias; **CUARTO.-** Que siendo ello así no puede inferirse que se haya incurrido en causal de nulidad por exceso en las atribuciones del representante en la constitución de hipoteca antes referida, puesto que en el poder no se indicó que la facultad de otorgar en garantía el inmueble fuera únicamente para deudas u obligaciones de los demandantes, ni hasta por un monto determinado, ni que debiera señalarse expresamente en cualquier posterior hipoteca el domicilio real de los demandantes y no del representante; que en todo caso, se debieron haber limitado los alcances del poder en forma expresa, puesto que conforme establece el artículo 168 del Código Civil, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de buena fe; que en tal sentido, la buena fe protege a quien realiza un acto jurídico basado en la expresión de voluntad exteriorizada, tal como lo ha hecho el Banco Mercantil, ahora absorbido por el Banco Santander-Perú; **QUINTO.-** Que por lo tanto, la pretensión resulta improbadada debiendo desestimarse la pretensión conforme lo establece el artículo 200 del C.P.C.; por cuyos fundamentos y administrando justicia a nombre de la nación; **FALLO: DECLARANDO INFUNDADA** la demanda, su fecha 16 de setiembre de 1997; con costas y costos; en los seguidos por don Antonio León Mosquito y otra contra el Banco Santander y otros sobre nulidad de Constitución de Hipoteca.

SENTENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

EXP. Nº 53822-97

PAG. 581.

Lima, 27 de enero de 1999.

VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el señor Zalvidea Queirolo; por sus fundamentos; y **CONSIDERANDO:** además: **Primero.-** Que, según es de verse de la resolución de fojas 319, ha sido también elevado en grado de apelación conjuntamente con la sentencia, la resolución de fojas 296, su fecha 25 de mayo de 1998, que declara improcedente el ofrecimiento de la prueba ofrecida por la parte demandante, en su escrito de fojas 256, consistente en el mérito del Atestado Nº 503-IC-DIEF-08, que en copia obra de fojas 233 a 254, por lo que es menester primero emitir pronunciamiento al respecto; que siendo ello así, y teniendo en cuenta que lo actuado en el Atestado Policial no constituye hecho nuevo alguno sino más bien se circunscribe a las declaraciones tres de las partes en este proceso, en el ámbito policial, que incluso tiene fecha 24 de setiembre de 1994, esto es con anterioridad a la demanda, que ha sido interpuesta con fecha 16 de setiembre de 1997, por lo que no reflejando lo actuado en el mismo hecho nuevo alguno suscitado con

posterioridad a la presentación de la demanda y su contestación, la Resolución de fojas 296, debe ser materia de ratificación por esta Sala; **Segundo.-** Que, por la demanda de fojas 37, los demandantes persiguen se declare la nulidad de la Escritura Pública de Contestación de Hipoteca otorgada a favor del Banco Mercantil, y del acto que le contiene de fecha 4 de julio de 1995, cuyo testimonio corre de fojas 7 a 14, celebrado ante la Notaría Eduardo Laos de Lama, respecto del inmueble de su propiedad sito en la calle los Algarrobos N° 108 y 110 del distrito de San Martín de Porres; por referir que la persona del co-demandado don José Darío Hernández Jiménez, su supuesto Apoderado, persona a quién no conocen, constituyó la hipoteca a su nombre, para garantizar obligaciones por U.S. \$ 58,000.00, con intervención de JHM Contratistas Generales SRLtda., el que no tenía encargo indubitable para garantizar con la hipoteca obligaciones de terceros; **Tercero.-** Que, conforme es de verse de la Escritura Pública del Poder Especial de fojas 4 y 5, debidamente inscrito en los Registros Públicos los demandantes en la cláusula primera del mismo otorgaron Poder Especial a favor de don José Darío Hernández Jiménez, para que en sus nombres y representación, hipoteque, grave o ponga en garantía a favor de entidades ya sean Bancarias, Financieras o de otra índole el inmueble de su propiedad; que como se desprende de dicha cláusula en ella no se señala que dicha facultad de dar en garantía el bien fuera sólo para derechos u Obligaciones de los actores, ni hasta por un monto determinado ya que la faculta de hipoteca ahí expresada no tiene limitación en cuanto al monto o que éste no pudiera garantizar obligaciones a favor de terceros, por lo que no teniendo por tanto dicho poder limitación alguna con respecto a dichas facultades no puede argüirse que el mandato de los demandantes, al constituir la hipoteca a favor del Banco demandado respecto del bien inmueble de propiedad de los demandantes, haya hecho excediéndose de los límites de la misma, como para que dicho acto jurídico se encuentra afectado de nulidad; por lo que la demanda no puede ampararse. Por cuyas razones: **CONFIRMARON** el auto apelado de fojas 296, su fecha 25 de mayo de 1998, que declara improcedente el ofrecimiento de medios de Prueba ofrecidos por el demandante en su escrito de fojas 256 por extemporáneo; y **CONFIRMARON** también la sentencia apelada de fojas 358, su fecha 16 de setiembre de 1998, que declara infundada la demanda de fojas 37, subsanada a fojas 49; con costas y costos; y los devolvieron; en los seguidos por don Antonio León Mosquito y Otros con Banco Santander y Otro, sobre Declaración Judicial.

CAS N° 765-99 LIMA

Lima, 21 de mayo de 1999.

VISTOS; a que de lo actuado aparece que don Antonio León Mosquito ha cumplido con todos los requisitos de forma para la admisión del Recurso de Casación, y **ATENDIENDO:** **Primero.-** Que en el escrito de fojas 451, al amparo de los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 386 del C.P.C. el recurrente denuncia: a) La interpretación errónea del artículo 160 del Código Civil, pues al aplicarse en el presente caso debe considerarse como una norma genérica, ya que tratándose específicamente de actos de disposición y gravamen, debe aplicarse la norma en concordancia con el artículo 156 del Código Civil; b) La inaplicación del artículo 156 del Código Civil, desde que dicha norma exige que en el acto celebrado por poder, el encargo debe constar de manera indubitable, siendo que del poder obrante en autos no consta que la facultad de otorgar hipotecas incluía la de decidir o escoger el tipo de obligación o garantizar sin autorización de los poderdantes, no constando tampoco de forma expresa el encargo para garantizar obligaciones de terceros; c) la inaplicación del inciso 2º del artículo 167 del Código Civil que establece que los representantes legales requieren de autorización expresa para disponer y gravar los bienes de su representado; y d) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al considerarse en la recurrida que el atestado policial ofrecido como prueba relativa a hechos nuevos no lo son, pese a que dicho medio probatorio ha sido apreciado en otro proceso seguido entre las mismas partes, vulnerándose así lo dispuesto en los artículos 429, 188 y 1º del Título Preliminar del C.P.C. **Segundo.-** Que la denuncia por interpretación errónea persigue una nueva valoración sobre el contenido de la cláusula Primera de la Escritura de Poder Especial de fojas 3. **Tercero.-** Que ocurre lo mismo con la denuncia por inaplicación del artículo 156 del Código Civil, dado que mediante esta denuncia se persigue que se vuelva a valorar si del contenido de la cláusula primera del aludido contrato fluye o no el otorgamiento de la facultad de otorgar la hipoteca cuya nulidad se persigue. **Cuarto.-** Que la

denuncia por inaplicación del inciso 2º del artículo 167 del Código Civil también tiene el mismo propósito. **Quinto.**-Que la interpretación del contenido de determinada cláusula contractual a fin de determinar cuál fue la intención de las partes al redactarla, es una tarea de las instancias de mérito, pues la labor de la Corte cuando conoce en vía de casación se circunscribe a las cuestiones de iure o de derecho con expresa exclusión de la apreciación probatoria. **Sexto.**-Que la denuncia in procedendo tampoco puede prosperar pues fluye que la prueba ofrecida fue emitida con anterioridad a la presentación de la demanda por lo que mal puede calificarse como un hecho nuevo en los términos del artículo 429 del C. P.C. **Sétimo.**-Que, en consecuencia, no se satisface a cabalidad el requisito de la debida fundamentación a que se refiere el inciso 2º del artículo 388 del C.P.C.; por estas razones y en uso de la facultad contenida en el artículo 392 del aludido Código Procesal; declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto a fojas 451 por don Antonio León Mosquito, en los seguidos con el Banco Santander-Perú y otros sobre Nulidad de Acto Jurídico; **CONDENARON** al recurrente al pago de la multa de 3 de Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

CASO 7

CUANDO EXISTE DUDA SOBRE SI EN EL TESTAMENTO SE DESIGNÓ A LOS HEREDEROS. La interpretación del testamento: criterios a tener en cuenta²⁶².

SUMILLA: “La ejecutoria expedida por el Tribunal Registral, nos muestra la manera como se aborda y resuelve un problema interpretativo de la voluntad del causante, en el cual se puso en duda que el testador hubiera establecido sus herederos en el testamento. Debe destacarse que la jurisprudencia deja señalado que, aun cuando nuestro Código Civil no tiene disposiciones específicas sobre interpretación de testamentos, sus normas generales de interpretación de actos jurídicos resultan de aplicación supletoria en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los testamentos”.

RESOLUCIÓN Nº 252-98-ORLC/TR

Lima, 23 de julio de 1998

VISTA, la apelación interpuesta por don ALEJANDRO MANCHEGO PELLANNE (Hoja de Trámite Documentario Nº 11603 de fecha 15 de mayo de 1998) contra la observación efectuada por la registradora pública del Registro de Personas Naturales de Lima, Dra. Silvia Carolina Barahona Mendoza, a la solicitud de ampliación del asiento de testamento, en mérito a partes notariales. El título de presentó el 1 de abril de 1998 con el Nº 54399. La registradora denegó la solicitud de inscripción por cuanto: “Se reitera la observación formulada, toda vez que no es clara la voluntad del testador, según se desprende del propio tenor del instrumento adjunto, ya que no menciona expresamente cuáles son sus herederos (artículo 734 del C.C. y artículo 686 del C.C. de 1936). Por lo que no es posible mencionar en la inscripción respectiva a los herederos, dado que estos no han sido instituidos”; interviniendo como vocal ponente la Dra. Elena Vásquez Torres; y, **CONSIDERANDO:** Que, mediante el título venido en grado, el apelante solicita la ampliación del asiento del testamento de don Teodorico Manchego Muñoz, fallecido el 12 de enero de 1984, en mérito al parte notarial del testamento en escritura pública otorgado el 6 de julio de 1974 ante el notario de Lima, Dr. Enrique Costa Sáenz, e inscrito en la Ficha Nº 2524 que continua en la partida electrónica Nº 22980742 del Registro de Testamento de Lima; Que, el apelante sustenta su recurso en el hecho de que si bien no se ha usado la palabra “instituyo” o “heredero o herederos”, en la cláusula décimo cuarta del testamento se expresa de manera indubitable la voluntad de la institución hereditaria en su cónyuge doña Manuela Pellanne Espinoza y en sus hijos Carlos Alberto Manchego Bravo, María Antonia, Alejandro, Julio César y Rosa Nelly Manchego Pellanne; Que, el causante falleció durante la vigencia del Código Civil de 1936, en tal sentido y en estricta aplicación del artículo 2117 del Código Civil vigente, la presente sucesión testamentaria se rige por las normas del anterior cuerpo legal; Que, el Código Civil de 1936 disponía en su artículo 686 que “la institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta y solo puede hacerse en testamento”; Que, el precitado dispositivo no solo prescribía una formalidad ad solemnitatem, para la validez del testamento, sancionado con nulidad su incumplimiento de conformidad con el inciso 3) del artículo 1123 del referido Código Civil, sino que exigía adicionalmente certeza en el nombramiento del heredero, es decir, que sea indubitable la persona designada como tal; Que, la figura de la institución de herederos consiste en el nombramiento o designación que el testador hace de la persona o personas que le sucederán después de su muerte; sin embargo, debe precisarse que en estricto está referida a los herederos voluntarios o legatarios, por cuanto tratándose de herederos forzosos operan las disposiciones sobre la legítima, derecho que encuentra justificación en la ley y no en la liberalidad de la voluntad del testador; Que, en el caso sub materia, el causante declaró en las cláusulas segunda y tercera de su testamento ser casado con la señora Manuela Pellanne Espinoza, en cuyo

²⁶² Tomado de: DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, Año 9, Numero 58, Julio 2003. Pág. 107-109.

matrimonio tuvieron seis hijos, dos de ellos fallecidos al nacer, siendo los cuatro restantes: María Antonia, Alejandro, Julio Cesar y Rosa Nelly Manchego Pellanne, y además, un hijo natural llamado Carlos Alberto Manchego Bravo; Que, las personas señaladas tienen derecho a la legítima, parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, salvo los casos expresamente determinados, porque la ley se lo confiere aunque el causante no los designe sus sucesores de conformidad con los artículos 700 y siguientes del Código Civil de 1936; Que, si bien en la redacción del testamento, el causante omitió consignar la frase: “instituyo como herederos a”, no es menos cierto que en las disposiciones testamentarias subsiguientes manifiesta: “cláusula quinta: Declaro tener una casa(...) adquirido dentro del matrimonio(...) situada en le Parque Gonzáles Prada; cláusula octava: (...) dejo un seguro de (...) los que deben ser recogidos por mis herederos (...); cláusula novena: (...) el auxilio mutual(...) que acuerda el Colegio de Abogados(...) será recogido por mis herederos a efecto de que se repartan de acuerdo a ley; cláusula décima: seguro (...) que dejo para mi esposa Manuela Pellanne ya que todos mis hijos son mayores de edad; cláusula décima cuarta: Declaro que es mi voluntad y confió en la nobleza de mis hijos, que mientras viva su madre, contribuyan a que la casa en el Parque González Prada sea ocupada por ella (...) salvo acuerdo voluntario de madre e hijos; cláusula décima quinta: Declaro que los dos haberes mensuales (...) se hagan efectivo por mis herederos, con el fin de que se apliquen a los gastos modestos de mi entierro”; evidenciándose en forma indubitable la voluntad testamentaria de designar a su esposa e hijos como sus sucesores, vale decir, en el presente caso, no hay ausencia de nombramiento ni se ha prescindido de los legitimarios o herederos forzosos, estos han sido señalados en la segunda y tercera cláusula del testamento; Que, el aspecto que refuerza la procedencia de la inscripción del título venido en grado, es que si bien no siempre el legitimario es heredero porque puede haber recibido su legítima por acto *intervivos*, no menos cierto es que el testador, en otras cláusulas del testamento, ha dispuesto de todos sus bienes sin privar a su esposa e hijos de la legítima y sin designar a otros sucesores, ya sea como herederos voluntarios o legatarios, tampoco indica que ha pagado la legítima de los mismos con legados o con bienes extrahereditarios; de lo que se concluye que se está frente a una situación ordinaria en la que los legitimarios son también herederos; Que, en tal sentido, si bien el Código Civil no contiene disposiciones específicas sobre la interpretación de los testamentos, resulta supletoriamente aplicables, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de esta declaraciones “mortis causa”, las normas generales de interpretación de los actos jurídicos, entre las cuales se encuentran los artículos 168 y 169 del mismo Código, que estipulan que dicha interpretación debe efectuarse de acuerdo con lo expresado en él y según el principio de buena fe, atribuyéndose a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas; Que, Lohmann Luca de Tena al referirse a las reglas particulares de interpretación de los testamentos menciona el principio de conservación del testamento que busca la subsistencia y utilidad de los efectos de sus disposiciones y que opera en favor de la máxima eficacia de las cláusulas dudosas; este principio interesa en los casos en que la disposición admite varias interpretaciones, y una de ellas permite la validez y aplicación de la disposición y la otra conduce a su ineficacia o menor utilidad, el hermeneuta debe optar por la primera, siempre que no resulte incompatible con la voluntad notoria del testador; y el principio de equivalencia de beneficio entre dos o más sujetos llamados a suceder, señala que la finalidad de tal principio apunta a evitar que la disposición testamentaria se invalide por no haberse expresado el causante con claridad, atribuyendo de esta manera a la disposición que es más conforme a la voluntad del testador antes que anular la atribución, señalando además que contra dicho principio no debe prevalecer una aplicación literal del artículo 734 del Código Civil de 1984 (que tiene como antecedente al referido artículo 686 del Código Civil de 1936), según el cual la institución de heredero o legatario debe recaer en persona cierta designada de manera indubitable por el testador, manteniéndose contrario a aquellas tesis que consideran que para los supuestos de institución a que se refiere la norma no cabe interpretación alguna y que el testador debe designar con certeza e indubitablemente a sus sucesores, bajo pena de nulidad, como postulan algunas legislaciones. (“Derecho de Sucesiones” VOL. XVII-Tomo II, Pág.236. Fondo Editorial 1996-Pontificia Universidad Católica del Perú); Que, además debe tenerse en cuenta que el apelante es uno de los albaceas nombrados por el testador, quien puede interpretar el testamento porque esta facultad es inherente a su función, pues sin interpretación no podría darse cumplimiento a las disposiciones testamentarias; sin perjuicio del derecho de los herederos de impugnar la interpretación

realizada por el albacea (ob. Cit. Pág. 246); Que, en concordancia con lo expuesto en los considerandos precedentes, así como en la Resolución N° 434-97-ORLC/TR del 16 de octubre de 1997 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2011 del Código Civil, el Numeral IV del Título Preliminar y artículos 150 y 151 del Reglamento General de los Registros Públicos; y, Estando a lo acordado; **SE RESUELVE: REVOCAR** La denegatoria de inscripción formulada por la registradora pública del Registro de Personas Naturales de Lima a la solicitud referida en la parte expositiva, y disponer su inscripción por los fundamentos expuestos en la presente resolución. Regístrese y Comuníquese. (Fdo.) – Dra. Elena Vásquez Torres, presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Registral.- Dr. Walter Poma Morales, vocal del Tribunal Registral.- Dr. Luís Aliaga Huaripata, vocal (e) del Tribunal Registral.

CASO Nº 8

LOS LIMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTOS: Voluntad testamentaria y rectificación de testamento²⁶³.

Sumilla: Si una persona otorga dos testamentos, y el segundo testamento contiene una modificación a la voluntad expresada en el primero, la interpretación de esta voluntad debe hacerse en función de lo que se haya expresado en la cláusula testamentaria. En ese sentido, la resolución del Tribunal Registral que se comenta permite diferenciar los límites de los alcances de la interpretación testamentaria; y muy vinculado a este tema, la procedencia del trámite de una solicitud de rectificación de testamento en la vía administrativa, distinguiéndose de las rectificaciones de testamento que deben hacerse judicialmente.

RESOLUCIÓN Nº 212-98-ORLC/TR.

Lima, 29 de mayo de 1998.

VISTA, la apelación interpuesta por María Nelly Ruesta Angulo De Prosser (Hoja de Trámite Documentario Nº 10685 de fecha 8 de mayo de 1998) contra la denegatoria de rectificación de oficio formulada por la registradora pública del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, Dra. Gloria Amparo Salvatierra Valdivia. La solicitud se presentó mediante Hoja de Trámite documentario Nº 7419 del 1 de abril de 1998. La Registradora denegó la rectificación por cuanto: “Visto el título archivado donde corre el testamento otorgado por doña Mercedes Agripina Angulo Ramírez, y que, diera origen al asiento 1-C de la ficha 1718679 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, señala que Petronila del Rosario Murguicila y Carmen Teresa Gálvez Vargas son herederos del inmueble ubicado en el Distrito de Miraflores; y que María Nelly Ruesta Angulo de Prosser además de ser nombrada albacea sería heredera de bienes muebles y enseres. (Cláusula cuarta del testamento de fecha 25/09/97...”); interviniendo como Vocal ponente el Dr. Jorge Luis Gonzales Loli; y,

CONSIDERANDO: Que, mediante escrito de fecha 31 de marzo de 1998, presentado a través de Hoja de Trámite Documentario Nº 7419 del 1 de abril de 1998, María Nelly Tuesta Angulo de Prosser solicita la rectificación de oficio del asiento 1-C de la ficha Nº 1718679 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, en el sentido que se consigne su calidad de coheredera del inmueble ubicado con frente a la Calle Bellavista Nº 112-120 del distrito de Miraflores; Que, consta en el asiento cuya rectificación se solicita que doña Petronila del Rosario Murguicila y doña Carmen Teresa Gálvez Vargas, han adquirido la propiedad del citado inmueble, en su calidad de herederas de la anterior titular de dominio doña Mercedes Agripina Angulo Ramírez, fallecida el 5 de diciembre de 1997, en mérito al testamento en escritura pública de fecha 15 de noviembre de 1982 otorgada ante el notario de Lima, Dr. Felipe de Osma Elías, modificado según escritura pública de fecha 25 de setiembre de 1987 extendida ante el Notario de Lima, Dr. Javier Aspauza Gamarra; Que, aparece del testamento en escritura pública del 15 de noviembre de 1982, otorgado por doña Mercedes Agripina Angulo Ramírez, obrante en el título archivado Nº 19937 del 4 de febrero de 1998, que la testadora declaró ser propietaria del cincuenta por ciento del inmueble antes mencionado, expresando no tener herederos forzosos e instituyendo como herederas universales en partes iguales a su sobrina Nelly Ruesta Angulo de Prosser y a las señoritas Petronila del Rosario Murguicila y Carmen Teresa Gálvez, asimismo declaró que era su voluntad que mientras permaneciera con vida su hermana Livia Zoraida Angulo Ramírez se mantuviera la indivisión del inmueble submatría; Que, posteriormente, a través de la escritura pública del 25 de setiembre de 1987, materia del mismo título archivado a que se refiere el considerando precedente, la causante amplió y modificó las referidas disposiciones testamentarias, expresando en la cláusula tercera de dicho instrumento

²⁶³ Tomado de: DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, Año 11, Nº 87, Diciembre 2005. Pág. 99 - 101.

público que modificaba su voluntad en cuanto al nombramiento de herederos y a los bienes que a cada uno les correspondería, y siendo que a esa fecha había adquirido la totalidad del mencionado inmueble, nombró como únicas herederas de dicha propiedad a las señoritas Petronila del Rosario Murguicila y Carmen Teresa Gálvez Vargas (cláusula cuarta), declarando, además, que también instituía como heredera a su sobrina María Nelly Ruesta Angulo de Prosser, y que los bienes y enseres que se encontrasen en su domicilio serían para dicha sobrina y para las citadas Petronila y Carmen Teresa; Que, atendiendo al texto de las aludidas disposiciones testamentarias, puede determinarse que la rectificación solicitada no se encuentra comprendida dentro de los supuestos de error material en los asientos de inscripción previstos en el artículo 177 del Reglamento General de los Registros Públicos, susceptibles de rectificación de oficio por el registrador conforme al artículo 175 del mismo Reglamento, en cuanto el error cuya existencia alega el apelante, no se referiría a defectos u omisiones en la transcripción de las mencionadas disposiciones, sino más bien se orientaría a cuestionar la interpretación efectuada por la registradora respecto a las atribuciones patrimoniales específicas contenidas en el acto de última voluntad de la causante; Que, no obstante lo expuesto en relación a la inaplicabilidad de las disposiciones sobre rectificación de oficio de errores materiales a la solicitud materia de alzada, ello no agota la discusión respecto de los alcances de la rectificación de los asientos registrales, dado que resulte pertinente analizar la posibilidad de la existencia de un error de concepto en la extensión del asiento 1-C de la Ficha 1718679 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, y de ser el caso, sí el mismo resultaría susceptible de ser rectificado en virtud del mismo título ya inscrito o se requeriría el consentimiento de los interesados o mandato judicial, en armonía con la normas establecidas por los artículos 178 y 180 del Reglamento General de los Registros Públicos; **Que, en tal sentido, si bien el Código Civil no contiene disposiciones específicas sobre la interpretación de los testamentos, resultan supletoriamente aplicables, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estas declaraciones mortis causa, las normas generales de interpretación del acto jurídico, entre las cuales se encuentran los artículos 168 y 169 del mismo Código, que estipulan que dicha interpretación debe efectuarse de acuerdo con lo expresado en él y según el principio de la buena fe, atribuyéndose a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas;** Que, en relación al primer criterio antes mencionado, la voluntad expresada en forma literal por la testadora (cláusula cuarta de la Escritura Pública de 25 de setiembre de 1987) es que sean únicas herederas del inmueble las señoritas Petronila del Rosario Murguicila y Carmen Teresa Gálvez Vargas, no desprendiéndose de las demás disposiciones testamentarias que la inclusión como heredera de María Nelly Ruesta Angulo de Prosser modifique la decisión de la causante respecto al sentido excluyente que el término “únicas” implica respecto a la atribución de titularidad patrimonial del predio ubicado en la Calle Bellavista N° 112-120 del distrito de Miraflores, siendo inclusive que puede sostenerse que al referirse la institución sucesoria a un bien concreto y no a la totalidad o cuota parte de los bienes, derechos y obligaciones de la herencia, su naturaleza respecto a este bien sería más próxima a la del legado, en aplicación de los artículos 735 y 756 del Código Civil, debiendo tenerse en cuenta, también, que el error del testador en la denominación de uno u otro no modifica la naturaleza de la disposición; Que, inclusive, aunque se sostenga que la expresión antes mencionada no enervaría el hecho que al haber sido también designada heredera doña María Nelly Ruesta Angulo de Prosser debe concurrir sobre la integridad del patrimonio hereditario, incluyendo el citado bien inmueble, el mencionado carácter de atribución de titularidad única del mismo a dos de los tres sucesores testamentarios, podría entenderse como un supuesto de partición parcial realizada por el causante conforme al artículo 852 del Código Civil, cuyo supuesto tampoco permitiría que la impugnante pueda atribuirse derecho de propiedad respecto al predio inscrito en la Ficha N° 1718769; Que, en cuanto se refiere a una interpretación sistemática del testamento, puede apreciarse que la cláusula tercera de la escritura pública del 25 de setiembre de 1987 contiene la expresión específica de modificar su voluntad anterior (testamento en escritura pública de fecha 15/11/82) que instituía a María Nelly Ruesta Angulo de Prosser, Petronila del Rosario Murguicila y Carmen Teresa Gálvez Vargas como herederas en partes iguales, declarando la testadora que la modificación comprendía tanto al nombramiento de herederos y a los bienes que a cada uno les corresponderá, lo que resulta concordante con la asignación del bien inmueble a solo dos de las sucesoras y de los bienes y enseres del domicilio del causante a todas ellas, debiendo precisarse que de interpretarse el testamento de la forma que plantea la recurrente, se llegaría al mismo efecto

de la voluntad testamentaria anterior, es decir a la existencia de tres herederos en partes iguales, en cuyo caso no sería explicable que la testadora hubiera otorgado la escritura modificatoria antes mencionada, ni la existencia de las indicadas cláusulas; Que, adicionalmente, resulta conveniente tener en cuenta que la interpretación de los testamentos reviste caracteres especiales derivados de la circunstancia que la voluntad del testador no puede renovarse o aclararse por su autor, por lo que, como indica Guillermo Lohmann Luca de Tena, debe darse **“preferencia a la voluntad sobre la declaración, siempre que esta voluntad aparezca efectivamente manifestada, siquiera de una manera imperfecta o no acorde con los criterios generales”** y que **“siempre supuesta la existencia de duda, en la interpretación gramatical debe preconizarse una interpretación más restrictiva que extensiva, porque la última puede acaso hacer aparecer una voluntad donde tal vez no existiera en lo absoluto”** (Guillermo Lohmann Luca de Tena, “Derecho de Sucesiones” Vol. XVII- Tomo II, Biblioteca Para Leer el Código Civil Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996, págs. 238 241), siendo que la voluntad expresada por la testadora, sin perjuicio de la posible existencia de inexactitudes terminológicas, resulta clara en la atribución dominial del inmueble solo a favor de dos de sus sucesores, no resultando procedente que en sede registral se interprete en forma extensiva la existencia de una voluntad diferente que beneficie también a doña María Nelly Ruesta Angulo de Prosser; Que, de todo lo expuesto se colige que no existen elementos para determinar que el asiento 1-C de la Ficha N° 1718679 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima contiene un error de concepto respecto a la voluntad testamentaria contenida en el título archivado N° 19937 del 4 de febrero de 1998, y en el supuesto que este existiera, provendría de la redacción vaga, ambigua o inexacta del título primitivo, por lo que en estricta observancia del artículo 180 del Reglamento General de los Registros Públicos y habida cuenta que el testador ya no puede aclarar su acto de última voluntad, la rectificación en los términos que se solicita solo podría lograrse a través de mandato judicial firme que contenga una interpretación jurisdiccional diferente; Que, en concordancia con lo expuesto en los considerandos precedentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2011 del Código Civil, el Numeral IV del Título Preliminar y artículos 150 y 151 del Reglamento General de los Registros Públicos no resulta procedente amparar la solicitud de inscripción objeto del recurso; y, Estando a lo acordado; **SE RESUELVE: CONFIRMAR** la denegatoria de rectificación formulada por la registradora pública del Registro de Propiedad Inmueble de Lima a la solicitud referida en la parte expositiva, por los fundamentos expresados en la presente Resolución. Regístrese y comuníquese. **(Fdo)** Dra. Martha Silva Díaz, Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Registral.- Dr. Walter Poma Morales, Vocal del Tribunal Registral.- Dr. Jorge Luís Gonzales Loli, Vocal (e) del Tribunal Registral.